



UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL CUCUTA
NIT. 860.013.798-5

ACTA DE SUSTENTACIÓN
(008 de 21 de Mayo de 2018)

No. 008-2018

En San José de Cúcuta, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), se reunieron los docentes **CARLOS ALBERTO COLMENARES URIBE** y **CARLOS ARMANDO VARON PATIÑO**, para realizar el examen de sustentación del trabajo de grado TITULADO **“REGLAS DE PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: ANOMIAS Y UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN”** Trabajo realizado por las estudiantes **DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL**, **JESSICA TATIANA JIMENEZ ESCALANTE** y **DANIELA RAMIREZ LOPEZ**, requisito indispensable para optar el título de **ABOGADO**.

Una vez examinados los estudiantes **DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL**, **JESSICA TATIANA JIMENEZ ESCALANTE** y **DANIELA RAMIREZ LOPEZ**, el jurado de común acuerdo calificó el examen así:

LAUREADO

Según información anexa de los jurados.

Dada en San José de Cúcuta, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018).


SANDRA ZULAY GARCÍA CONTRERAS

Secretaria Académica Seccional
Facultad de Derecho,
Ciencia Política y Sociales





**UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
SECCIONAL CÚCUTA
BIBLIOTECA “MANUEL JOSÉ VARGAS DURÁN”**

RESUMEN – TRABAJO DE GRADO

DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL
JESSICA TATIANA JIMÉNEZ ESCALANTE
DANIELA RAMÍREZ LÓPEZ

AUTOR(ES) NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

FACULTAD

RONALD JESÚS SANABRIA VILLAMIZAR

DIRECTOR

REGLAS DE PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN
EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: ANOMIAS Y UNA PROPUESTA DE
SOLUCIÓN

TÍTULO

RESUMEN

El presente trabajo de grado tiene el propósito fundamental de analizar las reglas de producción probatoria de la declaración de parte a partir de su consagración en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), que en su artículo 165 establece en la lista enunciativa de medios de conocimiento de los cuales han de valerse las partes y quien administre justicia, a la declaración de parte como un medio de prueba autónomo e independiente de la confesión, que tradicionalmente había sido el medio utilizado para ofrecer el dicho de la parte en el proceso, pero sólo respecto de lo que le era desfavorable a las pretensiones o excepciones de ésta.

No obstante, el avance en materia probatoria que se ha dado en el derecho procesal nacional con la Ley 1564 de 2012, entendiendo que el relato de la parte sobre los hechos del litigio puede ser de gran utilidad para la resolución del conflicto, no se definieron en el mencionado texto legal reglas claras que permitieran producir como medio de conocimiento los dichos de las partes. Problemática que resulta relevante en la medida de que, en la práctica judicial, la indefinición de las reglas de producción probatoria genera una notable inseguridad jurídica, con la que ni las partes ni el juzgador tienen claridad respecto de su procedencia y lo que debe ocurrir en cada una de las etapas del *íter* probatorio: solicitud, decreto, práctica y valoración.

Desde el panorama planteado, donde el texto normativo del Código General del Proceso presenta una serie de anomalías derivadas de la indeterminación de los requerimientos necesarios para entender con vocación probatoria la declaración que la parte puede rendir en el proceso, se hace necesario desde un análisis de las fuentes del derecho aplicables en Colombia, los insumos que provee el derecho foráneo y partiendo del paradigma de la valoración racional de la prueba, que se analicen e identifiquen cuáles son esas reglas que permiten que la versión que la parte rinde sea producida como prueba en el proceso.

CARACTERÍSTICAS:

PÁGINAS: 200 PLANOS: ILUSTRACIONES: 5 CD-ROM:
1

ANEXOS: 3



AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN FORMATO DIGITAL A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

PARTE 1. Términos de la Autorización

Como AUTOR o AUTORES, efectúo entrega de un (1) ejemplar de la siguiente obra y me acojo a los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas e internacionales sobre Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, al igual que lo estipulado en el Título X Propiedad Intelectual, del ACUERDO No. 06 (Octubre 25 de 2006) Por el cual se aprueba el Reglamento de Investigación de la Universidad Libre:

Título de la obra	REGLAS DE PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: ANOMIAS Y UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Director del Trabajo	Ronald Sanabria Villamizar
Facultad	Derecho, Ciencia Política y Sociales
Programa	Derecho
Título Obtenido	Abogado
Ciudad - Año	San José de Cúcuta

PARTE 2. Autorización

Autorizo (s) a la Universidad Libre para que disponga de los derechos de comunicación pública, divulgación, préstamo y consulta que me corresponden como autor (es) del presente trabajo de grado, tesis, monografía, artículo científico, trabajo de investigación y otros, en formato virtual, electrónico, digital, en red, Internet, intranet y en general por cualquier formato conocido o por conocer:

Si autorizo



No autorizo



PARÁGRAFO: Certifico que la obra objeto de esta autorización, es de exclusiva autoría y no vulnera derechos de terceros, por lo tanto en caso de presentarse alguna acción o reclamación sobre derechos de autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Universidad Libre actúa como un tercero de buena fe.

Respaldo con mi firma la autorización descrita:

Autores:

Apellidos y Nombres:	DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL
Correo Electrónico:	duvianb@gmail.com
Apellidos y Nombres:	JESSICA TATIANA JIMÉNEZ ESCALANTE
Correo Electrónico:	tatianajimenez28@gmail.com
Apellidos y Nombres:	DANIELA RAMÍREZ LÓPEZ
Correo Electrónico:	danielaramirezlopez95@gmail.com
Apellidos y Nombres:	
Correo Electrónico:	
Apellidos y Nombres:	
Correo Electrónico:	
Apellidos y Nombres:	
Correo Electrónico:	

Firma:

C.C.

1090482920

Firma:

C.C.

1002156381

Firma:

C.C.

11093500950

Firma:

C.C.

Firma:

C.C.

Firma:

C.C.

* Este documento debe incluir las firmas de todos los autores para su recepción.

Fecha:

ESPACIO EXCLUSIVO PARA BIBLIOTECA				
RADICACIÓN				
No Rad.	Fecha			Recepcionado por:
	DD	MM	AA	Nombre Completo y firma

REGLAS DE PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN EL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: ANOMIAS Y UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN



Presentado por

DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL
JESSICA TATIANA JIMÉNEZ ESCALANTE
DANIELA RAMÍREZ LÓPEZ

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2018

REGLAS DE PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN EL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: ANOMIAS Y UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN



Presentado por

DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL

JESSICA TATIANA JIMÉNEZ ESCALANTE

DANIELA RAMÍREZ LÓPEZ

Anteproyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de abogado

Director:

RONALD JESÚS SANABRIA VILLAMIZAR

Abogado, Especialista en Derecho Disciplinario y *Magister* en Derecho Penal y Criminología

Asesor metodológico:

DIEGO ARMANDO YÁÑEZ MEZA

Abogado, Especialista en Derecho Público y *Magister* en Derecho Administrativo

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2018

La vida es la energía que posee cada ser viviente en este planeta, la mía me fue dada por mi padre y mi madre que tejieron con mis hermanas una red de amor, comprensión y apoyo que me ha hecho fuerte desde el campo a la ciudad y me ha impulsado a cumplir las metas esenciales en mi vida, para ellos todo mi agradecimiento reflejado en este proyecto de grado que es la conclusión de una fase en nuestra vida,
Duvián.

Este trabajo de grado es dedicado a mi madre: Cecilia, mi padre: Jesús y abuelos, Hernán y Amanda, quienes han sido mi mayor ejemplo de vida. Gracias por su apoyo incondicional en el transcurso de mi carrera y en general, en mi vida.
Todos mis logros y felicidades son para y por ustedes,
Daniela.

A mis padres, abuelos, tíos, y hermano, por su amor y confianza, por apoyarme en cada uno de los objetivos que me he trazado durante mi carrera, por enseñarme a trabajar por lo que sólo con esfuerzo y disciplina se alcanza,
Tatiana.

San José de Cúcuta, mayo 21 de 2018

Doctor:

DIEGO ARMANDO YAÑEZ MEZA

Director

Centro Seccional de Investigaciones

Universidad Libre de Colombia

Cúcuta

Ref. Aprobación disciplinar del Proyecto de Grado

Cordial saludo

Por medio de la presente expreso la APROBACIÓN METODOLOGICA del Proyecto de Grado titulado **REGLAS DE PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: ANOMIAS Y UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN** propuesto por los estudiantes **DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL** identificado con código 1.090.482.920, **JESSICA TATIANA JIMÉNEZ ESCALANTE** identificada con código 1.092.156.351 y **DANIELA RAMÍREZ LÓPEZ** identificada con código 1.093.780.950, egresados de la Facultad de Derecho, Ciencias Política y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cúcuta.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente



RONALD JESÚS SANABRIA VILLAMIZAR

Docente – Investigador

Universidad Libre

San José de Cúcuta, mayo 21 de 2018

Doctor:

DIEGO ARMANDO YAÑEZ MEZA

Director

Centro Seccional de Investigaciones

Universidad Libre de Colombia

Cúcuta

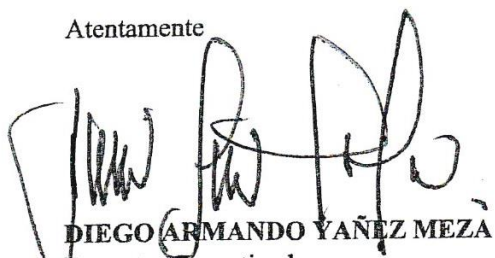
Ref. Aprobación metodológica del Proyecto de Grado

Cordial saludo

Por medio de la presente expreso la APROBACIÓN METODOLOGICA del Proyecto de Grado titulado **REGLAS DE PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: ANOMIAS Y UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN** propuesto por los estudiantes **DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL** identificado con código 1.090.482.920, **JESSICA TATIANA JIMÉNEZ ESCALANTE** identificada con código 1.092.156.351 y **DANIELA RAMÍREZ LÓPEZ** identificada con código 1.093.780.950, egresados de la Facultad de Derecho, Ciencias Política y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cúcuta.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente



DIEGO ARMANDO YAÑEZ MEZA
Docente – Investigador
Universidad Libre

UNIVERSIDAD LIBRE -CÚCUTA-
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

San José de Cúcuta, mayo de 2018.

AGRADECIMIENTOS

La materialización de este trabajo de grado no hubiese sido posible sin el apoyo y el acompañamiento de importantes personas que hoy no podemos dejar de mencionar y hacerles un profundo y sincero agradecimiento, sin orden de relevancia:

A la Universidad Libre, por permitirnos hacer parte de esta gran familia, abrimos sus puertas y enseñarnos el poder y la gran responsabilidad social que trae consigo la educación, bajo la dirección de la Dra. Débora Guerra Moreno, para quien expresamos nuestro profundo agradecimiento por otorgarnos un apoyo integral en nuestros proyectos académicos.

Al Dr. Ronald Jesús Sanabria Villamizar, por su gran disposición y apoyo al ejercer la dirección disciplinar de esta investigación, ser una guía en la búsqueda del conocimiento y un amigo incondicional. Gracias por el interés infundido, por cada sugerencia, corrección e ideas construidas y por depositar toda su confianza en nosotros en el desarrollo de esta investigación.

Al Dr. Diego Armando Yáñez Meza, por todo el apoyo, la disponibilidad y el conocimiento brindando como asesor metodológico de este proyecto, cada apreciación fue acogida con el mayor de los agradecimientos.

A Donay Botello (Q.E.P.D) y Jesusa Ramírez, por su disposición, amabilidad y servicio en la biblioteca, lugar esencial para la construcción de esta propuesta.

Al Dr. Carlos Colmenares Uribe, por darnos la oportunidad de saber lo que significa ser parte de los semilleros de investigación, que además de ser un espacio en donde logramos profundizar nuestros conocimientos a través de la investigación, construimos fuertes y valiosos lazos de amistad. Por ser un impulsor y apoyo constante para descubrir nuestros talentos. Gracias por sus enseñanzas que sin duda han marcado positivamente nuestra formación como juristas.

Al Dr. Hernando Perdomo Gómez, que desde su infinita comprensión y sabiduría nos ha brindado su conocimiento que es base y fundamento para el ejercicio de nuestra profesión.

Al Dr. Samir Alberto Bonett Ortiz, descubridor de talentos, gracias por sus enseñanzas y disponibilidad incondicional, siempre al servicio de compartir el conocimiento.

A nuestros docentes: Dra. Cindy Charlotte Reyes Sinisterra, Dr. Carlos Andrés Muñoz López, Dr. José María Peláez Mejía, Dr. Kenny Sanguino Cuellar y Dr. Yefri Yoel Torrado Verjel, quienes con su conocimiento, nos brindaron su apoyo en nuestras investigaciones y otorgaron grandes enseñanzas, gracias por la disposición y entrega profunda a la academia, de lo cual nos han hecho partícipes.

A todos los docentes que nos acompañaron en el transcurso de la carrera, gracias por compartir su conocimiento con nosotros, por cada consejo, enseñanza y experiencia, de la que hemos aprendido en la construcción de nuestro proyecto profesional.

A los semilleros, compañeros de investigaciones, pero especialmente amigos incondicionales, gracias porque juntos aprendimos a ser cada día, mejores personas y profesionales del derecho.

A nuestra familia y amigos, por su paciencia, y apoyo incondicional.

A todos, de nuevo, gracias.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de grado tiene el propósito fundamental de analizar las reglas de producción probatoria de la declaración de parte a partir de su consagración en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), que en su artículo 165 establece en la lista enunciativa de medios de conocimiento de los cuales han de valerse las partes y quien administre justicia, a la declaración de parte como un medio de prueba autónomo e independiente de la confesión, que tradicionalmente había sido el medio utilizado para ofrecer el dicho de la parte en el proceso, pero sólo respecto de lo que le era desfavorable a las pretensiones o excepciones de ésta.

No obstante, el avance en materia probatoria que se ha dado en el derecho procesal nacional con la Ley 1564 de 2012, entendiendo que el relato de la parte sobre los hechos del litigio puede ser de gran utilidad para la resolución del conflicto, no se definieron en el mencionado texto legal reglas claras que permitieran producir como medio de conocimiento los dichos de las partes. Problemática que resulta relevante en la medida de que, en la práctica judicial, la indefinición de las reglas de producción probatoria genera una notable inseguridad jurídica, con la que ni las partes ni el juzgador tienen claridad respecto de su procedencia y lo que debe ocurrir en cada una de las etapas del *íter* probatorio: solicitud, decreto, práctica y valoración.

Desde el panorama planteado, donde el texto normativo del Código General del Proceso presenta una serie de anomías derivadas de la indeterminación de los requerimientos necesarios para entender con vocación probatoria la declaración que la parte puede rendir en el proceso, se hace necesario desde un análisis de las fuentes del derecho aplicables en Colombia, los insumos que provee el derecho foráneo y partiendo del paradigma de la valoración racional de la prueba, que se analicen e identifiquen cuáles son esas reglas que permiten que la versión que la parte rinde sea producida como prueba en el proceso.

CONTENIDO

CONTENIDO	xiv
INTRODUCCIÓN	1
1. IDENTIFICACION DEL ANTEPROYECTO	4
1.1. Título	4
1.2. Planteamiento del problema	4
1.3. Formulación del problema	6
1.4. Sistematización del problema	6
1.5. Justificación	6
1.6. Objetivos	8
1.6.1. Objetivo general	8
1.6.2. Objetivos específicos	8
2. MARCO DE REFERENCIA	9
2.1. Antecedentes	9
2.2. Bases teóricas	19
2.3. Bases legales	26
2.4. Sistema teórico	47

3. DISEÑO METODOLÓGICO.....	51
3.1. Tipo y método de investigación	51
3.2. Población y muestra	51
3.3. Técnicas de recolección de información	52
3.4. Análisis de la información	52
1. TÍTULO PRELIMINAR: DESARROLLO HISTÓRICO DEL MEDIO DE PRUEBA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE.....	53
1.1. Albores del dicho de las partes como medio de prueba	53
1.2. Desarrollo continental-europeo de la declaración de parte	57
1.3. Desarrollo anglosajón de la declaración de parte.....	59
1.4. Historiografía de la declaración de parte en Colombia	62
1.4.1. Código judicial de 1931.....	63
1.4.2. Código de Procedimiento Civil de 1970:	66
1.4.3. Código General del Proceso de 2012.	73
2. PRODUCCIÓN PROBATORIA EN EL MARCO DEL PARADIGMA RACIONAL DE LA PRUEBA.....	77
3. PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN LAS FUENTES DEL DERECHO EN COLOMBIA	83
3.1. <i>Iter</i> probatorio: identificación de reglas expresas y anomías jurídicas	83

3.1.1. Solicitud.....	84
3.1.2. Decreto.....	85
3.1.3. Práctica.	86
3.1.4 Valoración.	89
3.1.5. Identificación de problemas jurídicos.....	91
3.2. Análisis crítico a las posibles respuestas del problema de investigación.....	94
4. INSUMOS FORÁNEOS: DERECHO COMPARADO	113
4.1. Solicitud	113
4.2. Decreto	116
4.3. Práctica	117
4.4. Valoración	123
5. CONCLUSIONES	134
6. PROPUESTA	158
6. 1. Análisis crítico de la confesión como medio de prueba.....	158
6.2. El interrogatorio legal no es un instrumento de práctica para obtener confesión.	160
7. REFERENCIAS.....	164

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS	173
Anexo A. Formato de entrevista	173
Anexo B. Formato de ficha de análisis jurisprudencial	175
Anexo C. Formato de análisis normativo.....	178

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Problemas jurídicos identificados en las etapas del <i>íter</i> probatorio de la declaración de parte en el Código General del proceso.	94
Cuadro 2. Práctica del interrogatorio de parte según el Código Procesal Civil de Honduras. ...	120
Cuadro 3. Práctica de la prueba testimonial según el Código Orgánico General de Procesos. ..	122
Cuadro 4. Relaciones de subordinación o autonomía entre el medio de prueba de la declaración de parte y la confesión en los códigos procesales civiles de Iberoamérica.	128
Cuadro 5. Valor probatorio de los dichos de las partes en los códigos procesales civiles de Iberoamérica.	133

INTRODUCCIÓN

*“¡El sentido común no pudo ser mantenido
por más tiempo fuera de los tribunales!
Mauro Cappelletti.*

Muchas son las novedades introducidas por la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso –CGP– en materia probatoria: la adopción del paradigma de perito de parte, la prueba de oficio como un deber y no como una mera facultad, la regulación expresa de la carga dinámica de la prueba, la metodología de interrogatorio cruzado para la práctica de la declaración de terceros, la presunción de autenticidad de los documentos como regla general, la autonomía de la prueba por informes. Dentro de la anterior constelación de nuevas figuras jurídico-probatorias, que revisten un verdadero reto para la justicia colombiana, está el nacimiento como medio de prueba autónomo de la declaración de parte.

Con el Código de Procedimiento Civil, que data de 1970, la declaración de parte (asimilada al interrogatorio de parte) se entendía como un instrumento metodológico para alcanzar la confesión, que era realmente el medio de prueba; por lo tanto, de no alcanzarse la confesión el dicho de la parte no tenía valor probatorio alguno. De ahí que la doctrina considerara que la declaración o interrogatorio de parte tenía una relación meramente instrumental respecto de la confesión; puede verse, por ejemplo, Jairo Parra Quijano quien sostiene: “Negamos que el interrogatorio sea un medio de prueba; es simplemente un método o instrumento para provocar la confesión de la otra parte. Lo que sí es medio de prueba es la confesión que se obtenga utilizando el interrogatorio” (Parra Quijano, Manual de Derecho Probatorio, 2006, pág. 440).

El anterior panorama cambió drásticamente con el nuevo código procesal, el Código General del Proceso le otorgó autonomía probatoria a la declaración de parte, lo que reviste una institución novísima para la cultura jurídica procesal colombiana: por primera vez un código procesal colombiano de naturaleza no penal establece que los dichos de las partes que no

constituyan confesión pueden ser valorados por el juez para la producción de conocimiento sobre los hechos en disputa.

Las siguientes normas regulan el fenómeno en comento: i) el artículo 165 del CGP distingue al enlistar los medios de prueba, la declaración de parte de la confesión de forma independiente y ii) el inciso final del artículo 191 de la misma normativa dispone: “la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de pruebas”.

La producción jurídica de cualquier medio de prueba requiere superar las fases o etapas del *iter* probatorio, en otras palabras, la producción exitosa de la prueba jurídica exige el cumplimiento de cuatro grandes etapas: *i)* solicitud, *ii)* decreto, *iii)* práctica y *iv)* valoración. Dicho de otra manera, para que el objeto trasmisor de conocimiento pueda servir como base epistémica en el marco de una decisión judicial o administrativa para evaluar si un hecho ha quedado demostrado jurídicamente se requiere que haya cumplido a cabalidad cada una de las reglas que componen las fases probatorias mencionadas.

La declaración de parte como medio de prueba autónomo requiere, como cualquier otro, de reglas de producción probatoria; en caso de no estar reguladas expresamente por el ordenamiento jurídico, le corresponde al juez crearlas, teniendo siempre como guía los derechos constitucionales fundamentales de carácter procesal (el debido proceso como concepto general, compuesto por garantías como el derecho de defensa, la contradicción, la publicidad).

La opción de denegar el devenir de la producción probatoria de un medio de prueba por no existir reglas expresas de producción de la prueba no es válida, pues en la actualidad es ampliamente conocido el principio de libertad probatoria, adoptado por gran parte de los códigos procesales modernos, según el cual, las partes gozan de discrecionalidad para elegir cualquier medio de prueba válido (entiéndase por validez que no lesione derechos fundamentales) como fundamento cognoscitivo para demostrar un hecho, y a su vez el juez goza de libertad valorativa, teniendo siempre como derroteros los elementos constitutivos de la sana crítica (reglas de la lógica, reglas de la experiencias y reglas técnico científicas), lo que le permite analizar la producción de

conocimiento sobre un hecho con base en cualquier medio de prueba aportado en debida forma al proceso. El Código General del Proceso no escapa a esta tendencia: “El Juez practicará las pruebas no previstas en este código, de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales” (artículo 165 CGP).

Más allá de la regla de valoración mencionada (“la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de pruebas”), el Código General del Proceso no reguló las demás reglas de producción probatoria para el ahora autónomo medio de prueba de la declaración de parte. Posible anomia que genera gran incertidumbre respecto de cuáles son los requerimientos que harían posible allegar al proceso como medio de conocimiento el dicho de las partes.

En atención al anterior panorama, partiendo de las implicaciones que en el derecho probatorio genera lo que se conoce como el paradigma racional de la prueba y con base en el estudio de las fuentes del derecho del ordenamiento jurídico colombiano, así como el análisis de normativa y doctrina foránea, el presente trabajo de investigación pretende como objetivo principal analizar las reglas para el desarrollo del *iter* probatorio de la declaración de parte en los procesos judiciales o administrativos regidos por la Ley 1564 de 2012 –GGP–.

1. IDENTIFICACION DEL ANTEPROYECTO

1.1. Título

REGLAS DE PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: ANOMIAS Y UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

1.2. Planteamiento del problema

El aparente vacío legal en el Código General del Proceso de las reglas de producción probatoria del medio de prueba de declaración de parte genera enormes incertidumbres en la práctica judicial: ¿se puede solicitar la declaración de la propia parte?, ¿declaración de parte es sinónimo de interrogatorio de parte?, en caso negativo, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro?, ¿el interrogatorio exhaustivo que debe realizar el juez en audiencia inicial agota simultáneamente la práctica de la declaración de parte?, ¿la declaración de la parte puede ser sometida a las reglas de práctica de la declaración de terceros?, ¿cuáles son las diferencias en la producción de la confesión y la declaración de parte? Estas preguntas no tienen respuesta en el Código General del Proceso, al menos no de forma expresa e inequívoca.

A continuación, se enunciarán las tesis que han sido expuestas por la doctrina colombiana para resolver la problemática de la presente investigación, así como otras posibles alternativas:

1. La parte como testigo. Según esta posición, la prueba testimonial corresponde al género, dentro del cual se encuentra como especies la declaración de parte y la declaración de terceros. En la medida que las especies están contenidas en el género, consideran quienes sostienen esta postura que las reglas de producción deben ser las mismas para ambos medios de prueba. Y atendiendo a que el Código General del Proceso regula ampliamente la declaración de terceros, la declaración de parte debe surtir conforme las reglas de producción probatoria de este medio de prueba. Con algunas salvedades este criterio lo sostienen Adriana López Martínez (La declaración de parte como medio de prueba autónomo - la parte como testigo, 2016) y Marco Antonio Álvarez (Álvarez Gómez, 2017).

2. La declaración de parte no es una prueba testimonial, pero debe practicarse de acuerdo con las disposiciones que regulen medios de prueba semejantes (artículo 165 CGP), como lo es la declaración de terceros. En realidad, como salta la vista, esta posición difiere de la anterior solo en el campo de teórico, pues en el aspecto práctica genera las mismas consecuencias: las reglas de producción de la declaración de parte deben ser las mismas a la declaración de terceros en atención a su similitud (en ambos casos se trata de manifestaciones dadas por personas con utilidad probatoria).

3. Si bien la declaración de parte es autónoma de la confesión, sus reglas de producción son las mismas; lo que realmente las distingue son los criterios para valorarlas. Según esta postura, la novedad del Código General del Proceso reside en la posibilidad del juez de extraer insumos epistemológicos para construir racionalmente la premisa fáctica de la decisión judicial con base en los dichos de las partes que no constituyan confesión. Pero, las reglas probatorias con las que se consigue los dichos de las partes, ya sea para generar confesión o declaración de parte, son idénticas. En conclusión, según este criterio la diferencia sustancial entre uno y otro medio de prueba reside en la valoración.

Se inclinan sobre esta posición autores como Jaime Azula Camacho (Manual de Derecho Procesal. Pruebas judiciales, 2015). En el caso de Azula Camacho, si bien no sostiene expresamente la equiparación de las reglas de producción, de la lectura integral del capítulo II titulado “Declaración de parte y confesión” (p. 166-201) de su obra se tiene que no ofrece reglas particulares para la producción de cada medio de prueba, por lo que se concluye que tácitamente asume esta postura.

Aspectos positivos y negativos pueden alegarse de cada una de las tesis posibles enunciadas, dependerá de la perspectiva desde la cual se mire: la coherencia con la dogmática probatoria, la eficacia del proceso judicial, el cumplimiento del principio de celeridad y economía procesal, la armonía con la cultura jurídica colombiana tradicional. En todo caso, lo que debe resaltarse son las implicaciones prácticas de la elección: los problemas jurídicos que eventualmente se pueden llegar a suscitar en la práctica judicial del medio de prueba de la declaración de parte se resolverán de forma diferente según sea la posición adoptada.

El principio de seguridad jurídica, que tiende por la aplicación uniforme del derecho y asegura la expectativa de protección igualitaria del ordenamiento jurídico en los ciudadanos, torna imperioso que el ordenamiento jurídico colombiano dé una respuesta única a la pregunta ¿cuáles son las reglas regulativas del camino probatorio del medio de prueba de la declaración de parte? Encontrar una respuesta, o al menos dar insumos para poder responderla acertadamente, responde al fin principal de la presente investigación.

1.3. Formulación del problema

¿Cuáles son las reglas de producción probatoria de la declaración de parte en los procesos y procedimientos cuya actividad procesal debe regularse por el Código General del Proceso?

1.4. Sistematización del problema

¿Cuál es la influencia (incidencia) del paradigma racional de la prueba judicial en la declaración de parte?

¿Qué definen los postulados jurídicos que soportan el planteamiento de la declaración de parte como medio de prueba autónomo a partir de las fuentes del derecho colombiano vigentes?

¿Cómo se han desarrollado las reglas de producción probatoria del medio de prueba de declaración de parte en el derecho comparado (Países Iberoamericanos)?

1.5. Justificación

Ante la falta de regulación legal, la doctrina y la jurisprudencia juegan un papel fundamental para mitigar la que en este caso podría denominarse una anomia legal probatoria. Sin embargo, hasta ahora estas fuentes formales del derecho poco han dicho sobre el problema jurídico objeto de estudio. Esta omisión puede explicarse debido a que si bien el Código General del Proceso fue promulgado en el año 2012, entró en vigencia en su totalidad al inicio del año

2016, por lo que hasta ahora se están presentando los problemas procesales en la praxis judicial al utilizar este medio de prueba. De allí que sea pertinente el estudio de esta anomia probatoria con el propósito de identificar aquellas posibles reglas para la producción de un medio de prueba que pretende generar conocimiento al juez de los hechos en litigio a partir de los dichos de las partes.

Tras el vacío legal que se presenta, se generan implicaciones prácticas en la forma de llevarse a cabo la declaración de parte en el proceso, pues los problemas jurídicos que eventualmente se pueden llegar a suscitar en la práctica judicial del medio de prueba de la declaración de parte conllevan a que se puedan resolver en distinta forma en cada caso, atentando contra el principio de seguridad jurídica, que tiende por la aplicación uniforme del derecho y asegura la expectativa de protección igualitaria del ordenamiento jurídico en los ciudadanos; por lo que se hace necesario y relevante dar una respuesta uniforme a las reglas regulativas del *iter probatorio* del medio de prueba estudiado.

El conocimiento científico del derecho probatorio puede aportar al diagnóstico acertado de los graves problemas en la etapa probatoria de los procesos judiciales y contribuir positivamente a encontrar y materializar las sentencias racionales, justas y democráticas, requeridas para el cumplimiento de los propósitos del aparato jurisdiccional. Igualmente el conocimiento producido es útil para el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el medio de prueba de la declaración de parte, del ejercicio de la docencia en derecho procesal o de su aplicación práctica en los campos de la actividad pública, desde la administración de justicia, y privado, como la práctica de pruebas en el proceso arbitral, como cuando son consultados y citados en artículos científicos, ensayos, libros, ponencias, informes, políticas públicas, etc.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general

Analizar las reglas de producción probatoria del medio de prueba de la declaración de parte bajo la regulación de la Ley 1564 de 2012 –Código General del Proceso–.

1.6.2. Objetivos específicos

Examinar la influencia del paradigma racional de la prueba judicial en la declaración de parte.

Identificar los postulados jurídicos que soportan el planteamiento de la declaración de parte como un medio de prueba autónomo a partir de las fuentes del derecho colombiano vigentes.

Describir el desarrollo que ha tenido el medio de prueba de la declaración de parte en el derecho comparado (Países Iberoamericanos).

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes

Contreras Rojas, C. (2015). Valoración de las pruebas de declaración de personas en segunda instancia (tesis para optar al título de Doctor en Derecho). *Universidad de Barcelona*.

Este autor analiza la valoración de las declaraciones de las partes como de terceros involucrados en el proceso, esta valoración judicial debe corresponder a un ejercicio racional y que obedezca a las reglas de la lógica a partir de criterios razonables, lógicos, objetivos, y contrastables que sea legítima y justa ante las partes, el juez, el tribunal o cualquier ciudadano, permitiendo una construcción sólida por parte del juez que debe desarrollar un proceso inferencial desde las declaraciones producidas en el proceso para brindar las garantías constitucionales de las partes, por esto en el desarrollo de este antecedente se realizará una descripción detallada de los temas que aborda en este importante estudio de la valoración de la declaración como medio de prueba. En su capítulo primero expone los aspectos generales de la prueba procesal, en la que aborda en su primer punto las nociones básicas, bajo el concepto de prueba:

Todos los elementos que dan vida y sirven para configurar el fenómeno probatorio resultan de una ingente importancia para el adecuado desarrollo de la actividad jurisdiccional por parte del tribunal. En efecto, es evidente que sin prueba el sentenciador carecería de herramientas suficientes para llevar a cabo la misión que le ha encomendado el ordenamiento jurídico, que no es otra que disponer que las consecuencias previstas por una norma se apliquen a una situación fáctica determinada, resultado de lo cual, una persona natural o jurídica, se verá en la necesidad de soportar una sanción o una obligación. Es el sentenciador quien, con la ayuda del resto de los intervinientes, pero especialmente con la utilización de la prueba que se provea al proceso, debe realizar una tarea de reconstrucción de las circunstancias fácticas que han sucedido en el pasado y que originaron el litigio que se le presenta para su conocimiento y fallo.

Sigue con el estudio de la prueba general y jurídica, las demás acepciones de prueba en el derecho procesal, luego examina el estudio del objeto de la prueba, para luego estudiar los

hechos que no necesitan ser probados, bajo lo que estudia los hechos admitidos o afirmados por ambas partes, los hechos notorios, y los hechos presumidos por la ley, luego inicia la admisibilidad de la prueba estudiando la legalidad, pertinencia, utilidad, y licitud, y finaliza este aparte del primer aparte analiza el conocimiento judicial de los hechos y el derecho desde el aspecto jurídico de la controversia procesal y el aspecto fáctico de la controversia judicial:

Cuando se trata del componente fáctico de la *litis*, la posición del juez es diametralmente opuesta a la que detenta respecto al Derecho, pasando desde una situación de libertad y propia iniciativa a un estado de pasividad casi absoluta, donde sus posibilidades de actuación se vinculan estrecha e ineludiblemente a los planteamientos efectuados por las partes.

En su segundo punto describe la prueba y la verdad en el proceso judicial iniciando con la diferenciación de la verdad material de la formal y sus críticas, como que en una versión veraz no admite versiones válidas, no varía según la naturaleza del proceso judicial, es o no alejada la verdad del proceso desde las normas de prueba legal:

En este sentido se ha argumentado que las normas de prueba legal serían perfectamente conciliables con la obtención de la verdad material, o que al menos existiría un subgrupo de ellas que sí podría resultar compatible con dicho fin (...). Dentro de esta línea de argumentos, se ha dicho que si bien el proceso cuenta con reglas que regulan la búsqueda de la verdad, muchas de las cuales tienen una función contra-epistémica, no se puede sostener que todas las normas impiden la averiguación de la verdad, pues es posible detectar que ciertas regulaciones colaboración en esa investigación.

También estudia la teleología de la prueba procesal desde la fijación de los hechos, el convencimiento del juzgador y el establecimiento de la verdad y sus razones para su establecimiento, como que la verdad es la misma en todas las áreas del conocimiento y esencial para una justa decisión, en contraposición, están las razones para negar la consecución de la verdad en el proceso como que es imposible conocer la verdad de los hechos, el proceso es para resolver conflictos de manera pacífica no un método de producción de conocimiento fidedigno por esto

está limitado para conciliar la verdad con lo que se produce en el proceso. En su tercer punto examina los principios del procedimiento civil y la prueba, estudia principios como la oralidad desde sus características y la relación con otros principios procesales, el principio de concentración, el principio de publicidad, el principio de inmediación, analiza su contenido esencial, su rol en el proceso civil, las excepciones al mismo, y la relación de este principio con el *íter* de valoración probatoria.

En su cuarto punto analiza la valoración de la prueba desde tres enfoques y desde los dos sistemas jurídicos de valoración probatoria, el primer enfoque es el epistemológico o gnoseológico desde la deducción y el silogismo como estructura de razonamiento, el razonamiento inductivo o probabilístico, la probabilidad deductiva, la Teoría de Cohen y sus críticas al enfoque matematicista, el segundo enfoque es el psicológico desde la disciplina heurística, analizando sus sesgos, su representatividad, su accesibilidad, su anclaje y ajuste y las críticas a los que defienden a esta disciplina, el tercer modelo epistemológico es el de los modelos mentales en el cual se analiza el funcionamiento de los modelos mentales, en la segunda parte de este punto analiza los dos sistemas jurídicos de valoración probatoria, el de prueba legal o tasada, o el de prueba libre, en el primer sistema expone el origen de la prueba tasada:

Si bien el juez es quien tiene contacto con las pruebas del proceso por ser el llamado a resolver el asunto que se ventila, el sistema de prueba tasada pregonaba que la evidencia debe ser valorada apriorísticamente por el legislador.

Sus aspectos positivos y críticas, en el segundo sistema describe el contenido esencial del paradigma de libertad probatoria desde este analizar el sistema de la íntima convicción y el de la sana crítica:

La idea es que el sentenciador reflexione y obtenga sus conclusiones de acuerdo con su propia calificación de la fuerza probatoria de los elementos de convicción empleados, pero que en la construcción de sus inferencias respete las normas que establecen la forma correcta de razonar, que permiten que las conclusiones y el conocimiento obtenido a través del ejercicio intelectual del

juez puedan ser aceptados por los intervinientes del proceso y el resto de los miembros de la sociedad.

En su segundo capítulo expone “La valoración de las pruebas de declaración de personas en el proceso civil” analizando en su primer punto la memoria y la psicología del testimonio citando los antecedentes de la psicología del testimonio, la memoria, y la confianza y exactitud del testimonio, desde la alusión a la memoria describe su estructura y los tipos que existen, los procesos fundamentales del tipo de memoria episódica para concluir con los factores de la memoria, que divide en tres clases, de codificación, de retención, y de recuperación, en el primero estudia el suceso y al testigo, en el segundo estudia su extensión temporal y la información post-suceso dentro en el que se analiza oportunidad post-suceso, el efecto de la información engañosa, el control de la realidad y sus diversos factores, y en el tercero se analiza el contexto de recuperación y sus tipos, la forma de las preguntas y la credibilidad de la fuente, después del ítem de la memoria finalizar con el análisis de la confianza y exactitud del testimonio desde su baja correlación y las variables que la afectan. En su segundo punto analiza la obtención de las declaraciones desde cuatro ámbitos, la narración libre versus el interrogatorio:

(...) Todos los autores parecen estar de acuerdo en que el mejor sistema será aquel que constituya una mixtura de ambos, que rescate sus respectivas ventajas y evite sus inconvenientes en la consecución de las declaraciones.

La entrevista cognitiva y la cognitiva mejorada, y la regulación procesal civil de la declaración de personas, en este último ámbito se analiza desde la declaración de las partes y el interrogatorio de testigo, en el primer medio de prueba se examina la proposición y los deberes de declarante y su práctica dentro del proceso probatorio desde las preguntas y las respuestas, desde el segundo medio de prueba se examina el concepto, la capacidad, las tachas, los deberes del testigo y su práctica.

En su tercer punto se analiza la valoración de las declaración desde los siguientes tres ítems, los sistemas de detección de la mentira, la valoración procesal de personas y la propuesta de los criterios de valoración, en el primer ítem se tienen tres análisis para este fin, el de cambios

fisiológicos deducidos desde el polígrafo, de comportamiento no verbal desde las microexpresiones faciales y, del contenido verbal de la declaración desde parámetros como la realidad de las evidencias, el análisis de realidad de las declaraciones y el análisis basado en criterios y evaluación de validez, el segundo ítem estudia la valoración de la declaración de las partes desde sus formas, declaración de parte expresa:

En Argentina, Chile, Francia, Italia, México y Uruguay, se dispone que la confesión judicial tiene valor de plena prueba, de modo que los eventos que se establecen a partir de ella no pueden ser desvirtuado por el resultado de otras probanzas que se hayan practicado en el proceso.

La declaración de testigos para finalizar con el tercer ítem en el que proyecta su propuesta de criterios de valoración dividiéndolos en dos ámbitos de veracidad y de precisión. Concluyendo de todo lo anterior, lo siguiente:

La valoración constituye una operación intelectual que lleva a cabo el sentenciador con el objetivo de asignar un mérito probatorio o de convicción a cada una de las evidencias. Sirve para determinar el peso específico de cada prueba al interior del acervo probatorio que está a disposición del tribunal.

Dado que la prueba no es apta para generar verdades absolutas, sino solamente dotadas de un cierto nivel de certeza, se trata de analizar el grado de probabilidad de las distintas hipótesis fácticas de acuerdo con el sustento que encuentren en el material probatorio, sirviéndose de máximas de la experiencia elegidas por el juez para conectar el resultado de las pruebas con las hipótesis analizadas. Ello permite desarrollar un ejercicio inferencial racional y lógico.

Si bien la sana crítica otorga un amplio margen de libertad al juez, le impone el respeto de las reglas que establecen la forma correcta de razonar, de modo que la vigencia del sistema resulta incompatible con actuaciones irracionales, arbitrarias o caprichosas.

Además, el sentenciador tiene el deber de motivar sus decisiones, lo que permite su control e impugnación. (Contreras Rojas, 2015).

Marín Verdugo, F. (2010). Declaración de la parte como medio de prueba. *Revista Ius et Praxis*. (1), 125-170.

Dentro del universo de personas inhabilitadas para declarar, un grupo importante eran todas aquellas que tuviesen un interés directo o indirecto en la resolución del conflicto. Así, durante siglos, lo que las partes hubiesen percibido directamente por sus sentidos (lo que hubiesen visto o escuchado), no podía ser relatado por ellos mismos voluntariamente dentro del proceso judicial con valor probatorio, por lo que debían intentar ingresar la información de la que disponían a través de otros medios de prueba “no inhabilitados”.

Sin embargo, la imposibilidad de las partes para declarar no era total, sino que estaba limitada sólo a lo que ellas pudieran decir en beneficio de sus intereses (*pro se declaratio*), pues la sospecha ya no existía si estaban dispuestos a entregar información que los perjudicara (*contra se declaratio*).

Nuestros nuevos sistemas procesales han seguido la tendencia de los ordenamientos modernos, alejándose del sistema escrito y de la prueba legal. Como consecuencia, las nuevas reglas de la prueba del procedimiento de Familia y Laboral no establecen inhabilidades para declarar. Por el contrario, permiten que las partes puedan declarar como testigos en sus respectivos juicios.

En ambos procedimientos, Laboral y Familia, uno de los medios de prueba regulado explícitamente es la declaración forzada de la parte. Cualquiera de ellas puede citar a la otra, sin más requisitos que ser pertinente. En ambos casos, no existe una regulación distinta a la general para valorar las declaraciones que las partes hayan realizado al declarar forzadamente. Por lo tanto, de acuerdo a la regla general de valoración en concreto de acuerdo a la sana crítica, el juez puede dar valor probatorio a todo lo que la parte citada por la contraria haya dicho. Es decir, el juez puede creer los dichos de la parte, hayan sido estos contrarios a sus intereses o en su favor.

La misma lógica y objetivos del sistema de valoración de la prueba en concreto llevan a concluir que ya no existen las inhabilidades para declarar, ya sea de testigos interesados o de las mismas partes. Coherente con ello, las normas específicas que intentan plasmar la valoración en concreto señalan en la misma dirección: hay un catálogo abierto de medios de prueba; debe efectuarse un control de admisibilidad de la prueba sin atender a su credibilidad; a los medios de prueba no regulados explícitamente se les aplican las normas de incorporación del medio más análogo; los litigantes pueden realizar durante el examen de los declarantes preguntas tendentes a producir la información con la cual el juez podrá después valorar la prueba en concreto; el juez puede valorar la declaración de la parte en su beneficio; el juez debe hacerse cargo de toda la prueba rendida en el juicio y; finalmente, se señala explícitamente que debe hacerlo a través del sistema de la sana crítica, es decir, en concreto. (Marín Verdugo, 2010).

Canosa Suárez, U. (2014). Código General del Proceso. Declaración de parte - Documentos. XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal. 209-222.

Con el paso a la oralidad, que acoge la persuasión racional o sana crítica para valorar las pruebas en concreto, se supera la limitación que negaba todo mérito de convicción al dicho favorable de la propia parte. Ahora la concepción del proceso como una “comunidad de trabajo” que remplace el “enfrentamiento de las partes”, cotiza el consolidado deber de veracidad exigido en los procesos orales a las partes y utiliza su declaración en diferentes medios de prueba como el juramento estimatorio y en algunos procesos como el monitorio, donde la regulación de puro le permite a la parte, con su propio dicho, obtener el requerimiento de pago con que se inicia la actuación frente al demandado.

De acuerdo con la nueva regulación del CGP, en todo proceso el juez practicará el interrogatorio de las partes y podrá extraer elementos de convicción que evaluará caso a caso, en concreto, de acuerdo con la sana crítica. Así mismo, de contera, la parte podrá ofrecer como prueba su declaración o testimonio de parte y el abogado podrá preguntar en estas diligencias a su propio cliente, alternativas proscritas en el sistema del código anterior.

Si bien la práctica debe seguir las formalidades previstas en el artículo 204 del CGP, es decir que será bajo juramento, pudiendo interrogar el juez, la parte contraria o su abogado e incluso el abogado de la propia parte declarante, todo debe hacerse en una sola diligencia, sin solución de continuidad, así se haya ofrecido la declaración voluntariamente, se haya pedido por la contraria y se decrete de oficio, sin repeticiones o redundancias superfluas, aplicando también en lo que resulte apropiado las formalidades de la prueba testimonial, por ejemplo la doble vuelta de preguntas del numeral 4 del artículo 221 del CGP.

Además, la declaración de la parte aportará sustancialmente insumos para la aplicación del artículo 280 del CGP que siguiendo el derecho comparado dispone “El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella” Los dichos de las partes serán evaluados, positiva o negativamente, su coherencia o su “autocontradicción” o “intercadencia”. (Canosa Suárez, 2014).

Tejeiro Duque, O. A. (2015) Confesión, interrogatorio y declaración de parte. *XXXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal*. 561-570.

El propósito central de las ideas que se van a expresar es contribuir al entendimiento de tres figuras existentes en el nuevo Código General del Proceso, que ya venían con lineamientos en el Código de Procedimiento Civil. Ellas han sufrido algunos cambios relativamente profundos, aunque no muy notorios a simple vista, dado que la redacción general de la normativa no aparenta ir tan lejos como en verdad va en virtud de la alteración en los postulados generales que la sustentan.

Mírese nada más, para mostrar apenas un tópico del tema, como de conformidad con el estatuto próximo a entrar en vigencia, el interrogatorio de parte no es considerado un medio de prueba, dado que en la enumeración realizada en el artículo 165 del Código General del Proceso ni siquiera se le menciona, al paso que allí sí se incluyen la declaración de parte y la confesión, con lo cual se envía mensaje claro: el interrogatorio aludido no es prueba; es el vehículo por el cual pueden llegar al proceso los otros dos verdaderos medios.

No se olvide que, en síntesis, confesar significa la aceptación de hechos perjudiciales a quien los admite o por lo menos benéficos a su oponente. Naturalmente, no se erige el interrogatorio en el único instrumento para arribar a esa manifestación, puesto que también sucede espontáneamente en la demanda o en su contestación, así como en cualquier otro escrito o, inclusive, en alguna de las posibles audiencias, de manera que, aunque haya cuestionarios orales no fatalmente procuran ese objetivo y si la intentan, no siempre lo hallan.

Además, por su intermedio se llega a la declaración de la parte, que es el testimonio brindado por el demandante o por el demandado en el que no acepta el hecho respectivo, pero ofrece una versión llamada a ser tomada en cuenta por el juzgador, de conformidad con el artículo 191 del Código General del Proceso, que dispone valorarla según las reglas generales de apreciación de las pruebas. Se trata, pues, la declaración de la parte vertida, entre otras ocasiones, en el interrogatorio de la versión que rinde cada uno de los litigantes en la audiencia, sin aceptar hechos que le o que por lo menos favorezcan al otro, y que pueden servir para esclarecer la materia factual del litigio. (Tejeiro Duque, 2015).

Sanabria Villamizar, R. J. (2015). Análisis de los medios de prueba testimonial y pericial en el Código General del Proceso: un estudio desde la experiencia procesal penal. *Revista Estudios de Derecho*. 72(160), 19-50.

El método *cross-examination* de origen anglosajón, se presenta como la principal novedad adoptada por el CPP en materia de prueba testimonial, y ahora también en el CGP, al respecto se pronunciaron Bejarano Guzmán y Canosa Suárez (2012).

Según este método, llamado por la legislación local interrogatorio cruzado, el testigo debe ser sometido a un escrutinio efectuado por las partes, y no por el juez, quien debe asumir una posición pasiva durante la práctica de la prueba. El método se divide en cuatro etapas, organizadas de tal manera que las partes en disputa se intercalan los momentos para interrogar, sometiendo al testigo a múltiples preguntas en aras de cuestionar la veracidad de su dicho: i) la primera etapa llamada interrogatorio directo la efectúa la parte que solicitó la prueba; ii) luego viene el contrainterrogatorio, realizado por la contraparte, de ahí su nombre, y tiene como principal función

refutar el dicho del testigo; iii) después viene el llamado re-directo, mediante el cual la parte que solicitó la prueba tiene la oportunidad de realizar preguntas aclaratorias sobre los temas abordados en el contrainterrogatorio; y iv) por último, el re-contrainterrogatorio, etapa en la cual quien no solicitó la prueba tiene la última oportunidad de refutar lo dicho por el testigo.

La norma del CGP no define las etapas que conforman el interrogatorio cruzado, tan solo menciona la facultad de interrogar nuevamente al testigo. Esta omisión debe ser superada utilizando la terminología empleada por la Ley 906 de 2004 (interrogatorio directo, contrainterrogatorio, interrogatorio re-directo y re-contrainterrogatorio).

El CGP permite la libre narración de los hechos por parte del testigo sin sacrificar el idóneo ejercicio del derecho de confrontar por las partes, razón por la cual se afirma que esta legislación fusionó las bondades de cada sistema, decisión que se aplaude, ya que como bien lo afirma el profesor italiano Michele Taruffo (2010), al analizar un método de preguntas que permita alcanzar la verdad dentro del proceso, lo que él llama función epistémica del proceso judicial. (Sanabria Villamizar, 2015).

López Martínez, A. (2016). La declaración de parte como medio de prueba autónomo – la parte como testigo. *XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal*. 475-487.

Para abundar en razones que justifican la consagración de la declaración de parte como prueba que va más allá de la simple confesión, baste observar como en la práctica, la simple confesión ha perdido vigencia, eficacia y actualidad, para muchos considerada una prueba arcaica, excesivamente formal, que poco o nada aporta al juez en la labor de averiguación de la verdad. Es imposible negar que este medio de prueba que se pensó, como la reina de las pruebas, ha venido sustituyéndose por el libre interrogatorio de las partes o la declaración de parte, que además permite que la propia parte ofrezca su declaración, sin estar supeditada a que solo podrá declarar cuando sea la parte contraria quien lo pida, y en este caso con las limitaciones del número de preguntas, en muchos casos de tipo asertivo sin dar espacio a versiones libres y amplias de su apreciación de los hechos.

No existe duda alguna de que son más enriquecedoras para el debate, las declaraciones que se obtienen por el fuego cruzado de las preguntas, pues de allí es más fácil determinar lo que es falso y lo que es verdadero a diferencia del interrogatorio forzado que por su naturaleza estática y excesivo formalismo, no aporta generalmente nada nuevo al debate probatorio.

Partiendo de que el interrogatorio de partes el vehículo para obtener los dos medios de prueba, la confesión y la declaración de parte, no se contempló en el CGP disposiciones específicas que desarrollen la práctica de esta última.

La consagración de la declaración de parte voluntaria, con autonomía frente al tradicional interrogatorio forzado para obtener principalmente la confesión, representa un gran avance en el Código General del Proceso, que ubica nuestro sistema procesal entre lo más modernos sistemas que consagran este medio probatorio. Además de medio de prueba se constituye en herramienta procesal indispensable para que las partes y el juez puedan desarrollar la labor que a cada uno compete en los nuevos sistemas orales, facilitando la fijación y delimitación del debate, incentivando el comportamiento leal de las partes, y dando herramientas al juez, no solo para encontrar la verdad real, sino para poder deducir indicios de la conducta procesal de las partes. (López Martínez, 2016).

2.2. Bases teóricas

Las bases teóricas del objeto de la presente investigación se identifican a partir de la existencia en la norma procesal del medio de prueba de la declaración de parte como un medio probatorio autónomo, sobre el cual debe desarrollarse una serie de reglas que definen su producción probatoria en el proceso, las cuales deben enmarcarse en el respeto de los principios del derecho probatorio y al paradigma racional de la prueba como criterio epistémico que rige la actividad de probar, permitiendo aportar valioso conocimiento de los hechos al juzgador para una adecuada solución del problema jurídico planteado en el proceso.

Etapas de producción probatoria en Colombia.

La producción probatoria está integrada por cuatro grandes etapas como lo son: la solicitud, el decreto, la práctica y la valoración, que desde el Código General del Proceso se identifican como oportunidades probatorias (artículo 173).

Solicitud: para que las pruebas sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, es decir, deberá mediar una petición previa por la parte interesada en la oportunidad que el Código contemple.

Decreto: en la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

Practica: a su vez, una vez decretada la prueba, debe practicarse para ser incorporada al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en el Código. Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción.

Valoración: Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica (reglas de la experiencia, de la lógica y técnico-científicas), sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba (artículo 176. Apreciación de las pruebas).

Prueba

“Prueba es aquel elemento primordial en los procesos judiciales que sirve como base para reconstruir los hechos y brindarle al juez las herramientas necesarias para su admisión y valoración, sirve para cumplir la función de narrar de la forma más precisa y cercana a la realidad el fenómeno que se presenta y así, generar una decisión para impartir justicia (...)” (Yáñez Rueda & Laguado Serrano, 2014, pág. 116).

Diferencias entre declaración de parte, interrogatorio de parte y confesión.

De acuerdo con Azula Camacho “La declaración de parte es la manifestación que hace quien tiene o puede llegar a tener esa calidad, sin consideración a la forma como la efectué, siempre que tenga significación jurídica”, es decir, efectos jurídicos; a diferencia de la confesión que implica el reconocimiento de un hecho propio, esto es una declaración de conocimiento. Por su parte, el interrogatorio constituye el método instrumento por el cual se practica estos medios probatorios y que consiste en realizar una serie de preguntas, - limitadas en su cantidad o no -, sobre los hechos materia de controversia. (Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal. Pruebas judiciales, 2015).

Ahora, desde la obra de Mauro Cappelletti “El testimonio de la parte en el sistema de la Oralidad. Contribución a la teoría de la utilización probatoria del saber de las partes en el proceso civil” se toman los aspectos históricos y la evolución de este medio de prueba en el esclarecimiento de su autonomía de la confesión y del interrogatorio de parte, para Cappelletti, “la parte es el sujeto mejor informado del caso en concreto que en el proceso se debe examinar. De ahí la inderogable necesidad que en todos los ordenamientos civiles existe, de utilizar la parte como fuente de prueba” (Cappelletti, 2002, pág. 3).

De esta forma Cappelletti aborda en su primer libro los principios que rodean al paradigma en el que se practicará este medio de prueba, a saber el principio de la oralidad y el principio dispositivo, frente al primero de ellos, desde un análisis histórico-fenomenológico dilucida los significados erróneos que se le han dado a este principio y tras analizar las

características esenciales del interrogatorio, la validez del testimonio de los terceros interesados para fundamentar el medio de prueba de la declaración de la parte como un fenómeno que es parte de la transformación progresiva de la prueba oral (testifical) por medio de la fijación de una llamada verdad formal o legal, en medio de prueba librado al libre convencimiento del juez. Luego, en relación con el principio dispositivo señala la libertad de la parte en la elección del material del hecho y la elección de los medios para probarlo, pues esto pertenece a un momento de disposición del derecho y a la simple técnica procesal (Cappelletti, 2002).

Por su parte, el profesor Octavio Tejeiro afirma que el interrogatorio de parte no es considerado un medio de prueba, en la enumeración hecha en el CGP se incluyen sólo a la declaración de parte y la confesión, con lo cual se envía un claro mensaje: el interrogatorio de parte no es prueba, es el vehículo por el cual pueden llegar al proceso los otros dos verdaderos medios (Tejeiro Duque, 2015, pág. 561).

Principios del debido proceso probatorio

Se han establecido unas garantías mínimas del debido proceso probatorio, basados en los pronunciamientos de los principales doctrinantes que se han ocupado de los principios orientadores del derecho probatorio, en el cual toda producción probatoria deberá estar integrada por los siguientes principios:

Necesidad de la prueba:

Según Devis Echandía, “Se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre ellos, porque sería desconocer la publicidad y la contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio”. (Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales, 1972).

Principio de unidad de la prueba:

“Significa este principio que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme” (Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales, 1972).

Para el profesor Parra Quijano se trata de método analítico + apreciación en conjunto: Cuando el juez o funcionario debe exponer razonadamente el mérito que le asigna a cada prueba, se está ante el método analítico, es decir, el estudio individualizado de cada medio probatorio, las inferencias que se hacen y las reglas de la experiencia que se aplican. Posterior al estudio individualizado de cada elemento de prueba, el juez debe realizar la valoración en conjunto, pues en los procesos es normal que se recauden varias pruebas, incluso de la misma especie, de allí la necesidad de estudiar la prueba como un todo, lo cual debe hacerse buscando las concordancias y divergencias a fin de lograr el propósito indicado. (Parra Quijano, Manual de Derecho Probatorio, 2006).

Principio de contradicción de la prueba:

La parte contra la cual se postula, se opone o aporta una prueba, debe conocerla, y ella (la prueba) no se puede apreciar si no se ha celebrado con audiencia o con conocimiento de esa parte. Al proceso no pueden ingresar pruebas en forma subrepticia, escondida, o a espaldas de la contraparte (Parra Quijano, Manual de Derecho Probatorio, 2006).

“Es tan importante, que debe negársele valor a la prueba practicada con su desconocimiento, como sería la que no fue previamente decretada en el procedimiento escrito, e inclusive, el dictamen de peritos oportunamente ordenado, o al menos simultáneamente en el oral, pero que no fue puesto en conocimiento de las partes para que éstas ejercitaran su derecho de solicitar aclaraciones o ampliaciones” (Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales, 1972).

Principio de igualdad:

Para Parra Quijano, este principio tiende a lograr un equilibrio en el proceso, las partes tienen que tener igualdad de oportunidades para pedir y obtener que les practiquen pruebas y para contradecir las del contrario, pero y sobre todo un equilibrios en el conocimiento de los hechos, que interesan en general a la investigación (Parra Quijano, Manual de Derecho Probatorio, 2006).

Principio de publicidad de la prueba:

Significa que debe permitirse a las partes conocerlas, intervenir en su práctica, objetarlas si es el caso, discutir las y luego analizarlas para poner de presente ante el juez el valor tiene, en alegaciones oportunas; pero también significa que el examen y las conclusiones del juez sobre la prueba den ser conocidas de las partes y estar al alcance de cualquier persona que se interese en ello, cumpliendo así la función social que les corresponde (Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales, 1972).

Principio de legitimación para la prueba:

Este principio exige que la prueba provenga de un sujeto legitimado para aducirla, es decir, el juez cuando tiene facultades inquisitivas, y las partes principales y secundarias, e inclusive transitorias o intervinientes incidentales; por último, respecto de la cuestión que motiva su intervención, requieren que el funcionario que la recibe o practique tenga facultad procesal para ello (jurisdicción y competencia) (Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales, 1972).

Principio de la preclusión de la prueba:

Se trata de una formalidad de tiempo u oportunidad para su práctica y se relaciona con los de contradicción y lealtad; con él se persigue impedir que se sorprenda al adversario con pruebas de último momento, que no alcance a controvertir, o que se propongan cuestiones sobre

las cuales no puede ejercitar su defensa. (Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales, 1972).

Principio de inmediación:

Si percepción es el proceso de llegar a conocer determinado objeto, es decir, que la percepción está regida por la atención, la inmediación supone la percepción de la prueba por parte del juez y su participación personal y directa en la producción del medio probatorio. (Parra Quijano, Manual de Derecho Probatorio, 2006).

Principio de concentración de la prueba:

Debe procurarse practicar la prueba de una vez, es una misma etapa del proceso, pues, la practicada por partes o repetida, pone en peligro no pocas veces la averiguación de la verdad, impide el debido cotejo, la mejor apreciación (Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales, 1972).

Principio de la licitud de la prueba:

Para el autor colombiano Jairo Parra Quijano, la prueba ilícita es aquella que se obtiene violando los derechos fundamentales de las personas, bien haya sido para lograr la fuente de prueba o bien para lograr el medio probatorio, y su proscripción es consecuencia de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y de su afirmada condición de inviolables (Parra Quijano, Manual de Derecho Probatorio, 2006).

Principio de la obtención coactiva de los medios materiales de prueba:

Si la suerte del proceso y de la justicia que con él se quiere impartir depende de la prueba, es absurdo que el juez carezca de facultades para obtenerla. [...] Existe, pues, un deber de prestarle colaboración a la justicia, en materia de pruebas, y esa colaboración es un límite necesario a la

libertar individual, impuesto por razones de interés público, tanto a los terceros como a las partes. (Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales, 1972).

2.3. Bases legales

Las bases legales se conforman a partir de las expresiones de ley en las que se consagra el medio de prueba de la declaración de parte (o que en su defecto, por tratarse el Código General del Proceso de una norma de carácter residual, remitan las normas procesales de tipo especial a la regulación contemplada sobre este punto en el CGP) y las reglas procesales aplicables al mismo, así como normas que regulen medios de prueba similares (confesión y testimonio de terceros) y sus reglas de producción probatoria:

Ley 1564 de 2012- “Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO 6. INMEDIACIÓN. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.

ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.

ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción.

ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

CAPÍTULO III. DECLARACIÓN DE PARTE Y CONFESIÓN.

ARTÍCULO 191. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN. La confesión requiere:

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.

2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.

La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.

ARTÍCULO 192. CONFESIÓN DE LITISCONSORTE. La confesión que no provenga de todos los litisconsortes necesarios tendrá el valor de testimonio de tercero.

Igual valor tendrá la que haga un litisconsorte facultativo, respecto de los demás.

ARTÍCULO 193. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.

ARTÍCULO 194. CONFESIÓN POR REPRESENTANTE. El representante legal, el gerente, administrador o cualquiera otro mandatario de una persona, podrá confesar mientras esté en el ejercicio de sus funciones.

La confesión por representante podrá extenderse a hechos o actos anteriores a su representación.

ARTÍCULO 195. DECLARACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.

Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de que, si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv).

ARTÍCULO 196. INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN Y DIVISIBILIDAD DE LA DECLARACIÓN DE PARTE. La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe.

Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente.

ARTÍCULO 197. INFIRMACIÓN DE LA CONFESIÓN. Toda confesión admite prueba en contrario.

ARTÍCULO 198. INTERROGATORIO DE LAS PARTES. El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso.

Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio.

Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no esté facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad del representante informarse suficientemente.

Cuando se trate de incidentes y de diligencias de entrega o secuestro de bienes podrá decretarse de oficio o a solicitud del interesado el interrogatorio de las partes y de los opositores que se encuentren presentes, en relación con los hechos objeto del incidente o de la diligencia, aun cuando hayan absuelto otro en el proceso.

Si se trata de terceros que no estuvieron presentes en la diligencia y se opusieron por intermedio de apoderado, el auto que lo decrete quedará notificado en estrados, no admitirá recurso, y en él se ordenará que las personas que deben absolverlo comparezcan al juzgado en el día y la hora señalados; la diligencia solo se suspenderá una vez que se hayan practicado las demás pruebas que fueren procedentes.

Practicado el interrogatorio o frustrado este por la no comparecencia del citado se reanudará la diligencia; en el segundo caso se tendrá por cierto que el opositor no es poseedor.

El juez, de oficio, podrá decretar careos entre las partes.

ARTÍCULO 199. DECRETO DEL INTERROGATORIO. En el auto que decrete el interrogatorio se fijará fecha y hora para la audiencia y se ordenará la citación del absolvente.

Cuando se trate de persona que por enfermedad no pueda comparecer al despacho judicial, se le prevendrá para que permanezca en su habitación el día y hora señalados. De ser el caso, el juez podrá autorizar la utilización de medios técnicos.

PARÁGRAFO. Cuando en un proceso sea parte quien ostente la condición de Presidente de la República o de Vicepresidente, la prueba se practicará en su despacho.

ARTÍCULO 202. REQUISITOS DEL INTERROGATORIO DE PARTE. El interrogatorio será oral. El peticionario podrá formular las preguntas por escrito en pliego abierto o cerrado que podrá acompañar al memorial en que pida la prueba, presentarlo o sustituirlo antes del día señalado para la audiencia. Si el pliego está cerrado, el juez lo abrirá al iniciarse la diligencia.

Si el absolvente concurre a la audiencia, durante el interrogatorio la parte que solicita la prueba podrá sustituir o completar el pliego que haya presentado por preguntas verbales, total o parcialmente.

El interrogatorio no podrá exceder de veinte (20) preguntas, pero el juez podrá adicionado con las que estime convenientes. El juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, las que no sean claras y precisas, las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o en interrogatorio anterior, las inconducentes y las manifiestamente superfluas.

Las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente. En este evento, el objetante se limitará a indicar la causal y el juez resolverá de plano mediante decisión no susceptible de recurso.

Las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal se formularán por el juez sin juramento, con la prevención al interrogado de que no está en el deber de responderlas.

Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho; si contiene varios, el juez la dividirá de modo que la respuesta se dé por separado en relación con cada uno de ellos y la división se tendrá en cuenta para los efectos del límite de preguntas. Las preguntas podrán ser o no asertivas.

ARTÍCULO 203. PRÁCTICA DEL INTERROGATORIO. Antes de iniciarse el interrogatorio se recibirá al interrogado juramento de no faltar a la verdad.

En la audiencia también podrán interrogar los litisconsortes facultativos del interrogado.

El interrogado deberá concurrir personalmente a la audiencia, debidamente informado sobre los hechos materia del proceso.

Si el interrogado manifestare que no entiende la pregunta el juez le dará las explicaciones a que hubiere lugar.

Cuando la pregunta fuere asertiva, la contestación deberá limitarse a negar o a afirmar la existencia del hecho preguntado, pero el interrogado podrá adicionarla con las explicaciones que considere necesarias. La pregunta no asertiva deberá responderse concretamente y sin evasivas. El juez podrá pedir explicaciones sobre el sentido y los alcances de las respuestas.

Si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o impertinentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuencia.

El juez, de oficio o a petición de una de las partes, podrá interrogar a las demás que se encuentren presentes, si lo considera conveniente.

La parte al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; estos serán agregados al expediente y serán apreciados como

parte integrante del interrogatorio y no como documentos. Así mismo, durante la declaración el interrogado podrá reconocer documentos que obren en el expediente.

ARTÍCULO 204. INASISTENCIA DEL CITADO A INTERROGATORIO. La inasistencia del citado a interrogatorio solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumada de una justa causa que el juez podrá verificar por el medio más expedito, si lo considera necesario.

Si el citado se excusa con anterioridad a la audiencia, el juez resolverá mediante auto contra el cual no procede ningún recurso.

Las justificaciones que presente el citado con posterioridad a la fecha en que debía comparecer, solo serán apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia. El juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito. Si acepta la excusa presentada por el citado, se fijará nueva fecha y hora para la audiencia, sin que sea admisible nueva excusa.

La decisión que acepte la excusa y fije nueva fecha se notificará por estado o en estrados, según el caso, y contra ella no procede ningún recurso.

ARTÍCULO 205. CONFESIÓN PRESUNTA. La inasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito.

La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda y en las excepciones de mérito o en sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca, o cuando el interrogado se niegue a responder sobre hechos que deba conocer como parte o como representante legal de una de las partes.

Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la inasistencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder se apreciarán como indicio grave en contra de la parte citada.

CAPÍTULO V. DECLARACIÓN DE TERCEROS.

ARTÍCULO 208. DEBER DE TESTIMONIAR. Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley.

ARTÍCULO 209. EXCEPCIONES AL DEBER DE TESTIMONIAR. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión:

1. Los ministros de cualquier culto admitido en la República.
2. Los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquiera otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto.

ARTÍCULO 210. INHABILIDADES PARA TESTIMONIAR. Son inhábiles para testimoniar en todo proceso los que se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no puedan darse a entender.

Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella. El juez resolverá en la audiencia, y si encuentra probada la causal se abstendrá de recibir la declaración.

ARTÍCULO 212. PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE TESTIMONIOS.

Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.

El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso.

ARTÍCULO 213. DECRETO DE LA PRUEBA. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente.

ARTÍCULO 218. EFECTOS DE LA INASISTENCIA DEL TESTIGO. En caso de que el testigo desatienda la citación se procederá así:

1. Sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez, se prescindirá del testimonio de quien no comparezca.
2. Si el interesado lo solicita y el testigo se encuentra en el municipio, el juez podrá ordenar a la policía la conducción del testigo a la audiencia si fuere factible. Esta conducción también podrá adoptarse oficiosamente por el juez cuando lo considere conveniente.
3. Si no pudiere convocarse al testigo para la misma audiencia, y se considere fundamental su declaración, el juez suspenderá la audiencia y ordenará su citación.

Al testigo que no comparezca a la audiencia y no presente causa justificativa de su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, se le impondrá multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

ARTÍCULO 219. REQUISITOS DEL INTERROGATORIO. Las preguntas se formularán oralmente en la audiencia. Sin embargo, si la prueba se practica por comisionado las partes podrán entregar cuestionario escrito antes del inicio de la audiencia.

Cada pregunta versará sobre un hecho y deberá ser clara y concisa. Si no reúne los anteriores requisitos el juez la formulará de la manera indicada.

ARTÍCULO 220. FORMALIDADES DEL INTERROGATORIO. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes les precedan.

Presente e identificado el testigo con documento idóneo a juicio del juez, este le exigirá juramento de decir lo que conozca o le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio. A los menores de edad no se les recibirá juramento, pero el juez los exhortará a decir la verdad.

El juez rechazará las preguntas inconducentes, las manifiestamente impertinentes y las superfluas por ser repetición de una ya respondida, a menos que sean útiles para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho. Rechazará también las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia.

Las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente, y cuando fueren sugestivas. En este evento, el objetante se limitará

a indicar la causal y el juez resolverá de plano y sin necesidad de motivar, mediante decisión no susceptible de recurso.

Cuando la pregunta insinúe la respuesta deberá ser rechazada, sin perjuicio de que una vez realizado el interrogatorio, el juez la formule eliminando la insinuación, si la considera necesaria.

ARTÍCULO 221. PRÁCTICA DEL INTERROGATORIO. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:

1. El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya realizado, demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo que afecte su imparcialidad.
2. A continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los mismos. Cumplido lo anterior continuará interrogándolo para precisar el conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener del testigo un informe espontáneo sobre ellos.
3. El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance.
4. A continuación el juez podrá interrogar quien solicitó la prueba y contrainterrogar la parte contraria. En el mismo orden, las partes tendrán derecho por una sola vez, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al testigo, con fines de aclaración y refutación. El juez podrá interrogar en cualquier momento.

5. No se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido de la pregunta, ni a reproducción del texto de ella.

6. El testigo al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio. Así mismo el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración.

7. El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que el juez lo autorice cuando se trate de cifras o fechas, y en los demás casos que considere justificados siempre que no afecte la espontaneidad del testimonio.

8. Al testigo que sin causa legal se rehusare a declarar a pesar de ser requerido por el juez para que conteste, se le impondrá multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) o le impondrá arresto inmutable de uno (1) a diez (10) días. El que diere respuestas evasivas a pesar de ser requerido, se le impondrá únicamente la sanción pecuniaria.

9. Cuando el declarante manifieste que el conocimiento de los hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de esta y explicar la razón de su conocimiento. En este caso el juez, si lo considera conveniente, citará de oficio a esa persona aun cuando se haya vencido el término probatorio.

ARTÍCULO 223. CAREOS. El juez, si lo considera conveniente, podrá ordenar careos de las partes entre sí, de los testigos entre sí y de estos con las partes, cuando advierta contradicción.

Ley 1437 de 2011 - “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

ARTÍCULO 211. RÉGIMEN PROBATORIO. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 217. DECLARACIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.

Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El Juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Decreto Ley 2158 de 1948 - "Sobre los procedimientos en los juicios del trabajo"

ARTICULO 59. COMPARECENCIA DE LAS PARTES. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 sobre Régimen de Transición. El nuevo texto es siguiente:> El juez podrá ordenar la comparecencia de las partes a las audiencias

a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos; la renuencia de las partes a comparecer tendrá los efectos previstos en el artículo 77.

ARTÍCULO 77. AUDIENCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, SANEAMIENTO Y FIJACIÓN DEL LITIGIO. <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 sobre Régimen de Transición. El nuevo texto es siguiente:> Contestada la demanda principal y la de reconvencción si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda.

Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será él quien la dirija.

En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas:

Si alguno de los demandantes o de los demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.

Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento.

Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:

1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito.

2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.

Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.

3. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra.

4. En el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.

Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.

Si se llegare a un acuerdo total se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se procederá en la misma forma en lo pertinente.

PARÁGRAFO 1o. Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia:

1. Decidirá las excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 32.

2. Adoptará las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

3. Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliación parcial.

Igualmente, si lo considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito.

4. A continuación el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para audiencia de trámite y juzgamiento, que habrá de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de pruebas en la audiencia de trámite y juzgamiento; y respecto al dictamen pericial ordenará su traslado a las partes con antelación suficiente a la fecha de esta audiencia.

Ley 906 de 2004 - “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

ARTÍCULO 382. MEDIOS DE CONOCIMIENTO. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 390. EXAMEN DE LOS TESTIGOS. Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la

Constitución y la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley.

ARTÍCULO 391. INTERROGATORIO CRUZADO DEL TESTIGO. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas.

En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo.

Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo.

Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio.

ARTÍCULO 392. REGLAS SOBRE EL INTERROGATORIO. El interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones:

- a) Toda pregunta versará sobre hechos específicos;
- b) El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa;
- c) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo;

d) El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitirá a las demás partes el examen de los mismos;

e) El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente.

El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas.

ARTÍCULO 393. REGLAS SOBRE EL CONTRAINTERROGATORIO. El contrainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones:

a) La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado;

b) Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral.

El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio, de acuerdo con las reglas anteriores.

ARTÍCULO 394. ACUSADO Y COACUSADO COMO TESTIGO. Si el acusado y el coacusado ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en este código.

ARTÍCULO 395. OPOSICIONES DURANTE EL INTERROGATORIO. La parte que no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del

interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada.

ARTÍCULO 396. EXAMEN SEPARADO DE TESTIGOS. Los testigos serán interrogados separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de quienes les preceden.

Se exceptúa de lo anterior, además de la víctima y el acusado cuando decide declarar, aquellos testigos o peritos que debido al rol desempeñado en la preparación de la investigación se requiera de su presencia ininterrumpida en la sala de audiencias, bien sea apoyando a la Fiscalía o a la defensa.

ARTÍCULO 397. INTERROGATORIO POR EL JUEZ. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso.

ARTÍCULO 404. APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad.

Ley 1565 de 2012 – “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO 31. AUDIENCIAS Y PRUEBAS. El tribunal en pleno realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin participación de las partes. Las audiencias

podrán realizarse por cualquier sistema que permita la comunicación de los participantes entre sí.

El tribunal y las partes tendrán, respecto de las pruebas, las mismas facultades y deberes previstos en el Código General del Proceso y las normas que lo modifiquen o complementen. Las providencias que decreten pruebas no admitir recurso alguno; las que las nieguen son susceptibles de reposición. Cuando la prueba haya de practicarse en el exterior, se aplicarán los tratados vigentes sobre la materia y, en subsidio, las normas del Código General del Proceso, en lo pertinente. En este caso, cuando en el proceso se hayan practicado todas las pruebas y sólo faltare la prueba en el exterior, los árbitros podrán suspender de oficio el proceso arbitral, mientras se practicare la misma (...).

2.4. Sistema teórico

Variables

Variable	Definición
Declaración de parte	La declaración de parte es un medio de prueba que consiste en rendir la versión que tiene la parte sobre los hechos objeto el litigio.
Interrogatorio de parte	El interrogatorio de parte es un instrumento procesal para la práctica del medio de prueba de la confesión.
Confesión	La confesión es un medio de prueba que consiste en que a través de un interrogatorio de parte, se llegue el reconocimiento de un hecho con consecuencias adversas o desfavorables para el que lo absuelve.
<i>Iter</i> probatorio	El <i>íter</i> probatorio, es el procedimiento probatorio constituido por las fases solicitud, decreto, práctica y valoración.

Operalización de variables

VARIABLE: Declaración de parte

Dimensiones	Indicadores
Solicitud	<ul style="list-style-type: none">• De la parte: solicita la declaración de la propia parte• De la contraparte: solicita la declaración de la contraparte
Decreto	<ul style="list-style-type: none">• Del Juez: decreta el medio de prueba conforme al Código General del Proceso
Práctica	<ul style="list-style-type: none">• De la parte: realiza preguntas a su parte y a la parte contraria• De la contraparte: realiza preguntas a la parte contraria y a su parte• Del Juez: práctica un interrogatorio exhaustivo a las partes y lo que no se configura como confesión genera declaración de parte
Valoración	<ul style="list-style-type: none">• Del Juez: Valora conforme a las reglas generales de apreciación de las pruebas.

VARIABLE: Confesión

Dimensiones	Indicadores
Solicitud	<ul style="list-style-type: none">• De la contraparte: cada parte solicita la confesión de su contrario mediante interrogatorio de parte.
Decreto	<ul style="list-style-type: none">• Del Juez: el juez decreta la confesión como medio de prueba para que sea practicado desde el interrogatorio de parte.
Práctica	<ul style="list-style-type: none">• De la contraparte: cada contraparte mediante interrogatorio de parte, práctica la prueba según lo establecido en el Código General del Proceso.• Del Juez: el juez práctica el interrogatorio buscando la confesión de los hechos.

Valoración	<ul style="list-style-type: none"> Del Juez: Valora conforme a una regla de tarifa legal la confesión y a las reglas generales de apreciación de las pruebas si se trata de la declaración de parte.
------------	---

VARIABLE: Interrogatorio de parte

Dimensiones	Indicadores
Solicitud	<ul style="list-style-type: none"> De la parte: La parte solicita que mediante interrogatorio se practique la prueba de confesión. De la contraparte: La parte solicita que mediante interrogatorio se practique la prueba de confesión.
Decreto	<ul style="list-style-type: none"> Del Juez: El juez decreta el interrogatorio de parte como instrumento procesal para practicar la confesión.
Práctica	<ul style="list-style-type: none"> De la contraparte: La parte práctica el interrogatorio que solicitó realizando las preguntas conforme al Código General del Proceso. Del Juez: Tiene la facultad de preguntar incluso superando el límite de 20 preguntas dispuestas en el Código General del Proceso para la práctica del interrogatorio de parte.
Valoración	<ul style="list-style-type: none"> Del Juez: No hay valoración del interrogatorio de parte sino de su producto sea confesión o declaración de parte.

VARIABLE: *Iter* probatorio

Dimensiones	Indicadores
Solicitud	Las partes pueden solicitar los medios de prueba establecidos en el régimen probatorio del Código General del Proceso.

Decreto	El juez es el encargado de decretar los medios de prueba solicitados por la partes si estos superan el juicio de admisibilidad.
Práctica	El juez como director del proceso lleva a cabo la práctica de los medios de prueba conforme a las reglas para su práctica, la confesión mediante el interrogatorio y la declaración de parte sin reglas expresas, exhortando a las partes para que lo lleven a cabo en las oportunidades procesales correspondientes.
Valoración	El juez valora la producción probatoria del proceso mediante las reglas generales de apreciación de las pruebas.

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y método de investigación

El presente trabajo de grado, se fundamenta epistemológicamente en el paradigma hermenéutico, toda vez que su finalidad es analizar, identificar e interpretar el fenómeno objeto de estudio, como lo son las reglas de producción probatoria del medio de prueba de la declaración de parte bajo la regulación de la Ley 1564 de 2012 –Código General del Proceso –.

El tipo de investigación es jurídica y de enfoque cualitativo, en la medida en que se analiza los antecedentes históricos de este medio de prueba para describir su origen y mutación en el tiempo hasta llegar a su historia en Colombia, realizando un análisis en relación con el paradigma racional de la prueba y el medio probatorio objeto de estudio, así mismo, se acude a algunos de los insumos foráneos vigentes sobre este medio de prueba y las fuentes del derecho en Colombia, determinando el *iter* probatorio de la declaración de parte limitándose a la regulación normativa del Código General del Proceso encontrado sus posibles vacíos legales y las formas de interpretación y comprensión por la comunidad jurídica colombiana.

Además, puede predicarse de la presente investigación su desarrollo a partir de métodos de pensamiento lógico con fines cognitivos, específicamente de la producción probatoria de la declaración de parte.

3.2. Población y muestra

El trabajo de grado toma como población la normativa procesal nacional que regula el medio de prueba de declaración de parte, principalmente el Código General del Proceso, entendiéndose que esta corresponde a su vez a la muestra seleccionada para efectuar la presente investigación. Así mismo se acudirá a las normas procesales civiles de Chile, Ecuador, España, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica con las cuales se realizará un análisis correlacional del medio de prueba de la declaración de parte respecto del derecho nacional sobre la materia. Y finalmente, en atención a

que se realizarán entrevistas, se toma como población a los funcionarios judiciales de la ciudad de Cúcuta que ostentan la calidad de jueces y magistrados en las diferentes jurisdicciones y especialidades, eligiéndose como muestra a un magistrado de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a un juez y un magistrado de la Jurisdicción Ordinaria Especialidad Laboral y a un Juez Civil Municipal.

3.3. Técnicas de recolección de información

Como técnica para la recolección de la información se utilizará la ficha de análisis jurisprudencial desarrollada en el texto *Método, metodología y técnicas de la investigación aplicadas al derecho* (Yañez Meza, 2014), así mismo se empleará ficha de análisis legal. Y se realizarán entrevistas semiestructuradas como técnica y procedimiento para la recolección de información descritas en el texto *Formulación y desarrollo del proyecto de grado* (Niño Ochoa, 2012).

3.4. Análisis de la información

El análisis de la información se realizará a través de uso de tablas o gráficos en las que se evidenciará las diferentes reglas de producción probatoria asumidas por los países estudiados de derecho comparado.

Las entrevistas serán analizadas de acuerdo a cada pregunta realizada y del cruce de información entre ellas.

Así mismo, en relación a las fichas de análisis jurisprudencial se usará el análisis de contenidos a partir del análisis de la información que se infiere a partir de las conclusiones que se obtengan de la disertación respectiva.

De igual forma, las fichas de análisis legal serán analizadas a partir de la información y las expresiones de ley en ellas contenidas.

1. TÍTULO PRELIMINAR: DESARROLLO HISTÓRICO DEL MEDIO DE PRUEBA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE

En la historia de la humanidad han existido organizaciones socio-políticas que en algún momento de su evolución deben recurrir a las normas, al derecho, a lo coaccionable física o psicológicamente para mantener un aparente orden en sus civilizaciones, por lo que los problemas respecto a bienes materiales e inmateriales siempre están presentes en cualquier sociedad. Es por esto que se crean procesos o procedimientos dentro del marco de leyes creadas por el órgano encargado en cada momento histórico, para que todos tengan acceso al mismo mecanismo para solucionar sus disputas con la ayuda de un delegado del poder vigente que brinde legitimidad a la resolución de dicho problema, es dentro de estos procesos donde se necesita la recolección de información para definir la causa y es cuando aparecen los mecanismos para hallar las versiones de los hechos que aportan las personas que conocen el asunto que se discute, sean testigos o las mismas partes, son los mecanismos para obtener estas versiones a lo largo de la historia conocida lo que ocupa este título, conocer cuáles eran los procedimientos para obtener esta información, su evolución, reglamentación e importancia para las instituciones modernas es lo que en lo se abordará en las siguientes páginas.

1.1. Albores del dicho de las partes como medio de prueba

En los sistemas jurídicos de las civilizaciones antiguas existen una serie de referencias respecto de aquellos medios de prueba que sirven de base histórica para entender la escisión de la confesión y de la declaración de parte y posteriormente su valoración, un antecedente común a estas dos era el testimonio de la parte que en la mayoría de las legislaciones relevantes anteriores a la romana se rendía bajo juramento pero sin distinguirse en esencia del testimonio de terceros, la diferencia sólo radicaba en el rol desempeñado por quienes absolvían la práctica de la prueba, las partes desde un rol principal y autónomo mientras que el de los terceros era de carácter accesorio, tanto así que el testimonio único de tercero era rechazado para probar un hecho en la mayoría de las legislaciones que se desarrollaron en Mesopotamia (Lara Peinado, Código de Hammurabi, 2012).

En la historia del derecho antes de Roma existieron varias ciudades-Estado que aportaron a la evolución de los sistemas jurídicos, estas organizaciones políticas ubicadas alrededor del río Tigris y Éufrates iniciaron la reglamentación de los actos privados dedicados al comercio, como la compra y venta de bienes, el pago de indemnizaciones por perjuicios en bienes de consumo, el establecimiento de la monogamia para poder organizar su situación demográfica y económica, la reglamentación de la pena de exilio para los criminales, y el establecimiento de ciertos procedimientos judiciales para recobrar la honra y bienes, es aquí donde el incipiente derecho procesal inicia en estas ciudades-estado por lo que es menester analizar cada sistema de leyes, códigos y tablas, de esta región. El primero, es el código de Ur-Nammu (Ur-Nammu de Ur, 2112 - 295 a. C.), Ur-Nammu fue un rey perteneciente a la III dinastía Ur, este es considerado uno de los primeros legisladores en la historia de la humanidad (Lara Peinado, Código de Hammurabi, 2012) algunos de sus escritos se encontraron grabados sobre piedra, no se conoce su fecha de vigencia específica, sólo se conoce que es anterior al Código de Hammurabi, el profesor Samuel N. Kramer (1959) fue quien lo descifró y declaró que es el código legal más antiguo del mundo, este código a diferencia de los coetáneos y siguientes es muy organizado en tanto que describe la organización política y judicial y la forma en cómo se iniciaban los procesos (Kramer, 1959) se iniciaba por una de las partes o por la administración del Estado, si el interés del mismo estaba en juego, por otra parte como referencia al aspecto probatorio de los procesos judiciales establece que:

“El testimonio consistía en declaraciones de los testigos, por lo general bajo juramento; de una de las partes, también juramentada; o en forma de informes o protocolos escritos por <expertos> o altos funcionarios del Estado.” (Kramer, 1959)

Dentro del texto traducido por el sumerólogo no se encuentra la forma en que se valoraban los dichos de las partes, sólo que a partir de estos los jueces y escribas de Ur-Nammu proferían una decisión a los conflictos que conocían, otro sistema de leyes relevantes fueron las Leyes de Eshnunna (Bilalama, 2000 a. C.) fueron descubiertas en 1945 y 1947, en Tell Abu Harmal cerca de Bagdad, actual Tell Asmar, Eshnunna fue la ciudad capital de Warum, un territorio ubicado entre los montes Zagros y el río Tigris, antigua región mesopotámica, los códigos que regían la vida de este lugar no estaban organizados pues establecían una regulación para los asuntos de todos

los ámbitos de forma desorganizada y no distinguida, al respecto se puede resaltar una disposición de carácter probatorio:

“Si un hombre no reclama contra (ningún otro) hombre, pero (sin embargo) perturba a la esclava de (otro) hombre, el propietario de la esclava declarará bajo juramento "Vos no declarasteis en contra de mí" y pagará (a él) plata en compensación completa por la esclava.”

Otra disposición que se establece el que, referente a la declaración de las partes establece que:

“Si un hombre declara consumación, pero su futuro suegro le ofende entregando su hija a (otro hombre) ... el padre de la hija deberá devolver el doble de dinero que recibió como dote.”

La primera disposición establece que el hombre que perturbaba la esclava de otro hombre debía pagarle en dinero lo que compensa el valor total de la esclava cuando el propietario de esta declarase que él había perturbado su propiedad, la perturbación era física en maltrato físico o abuso sexual, y la segunda establece que si un hombre declara querer realizar el acto sexual o conyugal con la prometida para consumir su matrimonio y esto ofende al padre de esta, ocurría que por la ofensa la ofrecía y daba a otro hombre, su padre debía regresar los bienes que había recibido por su hija, estas declaraciones debían rendirse ante la Jurisdicción de Eshnunna. También dentro de la ritualidad de las audiencias judiciales los litigantes debían declarar ante el juez que estarían dispuestos a obedecer la decisión a que llegara oportunamente la corte y que no renovarían pleito alguno sobre el mismo asunto, por otra parte existió una codificación en el Reino Hammurabi denominado Código de Hammurabi (aproximadamente año 1692 a.C.) (Rey Hammurabi, 1200 a. C.) es la compilación de las leyes de medio oriente de la época, en vigencia del Reino de Hammurabi, estas normas se establecen consuetudinariamente, y por esto no tienen una organización sistemática, pero en referencia a las pruebas dentro de sus procesos judiciales se establece:

“Si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado.”

Otro ejemplo referente a las declaraciones de terceros es la siguiente:

“Si un hombre que ha perdido una cosa suya halla lo perdido en manos de otro hombre, y el hombre en cuyas manos se halla lo perdido declara:

«Un vendedor me lo vendió; lo compré ante testigos», y si el dueño de lo perdido declara: «Voy a presentar testigos que conocen la cosa perdida por mí», y si el comprador presenta al vendedor que se la vendió y a los testigos ante los que compró y el dueño de lo perdido presenta también a los testigos que conocían lo perdido por él, los jueces **examinarán** sus declaraciones; además, tanto los testigos ante los que se compró como los testigos que conocían lo perdido declararán lo que saben ante [el] dios. Si según ello, el ladrón es el vendedor; que sea ejecutado. El dueño de lo perdido recuperará lo perdido. El comprador recuperará el dinero que pagó del patrimonio del vendedor.”

En estos casos se establece la importancia de la veracidad de la declaración ante los órganos jurisdiccionales dado que al no probarse lo dicho las consecuencias era la ejecución del que declaró falsamente, el examen de la declaración en el segundo caso es competencia de los jueces, aunque no se dice cómo se examina, se presume una sana crítica ante el dicho del vendedor, el comprador y el antiguo dueño, por su parte en el siglo XIV a. C. se crearon el sistema de Leyes Asirias Medias estas son doce tablas que guardan un orden sistemático entre sí, fueron compiladas durante el reinado de Teglathalasar, en esta codificación se establecen penas muy fuertes o leoninas, en referencia a la prueba en la primera tablilla se estableció:

“Si un hombre dice a otro hombre: ‘Todos yacen con tu mujer’, pero no tiene testigos, acordarán las condiciones y acudirán al Río. [Ordalía fluvial].”

Como última gran codificación diferente a la de las ciudades-estado de la antigua Mesopotamia es el Código de Manú (Leyes de Manu, 200 a. C.) este código se desarrolló en la India, tiene XII libros, estas desarrollan instituciones como el matrimonio, la familia, la mujer, los

reyes, las penas entre otras pautas sociales, esto contenía un gran compilado interdisciplinar, (ética, religión, jurídico, espiritual) entre esto establecía en el libro VII referente a la prueba testimonial que:

“Aquel que pronuncia un falso testimonio con la esperanza de obtener algún beneficio, debe ser condenado a 1000 panas de multa; si mintió por temor, la multa debe ser de 150 panas; si obedeció a la amistad, pagará 1000 panas; si habló contra la verdad por concupiscencia, 2 500 panas; por cólera, 1 500; por ignorancia, 200; por aturdimiento, 100 panas solamente.”

Las anteriores fueron las referencias antiguas más relacionadas con lo que hoy denominamos medio de prueba de la declaración de parte, pero en su esencia estas referencias no fueron medios de prueba, sino precursores del derecho de acción dado porque la declaración de las personas iniciaba el proceso y era prueba a la vez por la sacramentalidad que tenía la palabra en estas culturas mesopotámicas.

Los ordenamientos jurídicos que se analizaron anteriormente demuestran que la declaración de las partes era el mecanismo para iniciar los procesos judiciales ante la jurisdicción. Ahora, después de iniciado el proceso, la declaración de las partes se ceñía a seguir instrucciones para que lo declarado tuviera un efecto legal desde lo divino, este podía ser sometido a contradicción desde el testimonio de la contraparte que debía someterse igualmente a las instrucciones legales para contradecir lo dicho, lo anterior, teniendo en cuenta que en ese contexto el valor que se le daba a la palabra era sacramental por su relación con el castigo o la coacción divina que podía llegar a ocurrir en caso de faltar a la verdad, por esto las reglas para constatar la veracidad de las declaraciones de las partes no existían.

1.2. Desarrollo continental-europeo de la declaración de parte

En la continuación del desarrollo histórico de la declaración de la parte se estudiará a Roma para comprender las bases del derecho procesal occidental, su procedimiento civil, *Ordo iudiciorum privatorum*, contaba con el procedimiento para la creación de la prueba testimonial y

confesional, la *Legis Actiones*, era un procedimiento de dialogo entre las partes de la controversia, interrogándose entre estas para encontrar la mejor recreación del hecho que dio inicio al problema (Gómez Lara, 1974, pág. 44), luego encontramos la *Per formularon o Interrogatio in Iure* en este procedimiento la parte proponía una demanda con una solicitud de interrogatorio a la otra parte, podía ser admitida o inadmitida, si era admitida entonces el juez privado daba paso a la *Lex aebutia* que era la aceptación del formulario de preguntas del accionante por parte del accionado, esto daba paso a la *confessio in iure*, es decir, el accionado confesaba y si era suficiente de terminaba el proceso, pero si no había paso a la *Lex aebutia* se daba el *in iudicio* que era el intercambio de preguntas y respuestas por las partes acompañadas del *Altercatio*, es decir, la intervención del tercero, juez, arbitro o magistrado, por otra parte estaba el *Extra ordinem* en el cual un juez público requería a las partes en un interrogatorio judicial individual que se fundamentaba en la carga estática de la prueba, bajo el principio *actore non probante reus absolvitur*, a partir de estas instituciones se podía constar la evolución del *Interrogatio in iure* del *Per Formularom* al *Interrogatio ante litem contestatum* lo que derivaría en la confesión de la parte al realizar preguntas que sustentaban la teoría de los hechos del que cuestionaba (Sentis Melendo & Ayerra Redin, 1954).

De la anterior surgió la postura *per positiones* del Derecho canónico en la que las partes se interrogan informalmente fundamentadas en un juramento indecisorio, es decir, las declaraciones de las partes son pruebas decisivas por perjudicar a quien las declaró, seguida a esta postura surge en el Derecho medieval la *Ficta confessio* la cual es denominada con el origen de la confesión judicial la cual toma el rango de prueba legal por el grado de certeza que supuestamente brindaba.

Por otra parte, producto del interés de los *civitas* por controlar las actuaciones de sus conciudadanos se crea desde la conocida ley de las XII Tablas (*Lex XII Tabularum*) la *actio* como instrumento procesal que permite la resolución de los conflictos ante un tribunal legalmente constituido, acciones que se fueron desarrollando hasta llegar a figuras como la *ordo iudiciorum privatorum* y específicamente desde el procedimiento de la *legis actionis* en su fase *apud iudicem*¹

¹ Se trata de la segunda fase del procedimiento *legis actionis*, precedida de la fase *in iure* que se realiza ante un experto en materia jurídica que inicia y encauza en proceso, esta fase se adelanta ante el *iudex* (juez) que era un

en la cual se desarrollaba el litigio frente a un juez o conjunto de jueces que no eran expertos en derecho.

Por su parte en Castilla, se profirió el Código de las Siete Partidas redactadas por Alfonso X de 1348, la confesión se había dividido en tres clases, la extrajudicial, la judicial, y la ficticia o ficta, en el título XIV se regula su valor, la judicial, como plena prueba en materia penal y civil, condicionándola a su libre voluntad de realizarla en caso contrario carecía de valor probatorio (Real Academia de la Historia, 1807).

Europa siempre ha tenido un avance significativo en el ordenamiento jurídico de las naciones que se han desarrollado en este territorio, una gran cantidad de rutas terrestres y marítimas facilitaron el avance de muchos ámbitos del conocimiento humano, el derecho no fue la excepción, Roma, en todas sus formas de organización política distribuyó en todo el territorio europeo la forma de resolver conflictos patrimoniales y penales, estos procesos que se desarrollaron en Roma estuvieron marcados por los interrogatorios orales y escritos que buscaban desacreditar lo declarado por la contraparte, la sacramentalidad de la palabra venía disminuyendo por lo que los negocios se empezaron a soportarse en documentos, esta pérdida de valor significaba que en los procesos judiciales los dichos de las partes empezaron a ser sujetos a la contradicción de sus contrincantes, todo esto se dejaría de lado poco a poco para dar lugar a la confesión judicial en el derecho medieval, es decir, el dicho de la parte perdió valor probatorio y autonomía, ahora era la confesión lo que tenía valor probatorio, esta era producto de un interrogatorio de la contraparte que buscaba un solo efecto, y era lograr declaraciones que aceptarían hechos que eran perjudiciales al declarante.

1.3. Desarrollo anglosajón de la declaración de parte

Por diversas razones el derecho anglosajón siempre se ha dividido del derecho continental europeo, por esto el derecho procesal, más específicamente el derecho probatorio tiene otros sistemas de producción probatoria, estas son los instrumentos del *examination* y del *cross*

ciudadano no experto en derecho encargado de practicar las pruebas y de dictar la correspondiente sentencia (Fernández Baquero, 2013, pág. 3).

examination, que son las guías para obtener de forma razonable el conocimiento de los hechos y circunstancias por las mismas parte del proceso. El conocimiento de las partes como de las personas interesadas en el proceso y el su sentencia, estaba excluido de este, en la mayoría de sistemas probatorios en el siglo XVII, fue a través de los movimientos doctrinales que vislumbraron su necesidad e importancia que poco a poco se fueron integrando a la normatividad anglosajona, uno de los promotores fue Jhon Henry Wigmore (Wigmore J. , 1915) uno de los americanos referente en materia de derecho probatorio ha declarado que fue a través de los esfuerzos doctrinarios de Jeremy Bentham que se logró argumentar una posición contraria frente a la opinión mayoritaria de excluir a las partes con interés en el proceso y su sentencia², esta posición se minimizó en el postulado de exclusión es *discualification of parties and interesed persons as witness* (Wigmore J. H., 1915). Otros prosélitos del pensamiento de Bentham fueron Thomas Denman y Henry Brougham que llevaron sus ideas a la judicatura británica al ser miembros de esta y con gran influencia sobre el poder legislativo, entre estas está el capítulo 85 del *Statute 6&7 Victoria* de 1835, conocido como *Lords Brougham's Act* al ser promovido por el *Lord Chief Justice*³.

Aún con estas reformas que empezaron a darle cabida al testimonio de las partes, en el *Court of Common Law* siguió siendo excluido, como tampoco se podía interrogar al adversario, por no ser coaccionado a ser testigo, esto se tenía como un privilegio que poco a poco fue desapareciendo en el ordenamiento jurídico inglés y americano, también el juramento deferido no se valoraba como un elemento de convicción decisorio del litigio. En la *Court of Equity* se instituyó el *Discovery by the Interrogatories*, un formulario escrito de preguntas “presentado por una de las partes que deben ser contestadas por escrito por la contraparte” (Van Rhee, 2011), el primero de los escritos se denominaba *Bill* y el que formulaba la contraparte se denominaba *The Cross Bill* su práctica se denominaba *Deposition* y estaba encaminado a buscar la confesión que era denominada una prueba conclusiva o no controvertible, cabe recalcar que es muy similar al instrumento romano de *Per Formularon* o *Interrogatio in Iure* igualmente conducido a la *confessio*

² Al respecto este autor señalaba que “...al comienzo de una causa y luego de todas las veces que sea menester, las partes serán llamadas y escuchadas en carácter de testigos como de partes, cara a cara, en presencia del juez” (Bentham, 1959, pág. 130 y 131).

³ Sobre este punto, véase Taruffo en su libro “La prueba” (Taruffo, La prueba, 2008, pág. 67).

in iure, adaptado luego al derecho canónico en el interrogatorio *per posiciones*, luego en España como interrogatorio de posiciones, y en Francia como *interrogatoire sur faits et articles*, esta forma de producción probatoria fue criticada arduamente por ser escrita, demostrando la eficiencia de la oralidad sobre el principio de la inmediación, frente a la aberrante lentitud y e iniquidad del sistema escrito.

Como se esbozó anteriormente, la doctrina de J. Bentham poco a poco comenzó a legitimarse dentro de los doctrinantes y legisladores, producto de esto se derogó el privilegio de las partes a no ser interrogadas por su adversario como también la descalificación legal a los terceros interesados en el proceso, se avanzó en el *bill and bill cross*, haciéndose ahora de forma oral bajo la denominación de *cross examination* dentro de algunos procesos dados en las *Courts of equity* (Marín Verdugo, 2010), este proceso fue lento e inició con los *Judicature acts* que busco unificar los procedimientos de las diferentes tribunales superiores, estos eran dirigidos por la *Supreme Court of Judicature*, divida en la *High Court* y la *Court of appeal*, por su parte la *Chancery Court* se convirtió en una sección. En los procedimientos surtidos ante la *Courts of common law*, mediante el *Act for the further amendment of the law and the better advancement of justice*, se acogió primero el testimonio de los terceros poco a poco pues sólo se establecieron criterios para su admisibilidad que en casos frecuentes era negada, no siendo sino hasta la promulgación de *Lord Denman's Act* que se derogó estos criterios para la descalificación de los terceros interesados pero mantenía la *rule of disqualification* para el dicho de la parte y el cónyuge de la misma. Iniciaría la degradación de la limitación en 1846 con el *County Courts Act* que consideró a la partes como *competent witness* y legitimados para el *cross examination* en los procesos que conocieran los *County Courts* (estos son los tribunales del Condado, dentro de la ordenamiento jurídico serían los juzgados promiscuos o municipales).

Luego mediante el *Lord Brougham Act* se estableció esto para todos los procedimientos que se daban ante cualquier Corte, con reserva al procedimiento predilecto de la Corte, mediante la técnica del *Cross examinatio* o bien bajo el formalismo de la *Deposition* predominante en las *Courts of equity*, pero sin tener como fin la confesión por lo que el dicho de la parte no sólo podía perjudicarla sino también beneficiarla frente a esta regla estaba las excepciones previstas para el testimonio del cónyuge bajo el principio de *quia sunt duae animae in carne una* para los

procedimientos de violación de promesa de matrimonio y de adulterio, lo que terminó desapareciendo por completo⁴.

La brecha marítima que separa a los demás países de Europa de Inglaterra siempre ha generado que éste mantenga un cierto grado de autonomía cultural del resto de Europa, esto se vio reflejado en el desarrollo del derecho procesal en Inglaterra que posteriormente se trasladó a Estados Unidos, esto debido a que la implementación de la valoración probatoria de la declaración de las partes se dio más rápido que en el resto de ordenamiento jurídicos europeos de la mano de pensadores como Bentham, Denman y Brougham, donde la *examination* y la *cross examination* fue la metodología utilizada para practicar el medio de prueba de la declaración de parte porque sus fases que se asemejan a un embudo decantan una declaración fidedigna de las partes al pasar los filtros judiciales y de la contraparte.

1.4. Historiografía de la declaración de parte en Colombia

A la entrar en vigencia de la ley 1564 del 2012 que regula el Código General del Proceso se presentaron diversas novedades en materia probatoria, entre esas la práctica de la declaración de parte como un medio de prueba autónomo diferente a la confesión, es decir, que por primera vez en Colombia se establece que los relatos de las partes que no constituyen confesión tendrán de igual forma valor probatorio, toda vez, que en nuestras anteriores legislaciones esto no era considerado de tal manera.

Conforme a lo anterior, el propósito de este capítulo es realizar un recuento histórico analizando las normas que han regulado este medio de prueba en diferentes legislaciones

⁴ La primera excepción sería derogada mediante el *Evidence Amendment Act* de 1853, se eliminaría entonces la *disqualification* para los cónyuges convirtiéndolos en competentes y coaccionables para rendir testimonio a viva voz o mediante interrogatorio escrito conforme a la técnica predilecta de la Corte, también se debe resaltar que se le dio relevancia al secreto conyugal, es decir, a no estar obligado ninguno de los dos a revelar secretos comunicados en vigencia del matrimonio. La segunda y tercera excepción sería derogada mediante la *Evidence Further Amendment Act* de 1869 con la condición de que el dicho de la parte en el procedimiento de violación a la promesa de matrimonio, no constituía plena prueba sino que debía ser corroborada mediante otra prueba, esto convertía la testimonio en una semi-prueba o en una prueba leve, de referencia o en un argumento de prueba, también se conservó la garantía para la parte como para los terceros de no responder el interrogatorio cuando se demostrara con ello la culpable de adulterio.

nacionales, empezando con el Código Judicial de 1931, paso seguido el Código de Procedimiento Civil de 1970 y finalizando con el actual Código General del Proceso (Ley 1435 de 2012), para determinar cómo estaba concebida la declaración de parte y la confesión en mencionadas legislaciones y señalar de manera precisa, cuáles han sido las grandes innovaciones de dichos medios de prueba y lograr comprender por qué hoy en día la declaración de parte se toma como una prueba autónoma, diferente a la confesión en el actual Código General del Proceso.

1.4.1. Código judicial de 1931.

En el Código Judicial de 1931 (Ley 105 de 1931) -en adelante C.J.-, se destaca la rigurosidad del medio de prueba de confesión, toda vez que se consagraba una presunción de derecho y se consideraba como la “prueba por excelencia, bajo el imperio del sistema legal-formal se le llamó: *regina probationum* o *probatio probatissima*” (Rocha A., 1967, pág. 213), pues con la sola afirmación de un hecho que le perjudicara a la parte declarante era suficiente para constituirse, por lo que no se admitía prueba en contrario, tal como se establecía en el artículo 606 del mencionado código, es decir, se consideraba plena prueba.

Lo anterior debido a que, en ese entonces, nuestro código adoptaba un sistema escritural mixto con mayor tendencia a la tarifa legal, entendiendo que solo se acogían a los medios de prueba prestablecidos en la ley, realizando una valoración abstracta de ellos. Además, afirma Antonio Rocha A. (1967), que se derivó de una evidente observación social: a partir de la cual el hombre no miente para perjudicarse. Por cuanto, el hombre no se siente impulsado a reconocer como verdaderos aquellos hechos que puedan llegar a ocasionarle algún tipo de perjuicio material o moral, por consiguiente, al reconocer hechos que le causen algún daño, bien sea de su patrimonial moral o material, se le puede tomar la palabra y tenerlos como verdaderos.

De esta forma, el artículo 604 del C.J. definía la confesión como toda “manifestación de una parte de ser cierto el hecho que le perjudica afirmado por la otra (...)”, por ende, se excluía completamente los dichos afirmados por la parte que no le perjudicaban, por lo que solo entraba dentro de la valoración de las pruebas hecha por el juez, los dichos que las partes que ocasionaran algún perjuicio contra la declarante, que se entienden como constitutivos de confesión.

Dicha confesión podía ser judicial y extrajudicial: “(...) es judicial si se hace ante Juez competente en razón de la naturaleza de la causa y en ejercicio de sus funciones; y extrajudicial si fue hecha en otra ocasión, en carta misiva, conversación, o cualquier acto o documento no destinado a servir de prueba” (artículo 604 del C.J.). La primera, se podía considerar prueba completa si provenía de la parte misma sin que se pudiera demostrar lo contrario, a menos que se probara que el confesante hubiere incurrido en error de hecho explicable. La confesión extrajudicial por su parte, era considerada prueba incompleta o deficiente (artículo 608 del C.J.) y su fuerza dependía de las circunstancias que la rodeaban, incluso podía llegar a ser plena prueba, si a juicio del juez no quedaba duda alguna del hecho confesado, otro claro ejemplo de tarifa legal.

El apoderado y el representante legal, tenían capacidad para confesar, siempre y cuando el primero tuviera autorización expresa de su poderdante, la cual se presumía para la demanda, excepciones y contestaciones. Así mismo, valdría la del representante legal, gerente o administrador que estuviera en ejercicio de sus funciones, limitándose a referirse sobre la información que se encontrara dentro de sus facultades (artículo 607 del C.J.).

En cuanto a la oportunidad, según como lo establece el artículo 610 del C.J. solo se podría declarar, cuando la contraparte lo solicitara y el medio o instrumento para llevarse a cabo era a través de la ‘absolución de posiciones’, la cual consistía en la solución de un cuestionario formal presentado por la contraparte. Las absoluciones se podían formular en la misma solicitud o por separado en pliego cerrado mantenido en reserva hasta el momento de ser absuelto, bajo algunas salvedades conforme al artículo 611 *ibídem*.

La solicitud se podía realizar por una sola vez, en el incidente de excepciones y en cada una de las instancias del juicio, o bien, de forma extraprocesal: “antes de ser interpuesta la demanda el futuro demandante tenía la posibilidad de interrogar en posiciones por una sola vez al posible demandado, expresando en la solicitud dirigida al juez competente, la causa, objeto y cuantía de la demanda”.

Estas posiciones no podían exceder el número máximo de veinte (20) preguntas las cuales debían estar redactadas con la mayor claridad posible para que el interrogado tuviese la capacidad

de responder ‘si era cierto o no’ el contenido de cada pregunta y cada una debía versar sobre un hecho (artículo 612 del C.J.).

Llegado el caso en que el absolvente se negara a contestar o sus respuestas fueran evasivas o inconducentes, o si no se presentara en el lugar y hora establecidos para llevar a cabo la absolución sin presentar alguna de las razones justificables plasmadas en el artículo 619 del C.J.⁵, o a pesar de haberse efectuado la notificación al demandado en la forma indicada en el artículo 621 C.J.⁶ no se presenta el citado, en horas del despacho, a absolver las posiciones dentro de los quince días siguientes a la notificación, se presumía como cierto el hecho sometido a confesión.

La confesión era indivisible, así se podía concluir de lo establecido en el artículo 609 del C.J., dado que se debía admitir la confesión tal como se hiciera, con sus modificaciones, aclaraciones y explicaciones sobre el hecho fuente de controversia y si el confesante agregara hechos distintos que no tuvieran íntima relación con el primero, se entendían estos como excepciones que tenía la obligación de probar.

De esta forma, lo anterior tiene fundamento en que se desarrollaba bajo un sistema escritural, el cual le quitaba fe a la declaración de la parte misma, toda vez que el juez no tenía contacto directo con el dicho de la parte en la práctica de la prueba, sino solo con lo que estaba

⁵ “En uno u otro caso, la declaración sobre presunción de ser ciertos los hechos no se hace si quien debió absolver las posiciones comprueba dentro de la articulación, que no pudo concurrir por grave enfermedad de él o de su cónyuge, padre, madre, hijo, hermano, o persona con quien viva en familia; por muerte de alguna de tales personas, acaecida en el mismo día fijado para la absolución o dentro de los nueve anteriores, o por fuerza mayor o caso fortuito.

Si la excusa se declara aceptable, la parte queda con el deber de absolver las posiciones dentro de los tres días siguientes bajo la sanción de que, si en esta vez deja de comparecer, se le declara confesa sin lugar a recurso alguno.” (Ley 105, 1931).

⁶ “Cuando Habiendo juicio en curso no se encuentra la persona a quien se piden posiciones, se procede así:

1. El Secretario practica las diligencias conducentes a la citación personal, de las cuales hace relación en el proceso explicando por qué no ha tenido efecto la citación.
2. Se fijan en la casa de habitación de dicha persona, si aquella es conocida y en las de dos o más de sus parientes, amigos o relacionados, boletas en que se hace saber la citación; y
3. Se publica en un periódico, si lo hay en el lugar del juicio y de no en el oficial del Departamento, Intendencia o Comisaría, o de la Nación, un edicto en que se emplaza a esa persona para que comparezca a practicar la diligencia dentro de los quince días contaderos desde la publicación del edicto.
4. De todo lo expuesto el Secretario extiende la correspondiente diligencia, a fin de que el Juez, en un auto, declare hecha la notificación, expresando el día en que empiezan a transcurrir los mencionados quince días. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable al demandado que por falta de notificación personal de la demanda esté representado por curador *ad litem*”. (Ley 105 de 1931)

plasmado en el escrito de la diligencia, concluyendo así que solo se tomaba a la declaración de parte solo como el medio o instrumento por el cual se llegaba a la confesión.

1.4.2. Código de Procedimiento Civil de 1970:

Al entrar en vigencia el Decreto 1400 de 1970 (Decreto 1400 de 1970) por medio del cual se reguló el Código de Procedimiento Civil (en adelante C.P.C) se incorporaron grandes cambios en relación a la declaración de parte. Una de las innovaciones es la tendencia, como regla general, al sistema de valoración conocido como “sana crítica o libre valoración de la prueba”, viéndose reflejado en el artículo 175 del C.P.C., donde se establecen siete medios probatorios (incluida la declaración de parte) y se permite utilizar cualquier otro medio idóneo, diferente al listado que allí se plasmó, siempre y cuando sea útil para el convencimiento del juez.

En esta legislación, no se encuentra una definición de lo que es la confesión, como sí lo hacía el Código Judicial. Sin embargo, en el artículo 195 del C.P.C. se señalan los requisitos de la confesión y en aquellos se establece que ésta se configura si los hechos que afirma el declarante desfavorecen a la parte o benefician a la contraria, es decir que ahora no solo tendrá validez probatoria aquellas afirmaciones que desfavorezcan a la parte, sino también la declaración que así no lo haga, beneficie de algún modo a la parte contraria.

No obstante, frente a la definición de la confesión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia de constitucionalidad del 20 de agosto de 2009 (Sentencia C-559, 2009) dispuso que:

La confesión es, por naturaleza, la aceptación de hechos personales o de los cuales se tenga conocimiento, que conlleven una consecuencia jurídica desfavorable para quien los acepta. En el procedimiento civil se encuentra admitido por la doctrina que, como medio de prueba, la confesión puede ser espontánea o provocada, caso en el cual el camino al efecto es el interrogatorio de parte, conocido en pretérita legislación procesal, como “absolución de posiciones”.

Ahora bien, en el artículo 175 del C.P.C., como ya se mencionó, se enumera como medio de prueba la declaración de parte y el capítulo II - Título XIII recibe este nombre. Sin embargo, analizando cada disposición que compone este capítulo, no se encuentra ninguna que haga referencia a la declaración de parte como tal, sino solo a la confesión y al interrogatorio de parte como la forma de practicarlo. Logrando concluir con lo anterior, que la declaración de parte es la propia manifestación de la parte de unos hechos que sólo si producen efectos adversos a ella o que benefician a la contraparte adquiere valor probatorio, es decir, que se sigue entendiendo la declaración de la parte como un medio o instrumento por el cual se alcanza la confesión.

Al respecto, según lo afirmado por la Corte en la sentencia C-927 de 2000 (Sentencia C-927, 2000), se evidencia que no se distinguía entre un medio probatorio y otro, sino que se entendía a la declaración de parte como un instrumento o medio para lograr la confesión, así:

3. Declaración o interrogatorio de parte. Antes de entrar de fondo en el análisis de los cargos que plantea la demanda sub examine, es necesario precisar que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, establece que sirve como medio de prueba, entre otros, la declaración de parte, medio este, a través del cual, las partes pretenden o procuran obtener la confesión de los hechos que se debaten dentro del proceso.

Este medio o instrumento para provocar la confesión de la contraparte, puede, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 179 *ibídem*, ser decretada a petición de parte o, de oficio cuando el operador jurídico lo estime útil para la verificación de los supuestos fácticos alegados por las partes. En el primero de los casos, esto es, cuando es decretada a petición de parte (art. 203 *ib.*), podrá ser solicitada dentro de la oportunidad para pedir pruebas en la primera instancia o, en la segunda instancia, pero sólo en los casos que establece el artículo 361 del mismo Código. Cuando el interrogatorio es decretado de oficio por el juez o magistrado (art. 202 *eiusdem*), podrá hacerse en las oportunidades que establece el artículo 180 del C. de P.C.

De acuerdo al momento en donde se podía llevar a cabo la confesión podía ser judicial y extrajudicial. En la primera ya no es necesario realizarse ante un juez competente, como

anteriormente en el Código Judicial se establecía, pues se podía configurar si se hacía ante cualquier juez en cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando se cumpliera con todas las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 195 del C.P.C.⁷ y las que no se realizaban bajo este entendido eran consideradas extrajudiciales.

Así mismo, aunque la confesión judicial sigue con el carácter de plena prueba que le otorgó la pretérita legislación, desaparece la reglamentación que impedía desvirtuarla, confiriéndole amplias facultades de valoración al juez de acuerdo al sistema de valoración de libre apreciación de la prueba, así se establecía en el artículo 201 del C.P.C.: la infirmación de la confesión, la cual señalaba que toda confesión admitiría prueba en contrario quitándole todo el poder absoluto.

Ahora, la capacidad ya no se reduce simplemente a la parte, pues el apoderado y los representantes legales, con la implementación de esta legislación pueden configurar confesión, incluso los litisconsortes mediante sus afirmaciones, cumpliendo los requisitos específicos según el caso.

En cuanto al apoderado judicial, según el artículo 197 del C.P.C. la confesión tendrá validez solo si al momento de hacerla tenga autorización de su poderdante, el cual no solo se presume para la demanda, las excepciones y contestaciones, se extiende hasta la audiencia inicial.

La confesión por representante legal, gerente o administrador, valdrá siempre que se encuentre en ejercicio de sus funciones, no solo durante el tiempo de su representación, sino que también podrá extenderse a hechos anteriores (artículo 198 C.P.C.).

⁷ “La confesión requiere:

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada” (Decreto 1400)

Ahora bien, la confesión a través del litisconsorte, solo se faculta a través del litisconsorte necesario y si son varios, esta confesión debe provenir y conformarse por cada uno de ellos, de no ser así tendría un valor probatorio igual al del litisconsorte facultativo, es decir, un testimonio de terceros (artículo 198 del C.P.C).

Por otro lado, de conformidad con el artículo 200 del C.P.C, la indivisibilidad de la confesión se mantiene, se debe apreciar con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe y de ser así tendría que valorarse la declaración en conjunto con las demás pruebas según lo estableció el artículo 187 del C.P.C.⁸

De allí se deriva la novedad sobre la divisibilidad de la declaración de parte que se manifiesta cuando el hecho modificadorio, aclaratorio o explicativo no guarde íntima conexión con el hecho confesado, estos deberán apreciarse de forma separada, tal como lo afirma Gustavo Humberto Rodríguez (Rodríguez, 1990) citando al tratadista Devis Echandía:

Lo divisible no es la confesión sino la declaración de parte. Aquella es indivisible. Se trata de saber cuáles hechos y en qué forma constituyen confesión, entre los diversos o varios contenidos en una declaración de parte, y si ellos, los confesados, deben valorarse separada o conjuntamente con los demás.

Sin embargo, aunque se hable de una apreciación separada, esta legislación deja un gran vacío en cuanto no determina la forma de valoración de estos hechos que no guardan íntima relación con la confesión, dando a entender que no se estaría frente a una confesión, sino a una declaración de parte sin ningún valor probatorio y solo la adquiere los hechos que la conforman pero que estén íntimamente relacionados al hecho confeso.

Como anteriormente se afirmó, el medio para llevarse a cabo o configurarse la confesión era a través del interrogatorio o declaración de parte, denominado en el anterior Código Judicial

⁸ “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.” (Decreto 1400)

como absolución de posiciones. Este cambio resultó de la necesidad de eliminar las rigurosidades y formalidades de la absolución de posiciones, para pasar a convertirse en un relato libre de la parte, dejando a un lado las preguntas con fines confesionales, pues abre la puerta para implementar preguntas asertivas o no (artículo 207 C.P.C párrafo final⁹) diferente a la limitante de la absolución de posiciones, en donde se debían de formular de manera tal, que el declarante respondiera ‘si era cierto o no’ un hecho.

Sin embargo, el límite de las 20 preguntas del C.J. se sigue manteniendo en el interrogatorio de parte pero dentro de las facultades agregadas al juez bajo el sistema de la libre apreciación de la prueba, se encuentra la posibilidad de adicionar las preguntas que estime pertinentes con el fin de aclarar dudas respecto a la declaración y demás hechos que interesen dentro del proceso, también tiene la facultad de rechazar las preguntas que no tuvieran relación con el proceso, que no fueran claras y precisas, las que anteriormente fueron contestadas en otro juicio y las superfluas (artículo 207 C.P.C).

La solicitud se podía hacer a instancia de parte o de oficio y la oportunidad según el artículo 202 del C.P.C. establecía que, el juez o magistrado podía citar a las partes en las oportunidades indicadas en el artículo 180 ibídem¹⁰ para que se presentaran a absolver el interrogatorio bajo juramento. A instancia de parte, nos indica el artículo 204 del C.P.C que cualquiera de las partes podía citar a la contraria para que absuelva el interrogatorio, en primera instancia dentro de la oportunidad para solicitar prueba y en segunda instancia solo en los casos señalados en el artículo 361 del C.P.C.¹¹, de esta forma se logra percibir que se mantiene la

⁹ “Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho; si contiene varios, el juez la dividirá de modo que la respuesta se dé por separado en relación con cada uno de ellos y la división se tendrá en cuenta para los efectos del límite señalado en el inciso tercero. Las preguntas podrán ser o no asertivas”. (Decreto 1400)

¹⁰ “Podrán decretarse pruebas de oficio, en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes, y posteriormente, antes de fallar. Cuando no sea posible practicar estas pruebas dentro de las oportunidades de que disponen las partes, el juez señalará para tal fin una audiencia o un término que no podrá exceder del que se adiciona, según fuere el caso.” (Decreto 1400)

¹¹ “Cuando se trata de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admita el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

prohibición de que la misma parte solicite su declaración, limitando la posibilidad de solicitar “cualquier medio probatorio”.

Ahora bien, conforme al decreto del interrogatorio de parte, entendido como el instrumento para la confesión como ya se precisó, el juez en auto debía señalar fecha y hora para llevarse al cabo de forma personal, este debería ser notificado ya no solo de forma personal al absolvente sino dependiendo del momento procesal en que se solicite: se notificaría por estado si ya estuviera en curso el proceso y de forma personal si se había decretado el interrogatorio como prueba anticipada (artículo 205 del C.P.C), toda vez que era la única forma para que el presunto demandado tuviera conocimiento del proceso.

La práctica del interrogatorio podía ser de forma oral si quien lo solicitaba concurría a la audiencia, o de forma escrita donde el solicitante debería formularlo por escrito en sobre abierto o cerrado junto a la solicitud de la prueba o antes de la fecha señalada para la diligencia en donde se llevaría a cabo, incluso después de presentado el formulario por escrito, quien solicita podría sustituir de forma parcial o total la preguntas antes de iniciarse la audiencia, por preguntas verbales precediendo del juramento de no faltar a la verdad (artículo 207).

Conforme a lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-927 de 2000 (Sentencia C-927) estudió la constitucionalidad de dicha disposición y señaló:

No comparte esta Corporación la interpretación que de la norma hace el demandante, cuando afirma que el hecho de presentar el pliego contentivo de las preguntas que se han de absolver, “antes de la fecha señalada para interrogatorio” viola la Constitución Política, en la medida en que limita la intervención del solicitante.

4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.

5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el ordinal anterior.

Si las pruebas fueren procedentes se fijará término para practicarlas, que no podrá exceder de diez días. Igual término se concederá en el caso del inciso 2. del artículo 183. (Decreto 1400)

Al contrario, considera la Corte, que la oportunidad que el Legislador otorga al solicitante de la declaración de parte, de poder (no exigir como erróneamente lo entiende el demandante), presentar el pliego antes de la fecha que se señala para el interrogatorio, resulta bastante útil, si se tiene en cuenta, que durante el lapso que transcurre entre la iniciación de un proceso y, la práctica de una prueba, en este caso, de interrogatorio de parte, puede transcurrir bastante tiempo, durante el cual es factible que se obtengan conocimientos en relación con el asunto que se debate, de manera tal, que permitan elaborar con más detalle y en mejor forma el interrogatorio con el cual se pretende obtener la confesión de la contraparte.

Tampoco comparte esta Corporación la lectura que hace el demandante del inciso segundo del artículo 207 del C. de P.C. cuando afirma que viola la Constitución, el hecho de “exigir” que la sustitución del pliego de preguntas que se haya presentado, se haga por preguntas verbales, porque –dice el demandante- que si el pliego debe sustituirse antes de la audiencia señalada es imposible que se haga por preguntas verbales.

En primer lugar, la norma no “exige” sino que concede la posibilidad al solicitante de la prueba de declaración de parte, de concurrir a la audiencia y formular el interrogatorio que inicialmente se había presentado por escrito, en forma verbal, lo cual resulta completamente válido, sin que se pueda predicar que se viola el debido proceso, como quiera que para la parte que tiene la obligación de absolver las preguntas, resulta indiferente la forma como se le hagan. No puede sostenerse que una disposición legal conculca el debido proceso, cuando la misma norma define la forma en que se practicará determinada prueba, como en el caso que nos ocupa, ya que es el mismo artículo 207 del C. de P. C. el que dispone que el interrogatorio se hará en forma oral si el solicitante concurre a la audiencia, pero si no concurre lo puede formular por escrito en sobre abierto o cerrado.

Ahora bien, si en la práctica, el interrogado se negare a responder o diera respuestas evasivas, se le amonestará presumiendo como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio

escrito, de la misma forma respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda, excepciones de mérito y contestaciones cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca (Artículo 210 C.P.C).

Por último, es menester resaltar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia 028, 1999) en donde sostenía que la declaración o interrogatorio de parte, solo adquiriría efectos probatorios sujetándose a las afirmaciones hechas por el declarante, al disponer que:

En consecuencia, la declaración de parte solo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante admite hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrato, o lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicación del principio conforme al cual a nadie le es lícito crearse su propia prueba (Sentencia 113 de 13 de septiembre de 1994).

Es así como en el mencionado código de procedimiento, como anteriormente lo señalábamos se seguía entendiendo a la declaración de parte como un instrumento metodológico para lograr la confesión que era el medio de prueba; por lo tanto, de lo alcanzarse a dicha confesión la simple declaración no tenía valor alguno tal como lo establecía Jairo Parra Quijano en su (Manual de Derecho Probatorio, 2012, pág. 440), “Negamos que el interrogatorio sea un medio de prueba; es simplemente un método o instrumento para provocar la confesión de la otra parte. Lo que sí es medio de prueba es la confesión que se obtenga utilizando el interrogatorio”.

1.4.3. Código General del Proceso de 2012.

Hoy en día con el actual Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) , en adelante CGP, ya se dispuso a la declaración de parte como un medio de prueba totalmente separado de la confesión, pues pasamos de un sistema escrito a un sistema mixto con tendencia a la oralidad, bajo un sistema de libre apreciación de la prueba o sana critica. De esta forma, se permite que los hechos sean probados a través de cualquier medio probatorio útil para llegar al convencimiento del juez (inciso final artículo 165 CGP).

Es así, como en el artículo 165 del CGP establece una lista, no taxativa, de nueve medios de prueba, agregándole al anterior listado del CPC la prueba por informes y la declaración de parte como un medio de prueba distinto a la confesión. Es decir que con el CGP por primera vez se considera como un medio de prueba autónomo, libre, y voluntario con valor probatorio, tal como se indica en el inciso final del artículo 191 ibídem pues “la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de pruebas” esto es, de acuerdo con la sana crítica y libertad probatoria.

En este entendido cobra sentido la indivisibilidad de la confesión y divisibilidad de la declaración de parte, por cuanto esos hechos que se afirmen y no tenga íntima relación con el hecho materia de confesión, de acuerdo al anterior artículo se valoraran de forma concreta como prueba por parte de juez.

La declaración se podrá solicitar a petición de parte u oficio, citando a las partes con el fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso (artículo 198 CGP), diferente del C.P.C que solo permitía la citación de la contraparte, es decir, se abre paso de la declaración forzada, de esta forma se ve la intención que tiene la eliminación de esta limitación y abrirle paso a la propia declaración de la parte de forma voluntaria.

En cuanto a la práctica, el interrogatorio sigue como vehículo o instrumento para alcanzar bien sea la confesión o la declaración de parte, más no es un medio de prueba como tal. Se mantiene el número límite de 20 preguntas y al decretarse el interrogatorio en el auto que fija fecha y hora para la audiencia, se ordena la citación del absolvente la cual se notificara de forma personal si es extraprocesal y si se está dentro del curso del proceso se notificará en estrados o por estado - dependiente del momento procesal en donde se solicite - (Artículo 200 CGP).

Por otro lado, desaparece la opción de la práctica del interrogatorio escrito que disponía tanto el Código Judicial como el Código de Procedimiento Civil, ahora, con el actual estatuto

procesal, solo será permitido llevarse a cabo de forma oral bajo los principios de concentración¹² e intermediación¹³.

Otras de las novedades es que con el CGP se implementó en el artículo 375-7 que los interrogatorios de parte se deben practicar por parte de juez en audiencia inicial, y a su vez, de manera obligatoria “el juez debe interrogar a las partes de manera exhaustiva, sobre el objeto del proceso” y así fijar el litigio. También establece la oportunidad de que el juez en esa misma audiencia decrete y practique las pruebas que estime pertinente.

Si llegado el caso, la parte por inasistencia justificada no comparezca a la audiencia inicial, bien sea por fuerza mayor o caso fortuito aceptada por el juez, se practicará el interrogatorio de parte en la audiencia de instrucción y juzgamiento, garantizándole la oportunidad de las partes ser oídas en juicio, tal como lo ha establecido el artículo 317-10 “en caso de que el juez haya aceptado la justificación de la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial, se practicará el interrogatorio a la respectiva parte”.

Otra clara diferencia con las anteriores legislaciones es la confesión o declaración que hace el representante legal que ya no se limita solo al tenor de sus facultades, como anteriormente se disponía. En la vigente legislación, en el artículo 194, se ha dispuesto que se podrá extender a hechos o actos anteriores a su representación, obligándolo a informarse muy bien sobre los hechos ocurridos con anterioridad pues de no hacerlo y no dar respuesta a esos hechos o responder de forma evasiva, estará convicto a que se presuman estos, si son materia de confesión, como ciertos o como indicio grave si no constituyen confesión (artículo 205 C.G.P¹⁴).

¹² “Artículo 5°. Concentración. El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este código.” (Ley 1564 de 2012)

¹³ “Artículo 6°. Intermediación. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.” (Ley 1564 de 2012)

¹⁴ “Confesión presunta. La inasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito.

Conforme a lo anterior y luego de destacar los cambios más relevantes de este medio de prueba, se logra concluir que el Código General del Proceso con su novedosa implementación de la oralidad en la cultura procesal que nace de la necesidad de interactuar de forma directa con las partes en el proceso y escucharlas, toma a la parte como un todo en el proceso y pone en marcha el sistema de valoración de la libre apreciación de la prueba, a partir del cual todas la pruebas (independientemente de que esté preestablecida o no en el artículo 165) se deben valorar en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Asertivo fue Mauro Cappelletti al afirmar que:

El sujeto mejor informado de los hechos deducidos en juicio es normalmente la parte misma... no puede haber una efectiva realización de la concepción de la oralidad en un proceso en el cual no se haya valorizado plenamente el interrogatorio libre de la parte... como un examen o un coloquio de las partes ante el juez sobre los hechos de la causa, del cual el juez pueda sacar elementos para formar su propio libre convencimiento sobre la verdad de los hechos (Cappelletti, 2002).

Conforme a lo anterior, al calificar a la parte misma como la fuente mejor informada del proceso y al consagrarse desde el C.G.P. un proceso oral y por audiencias, se convierte en obligación oír a las partes y tiende a ser paradójica su prohibición, es por eso que la declaración de parte adquiere tanta importancia, pues es fundamental para conocer de fondo los hechos del proceso, desde el afectado directo.

La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda y en las excepciones de mérito o en sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca, o cuando el interrogado se niegue a responder sobre hechos que deba conocer como parte o como representante legal de una de las partes.

Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la inasistencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder se apreciarán como indicio grave en contra de la parte citada.” (Ley 1564 de 2012)

2. PRODUCCIÓN PROBATORIA EN EL MARCO DEL PARADIGMA RACIONAL DE LA PRUEBA

El vínculo entre la epistemología como rama de la filosofía encargada de estudiar el conocimiento y sus fuentes y el proceso judicial, es indiscutible, en el entendido de que en el proceso judicial la producción de conocimiento es una necesidad indiscutible: la justicia de la decisión depende en muchas ocasiones de la demostración de los hechos. Ante su necesidad e importancia, es menester construir un proceso judicial acorde con estas ideas, que potencialice la producción de conocimiento de calidad al interior del proceso.

El derecho probatorio se puede dividir en tres grandes etapas siguiendo la corriente de epistemología dominante en el transcurso de la historia, etapas que se debe advertir, no siguen un curso lineal pero que pueden agruparse para efectos de un mejor análisis de las mismas:

La primera es la etapa irracional, dada en las épocas primitivas, dominada lo mágico o sobrenatural, el derecho era guiada por la fe, apoyada en ritos y procedimiento mágicos en donde se trabajaba con juicios de Dios y metafísica: en donde estaba ausente cualquier apelación a la razón. Un claro ejemplo ordalía

Luego se abre paso a una etapa con apariencia racional, el modelo de prueba tasada, confiando en la observación de los hechos pero se mantenía una gran desconfianza en la imparcialidad y subjetividad del juez, en donde se limitaban los medios probatorios y se le atribuía a cada uno de ellos un peso o valor probatorio a través de reglas jurídicas o tarifas legales que le indicaran al juez como debía valorar las pruebas conforme a las reglas de la experiencia, para lograr alcanzar conocimientos absolutos e incontrovertibles, por lo tanto fue una prolongación lógica de la prueba irracional, pues tanto la ordalía como la prueba legal, constituyen supuestos de una “prueba formal” (Gascón Abellán, 2010).

Y por último, una tercera o etapa o corriente que es la que hoy en día se ha adoptado denominada como libre apreciación de la pruebas a través del concepto de probabilidad, donde la

declaración de los hechos no debe ser concebida como un momento místico sin control racional, sino a través de un proceso inductivo, aceptando que no existen certezas absolutas.

Bajo este paradigma, el juez no debe estar atado a tarifas legales y su razonamiento probatorio se debe basar en sana crítica no solo conforme a las reglas de la experiencia sino también de la lógica y científicas. Al día de hoy el paradigma de libertad probatoria incluye a los medios de prueba definidos como a cualquier otro no establecido que cumpla con requisitos y criterios similares, esto debido que la Ley probatoria no puede estar siendo modificada para incluir nuevos medios de prueba que surjan desde la práctica judicial, de los avances técnicos y/o científicos, sino que se debe establecer una cláusula abierta que permita la realización del iter probatorio de los medios de prueba atípicos.

Cabe en este punto formular el siguiente interrogante: ¿es el proceso judicial un instrumento válido y racional para la creación de conocimiento desde el que se tomará una decisión? Debido a la importancia de este problema, epistemólogos como Larry Laudan, Alvin Goldman y Susan Haack han abordado el problema desde la verdad y el error en las decisiones judiciales. Desde el aspecto jurídico se resaltan las obras de Giulio Ubertis y Michele Taruffo. Salta a la vista que en la actualidad se presenta un movimiento intelectual que se interesa por definir la función epistémica del proceso; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la producción de conocimiento no es su única y más importante función. El proceso judicial es una instancia especial en la vida cotidiana donde se aplican normas que tienen diferentes fines y se da la realización de distintos valores:

“se aseguran garantías, se reconocen derechos, se tutelan intereses, se efectúan elecciones económicas, se enfrentan problemas sociales, se asignan recursos, se determina el destino de las personas, se tutela la libertad de los individuos, se manifiesta la autoridad del Estado (...) y se resuelven controversias por medio de decisiones deseablemente justas.” (Taruffo, 2010).

Otro factor que influye en la concepción epistémica del proceso judicial es la ideología que lo gobierna, porque esta afecta a su estructura y funcionamiento desde el establecimiento de

finest superiores distintos. En algunos ordenamientos jurídicos la tasa de acuerdos puede ser superior a la de procesos judiciales finalizados con sentencia lo que significa que en esta ideología se propende la *truth acquiring* al establecer mecanismos que busquen obtener el mejor comportamiento desde la economía de las partes otros estarán gobernados por una postura completamente opuesta por lo que cada ordenamiento jurídico de cada Estado es un caso en particular para analizar para no caer en un ingenuo relativismo a la hora de analizar cómo estas concepciones afectan la producción de verdad a través del proceso judicial, estas posturas no solo son tomadas por los legisladores, sino también por los jueces que sientan las bases de determinada doctrina judicial, por lo que estas normas se podrían tornar contra la producción de conocimiento objetivo por lo que habría que definir cómo se soluciona la controversia entre normas epistémicas y contra-epistémicas, es decir, cuando se puede soslayar la búsqueda de la verdad para tener fin la protección de valores jurídicos que no son epistémicos. Dependiendo de la concepción del proceso judicial en cada ordenamiento jurídico se puede resolver esta controversia determinando qué se le da más valor y que se define como finalidad en cada régimen procesal, por lo que se debe realizar la comparación entre varios de estos regímenes para determinar su estructura conforme al grado de verdad que buscan alcanzar.

Un tema de especial importancia para la investigación es la selección de las pruebas. El método es esencial en la búsqueda de conocimiento, por lo que el procedimiento establecido en el régimen probatorio son los equivalentes pasos de un método científico de otra ciencia, es necesario estudiarlas para soslayar posturas que afecta la producción de conocimiento, contra-epistémicas, como son las que establecen un número taxativo de medios de prueba. Al día de hoy el paradigma de libertad probatoria incluye a los medios de prueba definidos como a cualquier otro no establecido que cumpla con requisitos y criterios similares, esto debido que la Ley probatoria no puede estar siendo modificada para incluir nuevos medios de prueba que surjan desde la práctica judicial, de los avances técnicos y/o científicos, sino que se debe establecer una cláusula abierta que permita la realización del *iter* probatorio de los medios de prueba atípicos.

El principio de relevancia debe ser la piedra angular de la selección de pruebas. En el procedimiento que se produce el conocimiento se intenta tomar toda la información posible y disponible porque la racionalidad y objetividad del convencimiento debe fundarse en los datos

cognitivos que existen ahora desde el principio de relevancia un medio de prueba es relevante o no lo es, en la segunda hipótesis debe excluirse en virtud del principio de economía procesal porque la eliminación de medios de prueba inútiles para la determinación de los hechos en nada afecta a la consecución de la verdad.

La exclusión de pruebas relevantes debe ser excepcional. Por regla general, todas las pruebas relevantes deben ser admitidas. Pero este no es el único criterio de admisión; a partir de las reglas de exclusión probatoria se pueden soslayar medios de prueba: la primera excluye por su poder de viciar la prueba en su etapa de valoración y la segunda no tiene finalidad en la producción de conocimiento, sino que limitan los procedimientos mediante los cuales deben ser surtidos estos medios de prueba para la demostración de los hechos.

La influencia del paradigma racional en la práctica de las pruebas. El proceso de identificación y/o de creación de conocimientos debe ser divulgado y público para que la confianza de su producción derive de un proceso racional y lógico para que sea tenido en cuenta por la comunidad. En la vida cotidiana se constituyen pruebas antes que se llegue a tener tal categoría en un futuro proceso judicial, otras pruebas se constituyen en el proceso judicial, en el primero de estos modelos es el operador judicial quien interroga a la parte, el segundo modelo es practicado por los abogados de las partes, en este modelo en un pliego de preguntas asertivas o narrativas el abogado de la parte interrogará a la parte contraria para obtener del conocimiento necesario para fundamentar su tesis, también se da el caso en que el abogado interroga a su propia parte para complementar lo declarado, lo anterior en un ejercicio de interrogatorio cruzado, esto es perjudicial para la producción de la verdad porque las partes revelan solo los puntos que son de su interés más no la verdad de los hechos que rodean el litigio, por esto es necesario el activismo de judicial para tener un control obteniendo lo mejor de ambos modelos.

La valoración de las pruebas es la fase de mayor importancia. El conocimiento que se produce en el proceso epistémico va dirigido a determinar la verdad de ciertas circunstancias del contexto, en la primera etapa histórica después de abolir el sistema de prueba legal la valoración de los medios de prueba fue discrecional, este tipo de sistema no es un proceso epistémico en

ningún sentido, luego surgió la doctrina racional del libre convencimiento del juez que sí es un proceso válido desde la epistemología para conseguir la verdad.

Los sujetos de la actividad epistémica. El procedimiento epistémico siempre se desarrolla de la mano de actores que guían su finalidad, en el proceso judicial hay sujetos plenamente identificados, a saber, las partes por constituir la fuente del conocimiento en el medio de prueba de la declaración de parte, el juez desde su actividad instructora del proceso.

El juez de los hechos. La capacidad de gobernar los varios aspectos a través de los cuales se articula el procedimiento y, sobre todo, la capacidad de valorar racionalmente los resultados que se derivan de él, con el fin de determinar si la verdad ha sido o no descubierta, son los requisitos que el “juez de los hechos” debe poseer.

El juez profesional. La figura del juez-jurista, experto en derecho, pero investido también de la función de decidir sobre todos los aspectos de la controversia, es decir, el poder de decidir tanto las cuestiones de hecho como de derecho, desde el punto de vista de la función epistémica, no dispone de una preparación profesional específica relativa a la decisión sobre los hechos, su formación concierne esencialmente al conocimiento del derecho. Lo que podría llevar a pensar que este tipo de juez no es el adecuado para una función estrictamente epistémica, pero para ello debe considerarse que una parte relevante de la formación técnico-jurídica del juez se refiere a la regulación de las pruebas, experiencia formada en la práctica judicial que hace al juez experto en la búsqueda y en la determinación de la verdad, su contacto con las pruebas y los problemas relativos a los hechos le pueden proporcionar los conocimientos y capacidades necesarios para desarrollar adecuadamente la función epistémica.

No se debe olvidar que el juez del *Civil Law* está obligado a motivar sus decisiones, a proporcionar buenas razones, fundadas en las pruebas y en un convencimiento racional, de modo que la verdad de los hechos resulte objetiva, lo que en relación con la valoración de las pruebas y las conclusiones sobre los hechos, hará que el juez oriente sus razonamientos en el sentido de un análisis racional de los elementos de prueba y los criterios de valoración que pueden justificar una reconstrucción verdadera de los hechos del caso.

El jurado. El aspecto más original, más celebrado y en muchos sentidos más importante del sistema inglés, y del sistema estadounidense, es la presencia del jurado como trier of fact, de modo que al juez togado le corresponde tomar nota del veredicto del jurado sobre los hechos, para determinar sus consecuencias jurídicas.

La dimensión epistémica del proceso existe y tiene una importancia fundamental, aunque en esa dimensión no se agote, el fenómeno multiforme y complejo de la administración de justicia. Sin embargo, el análisis de las diferentes instituciones que conforman el proceso, desde la perspectiva de la epistemología permite comprobar cuando se está frente a un modelo de procedimiento funcionalmente orientado a la determinación de la verdad, lo que se traduce necesariamente en unas instituciones probatorias que conlleven a la consecución de la verdad. Así mismo, permite comprobar cuándo y en qué medida la influencia de factores extraños a la dimensión epistémica, y en particular de factores ideológicos ligados a diversas concepciones de la función del proceso y del rol de los sujetos que participan en él, puede afectar y comprimir la función epistémica que el proceso debe cumplir (Taruffo, 2010), como ocurre con las preconcepciones que por tantos años los encargados de administrar justicia han tenido respecto del dicho de la parte, en atención a un interés, que si bien existe, no puede ser óbice para que estas puedan ser escuchadas en el marco de un proceso que hoy se enmarca en la racionalidad de la prueba.

3. PRODUCCIÓN PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN LAS FUENTES DEL DERECHO EN COLOMBIA

3.1. *Iter* probatorio: identificación de reglas expresas y anomalías jurídicas

En virtud del principio de preclusión¹⁵ todo proceso judicial está compuesto por actos procesales y a su vez, por actos probatorios que se deben realizar dentro del plazo u oportunidad correspondiente. Jaime Azula Camacho (Azula Camacho, 2015), señala que el acto procesal puede estar constituido por uno o varios actos y de esta forma, puede ser simple o compuesto. Así mismo, señala que el acto probatorio tiene las mismas características y que será compuesto cuando está integrado por varios actos provenientes de diferentes sujetos del proceso y que a su vez sean realizados en distintas oportunidades procesales.

Según nuestra legislación vigente, en Colombia pueden distinguirse, de manera general, cuatro fases o etapas probatorias: solicitud, decreto, práctica, y valoración, cada una de ellas desarrolladas por diferentes sujetos procesales, con objetivos específicos y en diferentes oportunidades dentro del proceso judicial o extrajudicial, por lo que se puede llegar a afirmar que el *iter* probatorio en Colombia es un acto probatorio compuesto.

A continuación, analizaremos cada una de estas etapas, determinando las reglas expresas consagradas en el Código General del Proceso, específicamente en lo que se refiere al medio de prueba de la declaración de parte y de esta forma, lograr identificar los vacíos normativos que se encuentren frente a el desarrollo de este medio de prueba.

¹⁵ Al respecto dispone el Auto 232-01: “Sabido es, que “la preclusión” es uno de los principios fundamentales del derecho procesal y que en desarrollo de éste se establecen las diversas etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, así como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse. En razón a este principio es que se establecen términos dentro de los cuales se puede hacer uso de los recursos de ley, así mismo, para el ejercicio de ciertas acciones o recursos extraordinarios, cuya omisión genera la caducidad o prescripción como sanción a la inactividad de la parte facultada para ejercer el derecho dentro del límite temporal establecido por la ley.” (Auto 231-01, 2001).

3.1.1. Solicitud.

La solicitud o petición de la prueba, es el primer paso de incorporación de uno o varios medios de prueba. Es aquella oportunidad que tienen las partes interesadas dentro del proceso, para presentar al juez el respectivo medio probatorio, con el fin de que éste disponga del mismo para que sea aprobado y practicado.

Esta fase probatoria también es denominada por una parte de la doctrina como proposición de la prueba, diferenciándola con la presentación de la prueba. La proposición, que es la misma solicitud, se da de manera general para todos los medios de prueba. Sin embargo, se excluye el documento, toda vez que este se debe adjuntar, en la etapa oportuna y por escrito al momento de presentar la demanda. Así mismo ocurre con las pruebas practicadas de forma anticipada, en donde es probable que, al momento de presentar la demanda, el escrito se acompañe de las copias que obtengan la prueba, por lo que no se hablaría de solicitud o proposición sino de presentación de la prueba en estos casos (Azula Camacho, 2015).

Ahora bien, según lo dispuesto al respecto por el Código General del Proceso (2012) en su régimen probatorio, las partes pueden solicitar, en el escrito de demanda, el decreto de los medios de prueba que sean de su interés exclusivamente “cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes” (artículo 169).

Conforme a lo anterior, en lo que se refiere al interrogatorio de parte, existe la posibilidad de allegar en sobre cerrado o abierto el interrogatorio con las 20 preguntas que serán formuladas a su contraparte, esto con el objetivo de obtener una confesión en sentido estricto desde las respuestas a las preguntas previamente elaboradas o una confesión presunta de la parte desde su inasistencia, renuencia y la evasión de las respuestas o una declaración de parte sobre hechos que sean útiles para verificar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, demandante o demandado.

Ahora, analizando la reglamentación de este medio de prueba en el Código General del Proceso, la solicitud del interrogatorio de parte se establece como instrumento para practicar el

medio de prueba de la confesión, mientras que lo que no se configure como confesión desde los presupuestos legales para ello se toma como una declaración de parte, pero en el CGP no se establece de forma clara el instrumento para solicitar directamente el medio de prueba de la declaración de parte por lo que en principio existe inseguridad respecto de si se puede o no solicitar como medio de prueba autónomo, y además con ello se lleva a no conocer cómo se debe surtir en caso de que se pueda, las demás etapas de la producción de la prueba.

Otro problema jurídico en la reglamentación de este medio de prueba tiene que ver con su también inexistente postura frente a la solicitud de declaración de la propia parte, por lo que cabe recalcar que en el régimen probatorio no existe una disposición que lo prohíba, es decir, a partir de lo establecido en el código general del proceso una parte puede solicitar en las oportunidades procesales pertinentes la declaración de la propia parte.

3.1.2. Decreto.

Seguido de la solicitud de la prueba hecha por alguna de las partes, el juez debe hacer un control de admisibilidad al estudiar si el solicitado medio de prueba cumple con los requisitos (que sea conducente, pertinente y útil) para ordenar su admisión o práctica, de lo contrario será rechazadas (artículo 168)¹⁶.

Ahora bien, aunque la ley (artículo 165) establezca una lista no taxativa de los medios de prueba básicos, en el mismo artículo se estipula lo que hoy se conoce como “libertad probatoria” al disponer que se debe admitir cualquier medio de prueba que resulte útil para nutrir de conocimiento al juez sobre los hechos objeto de litigio. Lo que significa que, al solicitarse un medio de prueba diferente al estipulado en la mencionada disposición, este no puede ser un motivo para su eventual rechazo.

La admisión o práctica de la prueba varía según el medio de prueba, serán admitidas como prueba, en esta oportunidad procesal, aquellas que hayan sido presentadas con el escrito de la

¹⁶ Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

demanda (tal es el caso de las pruebas documentales), las demás; como lo son los interrogatorios, se deberán practicar dentro del proceso judicial. La orden, bien sea de admisión, practica o rechazo de la prueba, la profiere el juez mediante providencia escrita (auto), que será susceptible de recurso de apelación (artículo 321-3).

De la misma forma, el juez podrá hacer uso de sus facultades inquisitivas que le ha permitido el actual estatuto procesal, para ordenar de oficio la prueba cuando sea útil para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, sin necesidad de que se realice una solicitud previa, en cualquier momento del proceso antes de fallar. Sin embargo, cuando se trate testimonios de terceros, el juez al ordenar la prueba de oficio debe acreditar que los testigos estén relacionados con otras pruebas o actos procesales de las partes. Sobre esta decisión no recae la oportunidad para interponer recursos (artículo 169).

Ahora, analizando la reglamentación del decreto de los medios de prueba en el Código General del Proceso, se puede evidenciar que bajo el paradigma de libertad probatoria, cualquier medio de prueba que esté definido en el régimen probatorio del Código General del Proceso, como cualquier otro que el juez considere prudente en concordancia con los principios y garantías constitucionales puede ser decretado dentro de las oportunidades procesales que otorga el CGP, pero tratándose del medio de prueba estudiado, existe incertidumbre, especialmente en relación con la figura que se consagra en el artículo 372.7 de la norma procesal.

3.1.3. Práctica.

En esta fase probatoria se desarrolla el aspecto central o fundamental del medio de prueba, tal como lo ha sostenido el profesor Jaime Azula Camacho (Azula Camacho, 2015), a partir del cual el juez, garantizando y cumpliendo con el principio de inmediación (artículo 14), realiza una diligencia (que con el C.G.P. se trata ahora de audiencias) para practicar personalmente todas las pruebas y demás actuaciones procesales (exceptuando aquellos casos en donde la misma ley permita comisionar esta función) para materializar el medio de prueba que hasta entonces, era inexistente en el proceso. Es el caso de la práctica para la recepción del testimonio de un tercero o el interrogatorio de parte o la práctica de una inspección judicial, entre otros.

Ahora bien, existen algunos medios de prueba que para su materialización y posterior valoración no requieren agotar esta fase probatoria, pues es reemplazada por la aportación de la prueba, como lo son exclusivamente la prueba documental y por informes o de todas aquellas que existen de previamente, como anteriormente se afirmó, dado que no es necesaria su práctica para conseguir el medio de prueba para que posteriormente pueda integrarse al proceso judicial.

Es necesario aclarar que, el Código General del Proceso al permitir la práctica de las pruebas extraprocesales por jueces y notarios, la práctica de la prueba trasladada, (Artículo 174), la práctica de las pruebas unilateralmente o de común acuerdo (artículo 190), o el testimonio sin citación de la contraparte (artículo 188), estas quedan recepcionadas en un documento que acredita su realización y por lo tanto, deben ser incorporadas al proceso de la misma forma que una prueba documental, con la apreciación de que su valoración probatoria se realizará de acuerdo al tipo de prueba incorporada.

Sin embargo, existen diferentes oportunidades para que una prueba sea aportada dentro del proceso, pues no basta con la presentación física de documento junto con el escrito de la demanda, sino que además es necesario el juicio de admisibilidad por parte del juez, al momento de decretarla. Y es aquí donde radica la diferencia entre asunción de la prueba y recepción de la prueba. Para Azula Camacho (2015) “la asunción de la prueba es el conjunto de operación sensoriales e intelectivas que realiza el juzgador para conocer los hechos materia de prueba” realizado principalmente en la audiencia de practica de pruebas de un testimonio de terceros o un interrogatorio de parte. Sin embargo, en los medios de prueba que son aportados el juez no realiza la asunción de la prueba sino la recepción de la prueba al momento de hacer el juicio de admisibilidad, pues se limita a aceptarlo como como prueba, sin tener conocimiento de fondo sobre su contenido.

No obstante, toda prueba que se incorpore al proceso por cualquiera de las dos formas, bien sea a instancia de parte o de oficio por parte del juez, debe ser sometida a contradicción de la contraparte, sin perjuicio del momento procesal que se llevó a cabo su incorporación. Así, por

ejemplo, si un documento es aportado junto con la demanda, se le garantizará la contradicción al demandado con el traslado de la demanda.

Por otro lado, en lo que corresponde al interrogatorio de parte en la audiencia inicial realizado de forma obligatoria por el juez no tiene límites, este interrogatorio es un deber legal que tienen los jueces con miras a esclarecer los hechos oscuros y conforme a eso fijar el litigio. Este deber no se constituye como una facultad oficiosa que pende de la voluntad del juez, este interrogatorio es obligatorio en la audiencia inicial, y excepcionalmente, en la audiencia de instrucción y juzgamiento cuando la parte fundamente su inasistencia a la audiencia inicial.

Ahora, en la práctica del interrogatorio de parte, el juez interroga exhaustivamente a las partes y luego, desde la literalidad de la norma, parece, el apoderado que solicitó el medio de prueba interroga a su contraparte con 20 preguntas asertivas o abiertas con el fin de obtener la confesión o cuando no se configure obtener la declaración de parte sobre hechos que sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes en el proceso judicial (o en otro proceso como prueba trasladada).

Por otra parte, en la audiencia inicial la inasistencia de la parte o su negativa a responder sobre hechos que deba conocer como parte o como representante legal se entienden confesos. No obstante, cuando desde estos supuestos no se pudiere configurar la confesión presunta desde los requisitos establecidos en el artículo 191 y las preguntas no fueren asertivas en la fase de valoración se apreciará como indicio grave.

Ahora, analizando la reglamentación de la práctica de los medios de prueba en el Código General del Proceso, la práctica de la declaración de parte como medio de prueba autónomo e independiente no tiene fundamento legal a la vista para su realización, recurriendo a las disposiciones generales del régimen probatorio se pueden encontrar algunas luces sobre las que podrían llegar a ser las reglas de producción probatoria, en el inciso segundo del artículo 165 del Código General del Proceso se establece que la práctica de las pruebas no previstas taxativamente en el régimen probatorio se practicarán bajo tres reglas, la primera es ceñirse a la práctica probatoria de medios probatorios similares, la segunda es la prudencia judicial al excluir la primera

regla y crear un nuevo procedimiento para su práctica, y la tercera es garantizar los principios y las garantías constitucionales a las partes.

Tratándose de la etapa en la que puede ser practicada la declaración de parte depende de su finalidad, si busca establecer los hechos base para el litigio se practicará en la audiencia inicial ahora si su fin es el de ser medio de producción probatoria entonces se practicará en la audiencia de instrucción y juzgamiento, pero sobre ello como se ha visto sucede con todo el *íter* de prueba, no existe claridad sino una anomia que debe ser resuelta.

3.1.4 Valoración.

La valoración es la fase final de toda la producción probatoria y la responsabilidad en esta etapa recae exclusivamente sobre el operador judicial. Miguel Enrique Rojas (Rojas Gómez, 2015), señala que, “valorar o apreciar una prueba significa cogerla y prestar atención a la fuerza demostrativa que posee respecto de cierto hecho relevante para solucionar la cuestión concreta”. De la misma forma, Azula Camacho (2015) señala que valorar la prueba es establecer el grado de convicción o credibilidad que produce en el juzgador”.

Este es el momento oportuno por parte del juez, luego de haberse culminado cada etapa y lograr tener pleno conocimiento de cada medio de prueba, para analizar y estudiar la veracidad y congruencia de la prueba, para así tomar una decisión sobre cómo deben estimarse y el grado de certeza que arrojan frente a los hechos objeto de controversia.

Para lograr este ejercicios existen los sistemas de valoración de la prueba, que según Hernán Fabio López (2013), “son aquellas directrices que a través del tiempo, ha sido dadas para efectos de orientar al juez al juez acerca de cómo debe estimar los diversos medios probatorios” (pp.77).

De esta forma, tal como lo afirma el maestro Jairo Parra Quijano, existen dos sistemas para valorar la prueba: “el sistema de la tarifa legal y el sistema de la libre convicción” (Parra Quijano, 1998, pág. 111).

El sistema de la tarifa legal, también conocido como prueba tasada”, “prueba legal” o “prueba formal”, es un sistema que se ha ido superando con el tiempo, aunque aún quedan algunos rezagos en el actual Código Procesal, pues parte del supuesto de “sujetar al juez a reglas abstractas preestablecidas, que le señalan la conclusión que forzosamente debe aceptar en presencia o por la ausencia de determinados medios de prueba” establece Devis Echandia (1988).

El sistema de libre apreciación de la prueba, es completamente opuesto al anterior, aquel faculta al juez para que razonadamente haga una evaluación del material probatorio de manera amplia y llegue, mediante adecuados razonamientos, a la conclusión respectiva, sin estar sujeta a la tarifa preestablecida alguna.

El Código General del Proceso, ha adoptado mayoritariamente este último sistema de valoración, al disponer en su artículo 176 que las pruebas deben ser apreciadas “en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.”

Ahora bien, no debemos confundir el sistema de libre valoración con la libertad probatoria, que mencionamos anteriormente, el primero tiene que ver con la forma de apreciación y evaluación de las pruebas por parte del juez, lo segundo con la libertad que se ha consagrado a partir del Código General del Proceso en materia de presentación de medios de prueba.

En lo que se refiere a la declaración de parte, el Código General del Proceso en su artículo 191, ha dispuesto que las respuestas del interrogatorio que generen declaración de parte deben ser valoradas por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, es decir, la sana crítica, las reglas de la experiencia y la valoración en conjunto del material probatorio. Pero en atención a los diversos supuestos, especialmente en relación con la declaración de la propia parte, no se encuentra una respuesta clara en la norma, existe por tanto, una anomia jurídica en esta etapa.

3.1.5. Identificación de problemas jurídicos.

En atención a los grandes vacíos que se evidencian en el Código General del Proceso (ley) para la regulación de la producción de este nuevo medio de prueba, se identifican diversos problemas jurídicos que la presente investigación pretende abordar y dar respuesta a partir del análisis lógico y sistemático de la norma procesal, así como de los insumos que desde la doctrina, la jurisprudencia, y el derecho comparado se puedan extraer, con el fin de aportar criterios que permitan la adecuada producción de la declaración de parte en el proceso, bien sea judicial o arbitral.

Así las cosas, cada uno de los ítems que componen la producción de la prueba o el *iter* probatorio de la declaración que la parte rinde en el proceso, presentan diversos interrogantes que significan, hoy por hoy, grandes retos para abogados litigantes y jueces, que se enfrentan a una norma procesal que sobre estos aspectos en particular no ha sido clara al momento de definir su solicitud, decreto, práctica y valoración.

En primer lugar, se encuentra uno de los problemas que más ha suscitado debate entre los doctrinantes del país como podrá verse más adelante¹⁷, y que en la jurisdicción ha generado inseguridad jurídica por no existir un criterio uniforme sobre el mismo, se trata pues, de la posibilidad o no de que se solicite la declaración de la propia parte, es decir, se está frente a un supuesto en el que, en las oportunidades probatorias se podría solicitar, por alguna de las partes que se rinda por ellas mismas declaración ante el juez, donde quien realice las preguntas sea (inicialmente) el abogado de la parte que pidió su declaración. El anterior problema por supuesto genera grandes implicaciones en el decreto, la práctica y valoración de la prueba, problemas jurídicos que se plantearan en las siguientes líneas.

En un segundo momento, surge una serie de problemas jurídicos en relación con el que se ha denominado por el grupo de investigación como “el momento procesal para el decreto” para

¹⁷ Al respecto serán analizadas posturas disímiles como la del profesor Ramiro Bejarano (Bejarano Guzmán, La parte no pude pedir su propia declaración, 2017) y la de Adriana López (López Martínez, 2016) o Marco Antonio Álvarez (Álvarez Gómez, 2017).

aquellos casos en que se solicite la confesión (a través del interrogatorio de parte) y la declaración de parte (que desde ya debe señalarse serán entendidos como dos medios de prueba distintos y autónomos), teniendo en cuenta que como se señala en el segundo inciso del numeral 7° del artículo 372 el juez en audiencia inicial debe interrogar de forma exhaustiva a las partes sobre el objeto del proceso, no siendo claro el momento en el cual debe realizarse el decreto de estos medios de prueba, especialmente de la confesión teniendo en cuenta que el instrumento por el cual se lleva a cabo es el interrogatorio de parte. Es necesario precisar que para dar respuesta al problema planteado de forma precedente, es necesario determinar la naturaleza del interrogatorio exhaustivo que por mandato legal (artículo 372.7 CGP) debe realizar el juez en audiencia inicial antes de fijar el litigio.

Ahora, en relación con la etapa de práctica probatoria, se presenta un abanico de interrogantes respecto de diversos aspectos: el primero de ellos es en relación con la implicación que en este punto tiene la posibilidad de que se decrete la declaración de la propia parte, dado el debate que se ha suscitado desde la doctrina acerca de si con el mecanismo que se prevé en el artículo 202 del CGP (interrogatorio de parte) debe surtir la declaración en esos casos; en un segundo momento y como consecuencia del momento procesal de su decreto, se pregunta el grupo de investigación sobre el momento procesal para su práctica.

Luego, de ser afirmativa la respuesta acerca de si es posible seguir distintas reglas de producción en la práctica probatoria para la confesión y la declaración de parte, deben ser estudiados en la presente investigación los siguientes supuestos en relación con las reglas de práctica que deben ser utilizadas: i) si la parte solicita el interrogatorio de la contraparte; ii) si la parte solicita su propia declaración; iii) si la parte solicita la declaración de su contraparte; iv) si la parte solicita su interrogatorio; v) cuando se trate de prueba de oficio, y; vi) cuando se solicite el interrogatorio de parte y declaración de parte sobre una o las dos partes.

Finalmente, en relación con la última etapa del camino de la prueba (*iter probatorio*), la valoración, se tiene que según el Código General del Proceso en su artículo 191 inciso final, “la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”, disposición sobre la que existe mayor claridad pero que debe ser

precisada en relación con los criterios que de acuerdo a la sana crítica, debe tener en cuenta el juez para valorar los dichos de las partes y, los casos donde por ejemplo se solicite la declaración de la propia parte, en el entendido de que con ello los dichos de la parte pueden ser en todo favorables (o al menos no perjudiciales sino aclarativos o explicativos) a esta, ¿podría entonces el juez dictar sentencia favorable con base en la declaración de parte como única prueba en el proceso o es necesario que tal declaración se encuentre respaldada por otros medios de prueba?

El anterior planteamiento de problemas jurídicos que se presentan sobre los vacíos que de la regulación de la declaración de parte en el Código General del Proceso se tiene respecto del *íter* para su producción probatoria, se concreta en la siguiente gráfica:

Etapas del <i>íter</i> probatorio	Problema jurídico planteado
Solicitud	¿Es posible solicitar la declaración de la propia parte?
Decreto	¿En qué momento procesal se decretan los medios de prueba de la confesión y la declaración de parte?
Práctica	<p>¿En qué momento procesal se practican los medios de prueba de la confesión y la declaración de parte?</p> <p>¿Bajo qué reglas de práctica debe surtir la declaración de la propia parte?</p> <p>¿Cuáles son las reglas de práctica que deben acogerse en los siguientes supuestos?:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cuando la parte solicita el interrogatorio de la contraparte. b) Cuando la parte solicita su propia declaración. c) Cuando la parte solicita la declaración de su contraparte. d) Cuando la parte solicita su interrogatorio. e) Cuando el juez decreta prueba de oficio.

	f) Cuando se pida interrogatorio de parte y declaración de parte al mismo tiempo respecto de una o las dos partes.
Valoración	De acuerdo con la sana crítica ¿qué criterios puede utilizar el juez para valorar el dicho de la parte? ¿Puede el juez dictar sentencia favorable con base en la declaración de parte como única prueba en el proceso o es necesario que tal declaración se encuentre respaldada por otros medios de prueba?

Cuadro 1. Problemas jurídicos identificados en las etapas del *íter* probatorio de la declaración de parte en el Código General del proceso.

3.2. Análisis crítico a las posibles respuestas del problema de investigación

En Colombia, la Constitución Política (Constitución Política, 1991) constituye la máxima norma de validez del sistema jurídico y en ella se identifican las distintas fuentes del derecho aplicables en el país para resolver los diferentes conflictos jurídicos –bien sea de carácter concreto (de los casos en particular) o de tipo abstracto (sobre las normas objetivamente consideradas)-, las cuales son en su orden: la Ley, la Equidad, la Jurisprudencia, los Principios Generales del Derecho y la Doctrina (artículo 230).

Tales fuentes actúan por ejemplo, para resolver el fenómeno jurídico denominado “anomia”, que se puede definir someramente como “ausencia de norma”, fenómeno que puede considerarse como de tipo abstracto y que ocurre, precisamente, en relación con las reglas de producción probatoria del medio de prueba de la declaración de parte consagrado en el Código General del Proceso (ley), pues como se ha podido evidenciar de forma precedente en la investigación que ocupa este escrito, si bien se consagra a éste como un medio de prueba autónomo (en la medida de que en el artículo 165 del CGP, se enlista de forma separada de otros medios

probatorios como la confesión), no se detalla, al menos de la forma esperada, las reglas que definen su producción como medio de conocimiento en el proceso.

Es así, como desde la primera fuente del derecho que describe la Carta Constitucional -la Ley-, se identifica el siguiente panorama:

1. El Código General del Proceso además de regular el procedimiento en asuntos de carácter civil, comercial, de familia y agrario, actúa como norma procesal residual, es decir, como norma de aplicación en “aquellos asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes” (artículo 101 CGP).
2. Las normas procesales que definen el procedimiento para la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley 1437 de 2011), para la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral (Decreto-Ley 2158 de 1948) y para los procesos arbitrales (Ley 1563 de 2012), en relación con el régimen probatorio aplicable, remiten expresa o tácitamente al Código General del Proceso, razón por la que resulta aplicable los medios de prueba allí consagrados, dentro de los que se encuentra la declaración de parte.
3. En la sección tercera del Código General del Proceso se regula el régimen probatorio que puede ser aplicado en los asuntos antes descritos, en el cual se establecen las reglas y criterios que deben ser tomados por el juez, árbitro o autoridad pública, para que a través de los medios de prueba se allegue el conocimiento necesario para dar fundamento a la decisión que se profiera en el caso concreto.
4. No obstante, tratándose de la declaración de la parte, las reglas que definen su *iter* probatorio no se encuentran totalmente descritas, tal como se ha identificado a lo largo de la presente investigación. Situación con la que se constituyen una serie de anomías jurídicas que deben ser resueltas para la correcta aplicación de este nuevo medio de prueba.

Desde una lectura sistemática de la norma procesal estudiada se puede encontrar en el inciso 2° del artículo 165 un posible criterio de solución respecto de dichas reglas en el punto de su práctica al establecer lo siguiente:

“ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. (...) El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.”

No obstante, este criterio resulta ser muy ambiguo y los problemas jurídicos que devienen de la producción probatoria de la declaración de parte, son mucho más amplios y abarcan todas las etapas de dicha producción, por lo que al no encontrar respuesta suficiente en la misma ley, debe acudir a otras fuentes del derecho que resulten pertinentes para dar solución a los diferentes interrogantes que suscita la aplicación de este nuevo medio de conocimiento.

Por esa razón, se acude a la jurisprudencia, fuente que se ha convertido en protagonista de las decisiones impartidas por los operadores judiciales y administrativos en el país, figuras como la del precedente judicial, doctrina legal más probable o simplemente jurisprudencia, han generado toda una revolución en el derecho aplicable en Colombia, tanto así, que apartarse de dicha jurisprudencia implica por parte de quienes administran justicia y de la administración pública, una carga argumentativa razonada y suficiente que justifique tal decisión¹⁸.

En atención a lo anterior, se indaga sobre los pronunciamientos de las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado) a cerca de los diversos problemas jurídicos que se generaron con ocasión de las anomalías en las reglas de producción de la declaración

¹⁸ Para el efecto pueden citarse varios ejemplos como lo es el artículo 7 del Código General del Proceso en el que se dispone en lo pertinente que “Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión”; o la Sentencia del 30 de septiembre de 2015 proferida por la Corte Constitucional en la que se expone en su parte motiva que “(...) En ese orden de ideas, concluyó la Corporación que la norma demanda, al establecer la obligación del juez de sustentar las razones por las cuales se aparta de la jurisprudencia, no hace otra cosa que recoger lo que ya ha sido plasmado por las sentencias de la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia al interpretar el mandato constitucional del artículo 230.” (Sentencia C-621, 2015).

de parte para identificar las reglas jurídicas que se han fijado en esa materia, sin embargo, se trata de un problema que aún no ha sido objeto de estudio por parte de esas corporaciones.

Sólo se identifica un pronunciamiento por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el que se resuelve sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Telmex Colombia S.A. (demandante) contra el auto proferido el 1° de marzo de 2017 por el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá D.C., por medio del cual se negó la práctica del interrogatorio de la propia parte, disponiendo que se revocara tal decisión en el entendido de que el Código General del Proceso en su artículo 198 no reprodujo la limitación que se contemplaba en el Código de Procedimiento Civil en relación con que “cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre los hechos relacionados con el proceso”, y que según el artículo 191 de la norma procesal se permite valorar la declaración de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, lo que da lugar a la prosperidad de la alzada (Sentencia Apelación 00498-02, 2017).

Así las cosas, una de las fuentes que hoy son trascendentes en el derecho colombiano, no ofrece, en principio, una solución que pueda ser adoptada para resolver la totalidad de las controversias presentadas en los asuntos regulados por el Código General del Proceso y en los cuales sea de utilidad hacer uso del medio de prueba bajo análisis.

No obstante, si se entiende la jurisprudencia en un sentido más amplio (Monroy Cabra, 2005), esto es, no sólo como los pronunciamientos emitidos por las altas cortes; se podría entonces, acudir a las posiciones o las posturas que quienes administran justicia han acogido para su práctica judicial, desde la reflexión sobre lo dispuesto en el Código General del Proceso y otras fuentes del derecho como la doctrina (que se verá más adelante). Por ello, se realizaron una serie de entrevistas de tipo semiestructurado a algunos jueces y magistrados de la ciudad de Cúcuta, quienes en su área de actuación (Jurisdicción Ordinaria Especialidad Civil-Familia y Laboral, y Jurisdicción Contencioso Administrativa) pusieron de presente los criterios según los cuales entienden y aplican el medio de prueba que resulta del dicho de la parte en el proceso; las entrevistas se presentan a continuación:

ENTREVISTA REALIZADA JUEZ CARLOS ARMANDO VARÓN

Nombre del entrevistado	Carlos Armando Varón
Cargo que desempeña	Juez Cuarto Civil Municipal
Ciudad	Cúcuta
Fecha	22 de marzo de 2018

1. Autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión.

- ¿Desde el régimen probatorio del código general del proceso se puede determinar la autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión?

Sí, son independientes y autónomos, si es un medio probatorio establecido y definido taxativamente en el CGP en su artículo 165, tiene su autonomía como cualquier medio probatorio, su valoración es individual, conjunta y luego contrastada con los demás medios de prueba aportados en el proceso.

SÍ:

- ¿En qué radica su diferencia?

En la finalidad que persigue, aunque la declaración de parte vendría siendo un medio probatorio autónomo, independiente y algo residual, porque de lo que no se tome como confesión producto del interrogatorio de parte o del judicial se puede valorar como declaración de parte, habrá que aclarar su alcance, porque al ser un medio de prueba autónomo podría llegar a informar la confesión lo que en el ejercicio práctico puede llegar a ser contraproducente.

2. La teleología de la declaración de parte en el Código General del Proceso.

- ¿Cuál es la finalidad que persigue el código general del proceso al establecer la autonomía entre la declaración de parte y la confesión?

De la declaración de parte es clarificar los hechos puntuales sobre la demanda, hechos que son objeto de prueba, por su parte la confesión busca una declaración que perjudique al declarante al punto de darse por probado el hecho objeto de prueba.

- ¿En qué medida se cumplen los principios de eficacia, economía y eficiencia procesal cuando se practica el medio de prueba de la declaración de parte en los procedimientos adelantados en su jurisdicción o especialidad?

En la medida en la que el juez use sus poderes de concentración judicial al practicar la declaración de parte dando sincronía a la versión que más se acerque a la verdad para emitir una sentencia pronta en el proceso en cuestión.

3. Solicitud de declaración de parte a la propia parte.

- ¿Es posible la solicitud y práctica de la declaración de la misma parte?

Sí, es posible. Puede solicitarse en la demanda, en la contestación de la demanda, en la reconvencción y en la contestación de la reconvencción propuesta, como también después de presentada la contestación de tales actos, demanda y reconvencción, conforme al artículo 173 del CGP, como medio dinamizador y acelerador en la valoración de las pruebas presentadas al servir de esclarecedor de dudas frente a las versiones de las partes.

4. Práctica de la declaración de parte.

- ¿Conforme a qué reglas (medio o instrumento idóneo) debe ser practicada la declaración de parte?

La práctica de la declaración de parte en procesos de mínima cuantía debe practicarse desde las 10 preguntas que permite el Código General de la declaración de terceros, por su parte en los de menor y mayor cuantía sería de 20 preguntas, conforme al artículo 165 inciso 2 del CGP.

- ¿Cree que debe limitarse el número de preguntas a realizar en la práctica de este medio probatorio?

Si, dentro de las finalidades de este medio de prueba está acelerar los procesos mediante la constación de hechos objeto de prueba con los que se puede valorar individual y conjunto las pruebas aportadas en el proceso, por lo que no limitarlo solo generaría congestión en la fase de práctica de pruebas fenómeno que contrasta con la teleología de este medio de prueba.

- ¿Es posible que de la declaración de la propia parte pueda deducirse confesión?

Sí, si cumple los requisitos de Ley para configurarse la confesión.

- ¿Cuál es la etapa procesal en la que se debe practicar la declaración de parte?

En la fase de práctica de los demás medio de prueba.

- ¿Se puede dar por absuelto con el interrogatorio exhaustivo que obligatoriamente el juez debe realizar en la audiencia inicial?

Esto depende en gran medida de los hechos materia de prueba y la complejidad del proceso, si con los interrogatorios que practiquen las partes y las pruebas allegadas en el proceso hay suficiente material probatorio para valorar y emitir la sentencia, no sería necesario practicar la declaración de parte.

ENTREVISTA REALIZADA JUEZ SAMUEL DARIO RODRÍGUEZ DUARTE

Nombre del entrevistado	Samuel Darío Rodríguez Duarte
Cargo que desempeña	Juez Tercero Laboral del Circuito
Ciudad	Cúcuta
Fecha	6 de marzo de 2018

1. Autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión.

- 1.1. ¿Desde el régimen probatorio del Código General del Proceso se puede determinar la autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión?

No, según la estructura de nuestro código lo que diga la parte no es prueba, lo que plantea la parte en los hechos de la demanda (y su contestación) los tiene que probar ellas en virtud del artículo 167 del CGP, pero no se puede probar con el mismo hecho de la parte.

Para quienes argumentan que es la parte quien mejor conoce los hechos, considero que sí es así, pero también es cierto que la parte está interesada en que lo que está diciendo sea avalado por la justicia para que se le dé la razón, es por eso que lo que la parte dice no es prueba.

NO:

- 1.1.1. ¿Por qué cree que el Código General del Proceso los establece como medios de prueba autónomos e independientes?

Es la misma prueba, se habla de declaración de parte porque es la parte la que está declarando y hay confesión cuando acepta hechos que son adversos para ella, pero el elemento de prueba está regulado bajo una misma normativa, con la diferencia de la connotación que tiene la confesión.

1.1.2. Si estamos bajo un sistema de libertad probatoria, ¿Cuál sería la justificación (argumento jurídico) para no admitir el decreto y posterior práctica de este medio de prueba de forma autónoma?

Lo que dice la parte como tal, en la medida que tiene un apoyo probatorio en otros medios de prueba que concuerden con el dicho de la parte, sí podría valorarse, pero por sí sola no puede probar, tener el efecto de prueba en el proceso; tiene significado la declaración que haya dado la parte y que la favorece cuando tiene otro apoyo probatorio con el que el juez pueda concluir que efectivamente la parte está diciendo la verdad, sólo bajo ese contexto es posible, de forma insular no se puede valorar el dicho de la parte que le favorece.

1.1.3. El **artículo 191** del Código General del Proceso en su inciso final establece que “La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas ¿Cómo considera que debe interpretarse esta disposición?

En el derecho procesal laboral no existe una norma tan amplia que regule esta materia y por lo tanto se acude al Código General del Proceso, de donde se extrae que lo que diga como parte no es prueba en el proceso, a la parte es a la que le corresponde probar según el artículo 167 del Código General del Proceso (con otros medios de prueba).

Por ejemplo, en casos como los del contrato realidad, de despido sin justa causa, no es suficiente el dicho de la parte, éste se aprecia, pero se tiene que corroborar con otros medios de prueba.

No hay diferencia entre la declaración que la parte pueda dar que lo favorezca y los hechos que plantea en la demanda, en el interrogatorio no se repite lo que se dice en la demanda.

1.1.4. Apreciaciones finales.

Que la parte pueda declarar a su favor no sería algo parcial, si se busca un testimonio imparcial, la parte no es la llamada a decir cómo sucedieron las cosas. Si esto fuera así no se requeriría ni

siquiera de un interrogatorio, con lo que aduce en la demanda sería suficiente, porque lo que dice en la demanda será lo que eventualmente afirmará en un interrogatorio.

ENTREVISTA REALIZADA MAGISTRADA YULI MABEL SÁNCHEZ QUINTERO

Nombre del entrevistado	Yuli Mabel Sánchez Quintero
Cargo que desempeña	Magistrada Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
Ciudad	Cúcuta
Fecha	2 de abril de 2018

1. Autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión.

1.2. ¿Desde el régimen probatorio del Código General del Proceso se puede determinar la autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión?

Sí son dos medios de prueba distintos, pero me encuentro en este momento, desde mi posición de administrador (a) de justicia, ecléctica respecto del tema porque de un lado tenemos que la parte es el sujeto mejor informado de los hechos, es quien ha vivido la situación, por ejemplo en un proceso en el que se esté solicitando la pensión de sobreviviente es la parte quien convivió con la persona, pero de otro lado podría pensarse que no porque está fabricando prueba y con ello el límite de hasta donde la parte puede fabricar su propia prueba.

Sin embargo, con ello entraríamos a discutir en el plano de la buena fe o la mala fe, el operador jurídico no puede entrar a prejuzgar a la parte pensando que esta le va a decir mentiras, porque en ese caso, la parte le dirá al juzgador que precisamente para ello está bajo la gravedad de juramento.

También porque al ser un cuerpo colegiado, en algunas decisiones nos hemos enfrentado a casos donde la prueba allegada al proceso no demuestra nada, por lo que he considerado que de oficio se pueda ordenar interrogar a la parte y en la sala que hemos conformado se ha sido un poco más flexible con ello, permitiendo practicar pruebas de oficio y llamando para ello a declarar a la parte.

SÍ:

1.2.1. ¿En qué radica su diferencia?

En que sea posible solicitar la declaración de la misma parte.

2. La teleología de la declaración de parte en el Código General del Proceso.

2.1. ¿Cuál es la finalidad que persigue el Código General del Proceso al establecer la autonomía entre la declaración de parte y la confesión?

Que se pueda oír a las partes, la aplicación de instrumentos internacionales en relación con el derecho a ser oído que

2.2. ¿En qué medida se cumplen los principios de eficacia, economía y eficiencia procesal cuando se practica el medio de prueba de la declaración de parte en los procedimientos adelantados en su jurisdicción o especialidad?

Se cumple en la medida de que a veces nos enfrentamos a casos donde no hay prueba o donde las pruebas que hay no son idóneas, conducentes, pertinentes, entonces allí podríamos hacer uso de ese medio de prueba para poder fallar en aras de llegar a la verdad real. Sin embargo, allí también se presenta inseguridad porque no se sabe si debe fallarse por esa omisión del abogado con carga de la prueba o si se debería acudir a ese medio de prueba.

- 2.3. ¿Según su especialidad o jurisdicción, en qué procesos (medios de control) resultaría idóneo el medio de prueba de la declaración de parte?

Para procesos cuyas pretensiones sean por ejemplo pensión de sobreviviente.

3. Solicitud de declaración de parte a la propia parte.

- 3.1. ¿Es posible la solicitud, decreto y práctica de la declaración de la misma parte?

Sí.

4. Práctica de la declaración de parte.

- 4.1. ¿Conforme a qué reglas (medio o instrumento idóneo) debe ser practicada la declaración de parte? ¿Cree que debe limitarse el número de preguntas a realizar en la práctica de este medio probatorio?

La declaración de parte tiene que cumplir con todos los lineamientos del interrogatorio de parte, con sus 20 preguntas, porque es una prueba que se debe exigir, porque a veces en la práctica el abogado no lleva claras las preguntas ni lo que pretende demostrar. Por eso debe ser estricta la práctica de esta prueba.

Sin embargo, sigue siendo difícil abordar el dicho de la parte, por eso considero que debería hacerse un estudio juicioso del tema, acudiendo al derecho comparado especialmente, pudiendo definirse unos parámetros o pautas que permitan junto a las reglas de la experiencia que debe aplicar el juez determinar cómo se lleva a cabo este medio de prueba. Todo esto debe reglamentarse o estudiarse en sede de control de constitucionalidad con lo que se establezca una interpretación adecuada.

- 4.2. ¿Es posible que de la declaración de la propia parte pueda deducirse confesión?

Si es posible.

4.3. ¿Cuál es la etapa procesal en la que se debe practicar la declaración de parte?

Se debe practicar en la audiencia de trámite para la especialidad laboral.

4.4. ¿Se puede dar por absuelto con el interrogatorio exhaustivo que obligatoriamente el juez debe realizar en la audiencia inicial?

No, en materia laboral no es posible porque no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 372.7 del Código General del Proceso.

ENTREVISTA REALIZADA MAGISTRADO ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLES

Nombre del entrevistado	Robiel Amed Vargas Gonzáles
Cargo que desempeña	Magistrado Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander
Ciudad	Cúcuta
Fecha	5 de abril de 2018

1. Autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión.

1.3. ¿Desde el régimen probatorio del Código General del Proceso se puede determinar la autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión?

Por la reacción de la norma, a partir del 165 del Código General del Proceso, se puede pensar que la declaración de parte es un medio de prueba autónomo, al diferenciarlo con la confesión, pareciera que se introduce a la declaración de parte como un medio de prueba diferente.

SÍ:

1.2.2. ¿En qué radica su diferencia?

En el fondo es difícil diferenciar el uno y el otro, ¿cómo se diferencia o qué se pregunta cuando estamos frente a una declaración y qué se pregunta cuando se trate de confesión? En últimas las pruebas lo que buscan es demostrar hechos, si ocurrieron o no. En que sea posible solicitar la declaración de la misma parte.

2. La teleología de la declaración de parte en el Código General del Proceso.

2.4. ¿Cuál es la finalidad que persigue el Código General del Proceso al establecer la autonomía entre la declaración de parte y la confesión?

Aquí existe un contrasentido, pues ¿qué sentido tiene pedir la declaración de la propia parte cuando ya se ha tenido la oportunidad en la demanda para hacerlo? El demandado ya explicó unos hechos, por lo tanto, la práctica del medio de prueba resultaría inútil.

De esta forma, el único propósito del medio de prueba sería demostrar unos hechos (que se narran, bien por el demandante o bien por el demandado) y si ya la parte los narró en la demanda o en la contestación de la demanda ¿para qué la declaración de la propia parte? Se correría un riesgo, en el entendido de que incluso en esa declaración podría afirmar o estipular nuevos hechos que no estaban contenidos en el escrito de la demanda (a partir de la cual se fija el litigio), prácticamente tendría que volver a plantear las pretensiones y los medios probatorios para esos nuevos hechos y si no lo hace de esa forma, se limitaría a repetir los hechos que señaló en la demanda. No resulta útil de manera general (pueden existir excepciones, dependiendo de cada caso en concreto).

2.5. ¿Según su especialidad o jurisdicción, en qué procesos (medios de control) resultaría idóneo el medio de prueba de la declaración de parte?

Podría ser útil cuando se pretenda obtener más claridad y precisión de los hechos. Un claro ejemplo es la figura que se ha venido utilizando del interrogatorio de parte de oficio, ha resultado bastante útil para aclarar dudas y establecer hechos reales, solo con fines aclaratorios.

3. Solicitud de declaración de parte a la propia parte.

3.2. ¿Es posible la solicitud, decreto y práctica de la declaración de la misma parte?

Por regulación normativa pareciera que hubiera lugar a decretarlo, el problema radicaría en su práctica cuando el declarante en su declaración modifica hechos que no había afirmado en la demanda, pues no habría oportunidad para que la contraparte pida pruebas, pues ya se estaría en el recaudo en la audiencia de pruebas y una vez finalizado se corre traslado para alegato inicial y dictar sentencia. En la práctica puede resultar incontrolable esa prueba.

4. Práctica de la declaración de parte.

4.5. ¿Conforme a qué reglas (medio o instrumento idóneo) debe ser practicada la declaración de parte? ¿Cree que debe limitarse el número de preguntas a realizar en la práctica de este medio probatorio?

En este momento no existe un mecanismo para la práctica de la declaración de parte como un medio de prueba autónomo y yo no lo puedo traer bajo las reglas de un testimonio de tercero, pues él participó directamente en los hechos. Sin ese desarrollo legal para su práctica me cuesta mucho llegar a aplicarle las reglas de la declaración de terceros.

4.6. ¿Es posible que de la declaración de la propia parte pueda deducirse confesión?

Sí es posible, siempre y cuando no se trate de representantes de las entidades públicas porque estos por mandato expreso del Código General estos no pueden confesar.

4.7. ¿Cuál es la etapa procesal en la que se debe practicar la declaración de parte?

En el proceso administrativo, sería en la audiencia de recaudo de pruebas. Por lo que resulta compleja la práctica de este medio de prueba, pues en nuestra jurisdicción primero se desarrolla la audiencia inicial y luego se fija la audiencia para la práctica de las pruebas, que tardaría entre 4 o 5 meses en realizarse. De la misma forma, al practicarse el medio de prueba, se atentaría contra el derecho de contradicción, pues en la audiencia de pruebas no es posible que la contraparte solicite nuevas pruebas para controvertir la afirmación, la única opción sería objetar la declaración.

4.8. ¿Se puede dar por absuelto con el interrogatorio exhaustivo que obligatoriamente el juez debe realizar en la audiencia inicial?

No se aplica este interrogatorio, nosotros fijamos el litigio a través de las afirmaciones en la demanda y en la audiencia inicial se decretan todas las pruebas conforme a ello. Sin embargo, si es un deber del juez, en la audiencia inicial, escuchar a las partes, esta discusión sobra (de que la declaración de parte es un medio de prueba y que la misma parte puede pedir su declaración) porque el juez, antes de la audiencia de pruebas ya lo va a oír de forma obligatoria, por lo cual estaría de más la práctica de este medio de prueba cuando ya se hizo efectivo con el interrogatorio del juez y se debe considerar como medio probatorio.

A partir de la información presentada a través de entrevistas, como técnica de recolección de información utilizada en el presente trabajo, se revela la notable disparidad entre uno y otro criterio, que van desde que en algunos casos se acepte a la declaración de parte como un medio de prueba autónomo, siendo posible por ejemplo solicitar la declaración de la propia parte; en otros, se considere que se trata de dos medios de prueba distintos pero sólo en punto de valoración, por lo que deben ser practicados a través del interrogatorio previsto en el artículo 198 del CGP y todo

aquello que no constituya confesión será valorado como declaración de parte de acuerdo a las reglas generales de apreciación de las pruebas; hasta quien sostiene que esto es un medio que en manera alguna puede ser considerado como apropiado para traer al proceso elementos de prueba por cuanto la parte tiene un interés sobre lo que allí se decida.

Con lo anterior se denota que al no existir un criterio uniforme se genera una grave inseguridad jurídica en la medida de que en procesos regidos en materia probatoria por una misma normal procesal, no se aplica de igual forma (en lo posible) un medio de prueba en particular.

De esa forma, sin perjuicio de apreciar los criterios que los funcionarios entrevistados aportan a la investigación, se debe concluir, que luego del análisis de la jurisprudencia –en sentido amplio y estricto-, se evidencia gran inseguridad jurídica a partir de una profunda contradicción en la aplicación de una misma figura probatoria por parte de los operadores jurídicos y la falta por supuesto de un criterio que desde las altas cortes ofrezca claridad sobre el asunto.

Ahora, se abordaran las posturas asumidas en la doctrina al respecto, las cuales, debe advertirse, no han sido pacíficas, existiendo, con salvedades, tres grupos de criterios que se describirán a continuación:

La primera de ellas, es un posición según la cual la parte se considera como un testigo, esto es, el testimonio no debe entenderse sólo respecto de los terceros sino que la parte como un sujeto que conoce los hechos controvertidos, también puede llevar al proceso su relato como un testigo, así, la prueba testimonial corresponde al género, dentro del cual se encuentra como especies la declaración de parte y la declaración de terceros, razón por la que deberían surtirse estos dos medios de prueba bajo las mismas reglas de producción, con especial énfasis en las reglas de práctica. Para ello se acogerían las reglas previstas para la declaración de terceros por cuanto estas han sido ampliamente desarrolladas en la normas procesal; así se somete “a la parte que declara al examen directo de su abogado, para luego someterse al contraexamen de la contraria, sin perjuicio de las preguntas del juez, y la doble vuelta para fines de aclaración o refutación” (López Martínez, 2016).

Quienes defienden esta tesis la fundamentan en diversos criterios como lo son la existencia de un proceso oral y por audiencias que requiere escuchar a las partes en virtud del principio de inmediación que resulta medular en este modelo procesal¹⁹, el derecho a ser oído que se deriva desde las garantías judiciales previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia²⁰, y que se debe dejar atrás la vieja concepción de que nadie puede hacer prueba con su propio dicho, pues esto se trata de un rezago del sistema de tarifa legal, por ello el Código General del Proceso ya no incluye en su texto normativo que se pida declaración de “la parte contraria” como sí lo hacía el Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, el dicho de la parte no puede ser producido en su práctica a través del interrogatorio de parte pues la naturaleza de este instrumento es la obtención de confesión que es otro medio de prueba²¹. Los autores concuerdan en el especial énfasis de que la utilización de las reglas de práctica de la declaración de terceros sirve para aquel supuesto en el que sea la propia parte quien solicita su declaración.

En un segundo momento, se identifica la posición que sostiene tácitamente Jaime Azula Camacho (Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal. Pruebas judiciales, 2015) y expresamente Octavio Tejeiro (Tejeiro Duque, 2015)²², según la cual si bien la declaración de parte es autónoma de la confesión, sus reglas de producción son las mismas, esto es, el interrogatorio de parte²³, a partir del cual la única distinción que existe entre estos dos medios de prueba son los criterios bajo los cuales son valorados. Así, el Código General del Proceso lo que trajo como novedad fue la posibilidad de que lo que del interrogatorio no constituya prueba de

¹⁹ Este argumento lo sostienen los autores Marco Antonio Álvarez (Álvarez Gómez, 2017, págs. 8-10), Adriana López Martínez (López Martínez, 2016, págs. 477-478) y Miguel Enrique Rojas (Rojas Gómez, 2014, pág. 301).

²⁰ Fundamento que aducen Marco Antonio Álvarez (Álvarez Gómez, Ensayos sobre el Código General del proceso, 2017) y Miguel Enrique Rojas (Rojas Gómez, 2015).

²¹ Este argumento lo sostienen los autores Marco Antonio Álvarez (Álvarez Gómez, 2017, pág. XVI) y (Álvarez Gómez, 2015, pág. 301), Adriana López Martínez (López Martínez, 2016, pág. 476 y 485) y Miguel Enrique Rojas (Rojas Gómez, 2014, pág. 301).

²² Cabe anotar, que el autor Miguel Enrique Rojas no es del todo ajeno a esta postura, en el entendido de que si bien considera que las reglas de declaración de terceros son aplicables, esto es sólo cuando se trate de la declaración de la propia parte, por lo tanto, también admite que desde el interrogatorio de parte se puede obtener confesión y declaración de parte de acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 191 del CGP, para lo cual señala textualmente que “(...) el interrogatorio no sólo sirve para obtener confesión, sino también para dar versión” (Rojas Gómez, 2015, pág. 300).

²³ En palabras del profesor Octavio Tejeiro: “(...) por medio del interrogatorio de parte, que el estatuto no considera medio probatorio, se puede llegar a la declaración de la parte o a su confesión, sin que obligatoriamente ocurra una u otra cosa” (Tejeiro Duque, 2015).

confesión (lo que no le afecte a la parte o favorezca a la contraria) sea valorado conforme a las reglas generales de apreciación de las pruebas. De esta forma “La práctica de esa prueba comienza con las interrogaciones del juez, exhaustivas (...), una vez que se ha recibido al declarante el juramento de no faltar a la verdad, continúa con las que ha de realizar la parte contraria, bajo las formalidades establecidas en los artículos 202 y 203, según los cuales no serán más de 20 preguntas, pese a que el juez sí puede adicionar las que estime convenientes y a que lo puede hacer en el orden que le parezca mejor, interrumpiendo, si es del caso” (Tejeiro Duque, 2015, pág. 564).

Finalmente, se encuentra una posición radicalmente contraria a las vistas anteriormente, se trata de lo expuesto por el profesor Ramiro Bejarano, para quien no es cierto que el Código General del Proceso haya autorizado a la parte a pedir su propia declaración en el curso de un proceso aludiendo a que en la nueva codificación procesal no se indica (como sí lo hacía el Código de Procedimiento Civil) que la declaración se pide respecto de la parte contraria, porque, entre otras razones, al regular el decreto de la misma prueba en el escenario extraprocesal, expresamente se previó que puede solicitarla la parte pero solamente respecto de “su presunta contraparte”, (Bejarano Guzmán, 2017) y que pese a que el encabezado que precede al artículo 191 del CGP se tituló “Declaración de parte y confesión” a diferencia de la “Declaración de parte”, como se denominaba en el Código de Procedimiento Civil (CPC), tal distinción, en su criterio, no implicó modificación alguna, “ni significa que en el CPC el interrogatorio de parte fuese estrictamente facultativo, pues el juez también podía decretarlo de oficio. La diferencia no es esa, sino que en el CGP siempre el juez decreta de oficio el interrogatorio de las partes” (Bejarano Guzmán, 2016).

Con todo lo visto en el presente capítulo, se puede concluir sobre el tema objeto de estudio, que desde las fuentes del derecho aplicables en Colombia en primer lugar se identifica una anomia respecto de las reglas para la producción probatoria de la declaración de parte como medio de prueba autónomo en el Código General del Proceso, lo que da lugar a diversos problemas jurídicos que no son resueltos ni por la jurisprudencia ni por la doctrina, pues los criterios que pueden extraerse de ellas difieren entre sí, generando que hasta el momento no exista, tanto para la parte como para el juez, una posición clara respecto de la aplicación de la declaración de parte como medio de conocimiento en el proceso, lo que se traduce en una notable inseguridad jurídica que requiere ser resuelta.

4. INSUMOS FORÁNEOS: DERECHO COMPARADO

Ruptura y adopción de paradigmas, es quizá el común denominador de las reformas procesales de los últimos años en Iberoamérica, y por supuesto, la declaración de parte ha tomado un lugar en ese proceso de transformación que muchos países han adelantado en busca de una justicia más efectiva. Por ello, a continuación se identifica, describe y analiza las etapas del *íter* probatorio que se presentan en los distintos códigos procesales estudiados, en busca de establecer los diversos criterios y posiciones asumidos en la producción que tiene el medio probatorio que permite allegar al proceso los dichos de las partes.

4.1. Solicitud

El Código de Procedimiento Civil chileno (Ley 1556, 1902) consagra como medio probatorio la “confesión en juicio”, lo que permite observar el panorama que en otrora imperaba, es así como ésta se puede solicitar en cualquier estado del juicio y por más de una vez²⁴, constituyendo incluso una obligación para la parte en virtud del art. 385²⁵.

La misma línea conserva el Código de Procedimiento Civil de Venezuela (Ley 4196, 1990) que también contempla como medio probatorio la confesión, solicitada respecto de la contraparte, su apoderado (por los hechos realizados en nombre de su mandante, siempre que subsista mandato al momento de realizar la solicitud) o de los representantes de personas incapaces sobre los hechos en los que hayan actuado con este carácter (artículo 407). Cabe resaltar que en este código se presenta una notable particularidad en el artículo 406 donde se indica que la parte que solicita tal prueba, debe manifestar en dicha solicitud estar dispuesta a absolver las posiciones de la parte contraria.

²⁴ “Art. 385. (...) Esta diligencia se podrá solicitar en cualquier estado del juicio y sin suspender por ella el procedimiento, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta antes de la vista de la causa en segunda. Este derecho sólo lo podrán ejercer las partes hasta por dos veces en primera instancia y una vez en segunda; pero, si se alegan hechos nuevos durante el juicio, podrá exigirse una vez más.” (Ley 1556, 1902).

²⁵ “Art. 385. Fuera de los casos expresamente previstos por la ley, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea, la demanda, sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal en conformidad al artículo 159.” (Ley 1556, 1902).

En igual sentido el Código Procesal Civil de Bolivia (Ley 439, 2013), pese a haber sido expedido en el año 2013, consagra la confesión como el medio de prueba para llevar al conocimiento del juez los dichos de las partes, con lo cual decidió apartarse de lo que podría ser la corriente iberoamericana en materia probatoria que gira en torno a la adopción de la declaración de parte como el medio de prueba a practicar. Como confesión consagra dos clases, judicial y extrajudicial, la primera a su vez se subdivide en provocada y espontánea, en el caso de la confesión provocada la solicitud puede ser a petición de parte o decretada de oficio, la espontánea se surte en determinados actos procesales consagrados por el artículo 157.3 de la norma en comentario²⁶.

El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de 1998 al igual que en el Código General del Proceso de Uruguay (Ley 15982, 1988), consagra como medio probatorio la declaración de parte, pero dentro de este distingue entre dos instrumentos para llevarla a cabo, el interrogatorio de parte y la absolución de posiciones, que en la etapa de solicitud de la prueba denotan diferencias como la rigurosidad en el momento procesal en que debe realizarse y la formalidad que debe contener esa solicitud. El interrogatorio de parte a su vez presenta dos formas, con o sin previa citación, donde esta última consagrada en el artículo 139.2 permite bajo el tenor literal de la norma ser solicitada en el curso de cualquier audiencia y el interrogatorio con previa citación específica para este acto se rige por la forma y oportunidad establecida para la absolución de posiciones (artículo 140), caso en el cual la solicitud debe formularse “con acompañamiento de pliego cerrado que las contenga, con antelación suficiente a la fecha de la audiencia de prueba para permitir la citación del absolvente, salvo que la parte o su representante se encuentre presente en la audiencia preliminar, en cuyo caso se la tendrá por citada, con la simple manifestación respectiva de la contraparte” (Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica).

Por su parte España en el año 2000 introduce luego de más de cien años una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en la que se pasa de un sistema procesal escrito donde se

²⁶ “Artículo 157. Clases de confesión. (...) III. Es confesión judicial espontánea la que se formulare en la demanda, la contestación o en cualquier otro acto del proceso y aun en ejecución de sentencia, sin interrogatorio previo; en éste último caso, importará renuncia a los beneficios acordados en la sentencia.” (Ley 439, 2013).

contemplaba como medio probatorio la confesión en juicio (arts. 579 a 595 LEC/1881 y 1231 a 1239 C.C.)²⁷ por medio de la absolución de posiciones al interrogatorio de las partes cuya solicitud procede respecto de la contraparte²⁸, de un colitigante (cuando exista en el proceso oposición o conflicto de intereses con este) y de un tercero que sea el titular de la relación jurídica controvertida, o del derecho en cuya virtud se acciona (artículo 301.2).

La proposición del interrogatorio de las partes tendrá lugar en la audiencia previa del juicio ordinario o, en su caso, en la vista del juicio verbal. Sin embargo, ello no impide la proposición como prueba anticipada (artículo 293)²⁹ ya sea con anterioridad al inicio del proceso o pendiente ya este (artículo 295.2), a raíz de una sugerencia probatoria (artículo 429.1) o como diligencia final conforme al artículo 435 (Lluch, 2012, pág. 548).

Esta regulación ha sido en buena parte seguida por países como Honduras y Nicaragua, agregándose en este último un sujeto sobre el cual se puede solicitar la práctica de este medio probatorio como lo es la persona sujeta a guarda que ha sido autorizada por su guardador para celebrar un acto o contrato y a quien se le deberá interrogar sobre el mismo³⁰.

El más reciente código procesal en Iberoamérica es el de Ecuador que en mayo de 2015 promulgó el Código Orgánico General de Procesos y que ha marcado sin lugar a dudas un gran avance en la concepción de la declaración de parte como medio de prueba, pues consagra en su capítulo segundo la prueba testimonial³¹ que de forma novedosa abarca tanto la declaración de

²⁷ La Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881 consagraba que tal confesión era indivisible y constituía plena prueba contra el declarante, por lo que si esta cumplía con los requisitos las demás pruebas resultaban por tanto irrelevantes (Marín Verdugo, Declaración de parte como medio de prueba, 2010, pág. 147).

²⁸ Sobre esto Marín Verdugo expone que pese al avance generado con la LEC del 2000 este fue parcial entre otras cosas porque sólo se consagró la declaración de parte forzada dejando de lado la voluntaria (Marín Verdugo, Declaración de parte como medio de prueba, 2010, pág. 147).

²⁹ “Artículo 293. (...) 1. Previamente a la iniciación de cualquier proceso, el que pretenda incoarlo, o cualquiera de las partes durante el curso del mismo, podrá solicitar del tribunal la práctica anticipada de algún acto de prueba, cuando exista el temor fundado de que, por causa de las personas o por el estado de las cosas, dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente previsto...” (Ley 01, 2000).

³⁰ Al respecto puede consultarse el artículo 254 del Código Procesal Civil de Nicaragua (Ley 902, 2015).

³¹ En su artículo 174 señala que la prueba testimonial es “la declaración que rinde una de las partes o un tercero” (Ley 506, 2015).

parte como la de testigos³² y para la cual dispone (remitiéndose al artículo 159 por no encontrarse disposición especial) que su solicitud debe ser “anunciada” en la demanda, su contestación, o en la demanda de reconvención y su respectiva contestación.

4.2. Decreto

El código procesal chileno, consagra gran flexibilidad en cuanto al término de solicitud de la prueba como se vio en el acápite anterior, lo que a su vez comporta un amplio término para su decreto, de tal forma que este puede realizarse a petición de parte en cualquier estado del juicio, pero si el decreto es de oficio debe realizarse conforme al art. 159 en el que se establece que debe ser “sólo dentro del plazo para dictar sentencia” (Ley 1556, 1902).

Por su parte, el Código Procesal Civil Modelo contempla la posibilidad de dos figuras para el decreto de esta prueba pues si se trata de la declaración de parte sin previa citación (artículo 139.2) esta puede efectuarse en el curso de cualquier audiencia que se surta en el proceso y si se trata de declaración de parte con previa citación o absolución de posiciones esta debe decretarse luego de la oportunidad señalada para su solicitud conforme el artículo 140³³.

La LEC española señala en su articulado la posibilidad de decretar el interrogatorio de oficio y en el caso de ser a petición de parte, la admisión del interrogatorio (artículo 302.2) y a su vez el juicio de pertinencia que debe realizar el juez a las preguntas concretas³⁴ debiendo velar

³² Sobre el particular se resalta el Código Procesal Civil de Perú (Decreto Legislativo No. 768, 1992) que contempla la aplicación supletoria de las reglas previstas para la declaración de parte al medio de prueba de la declaración de testigos (art. 230), lo que puede considerarse como un antecedente de lo consagrado en la actual legislación procesal ecuatoriana, pues desde la promulgación del código del Perú ya se avizoraba similitud entre estos dos medios probatorios.

³³ “*Artículo 140. (Posiciones).* 140.1. Las partes pueden ponerse recíprocamente posiciones. Deberán formular la solicitud respectiva con acompañamiento de pliego cerrado que las contenga, con antelación suficiente a la fecha de la audiencia de prueba para permitir la citación del absolvente, salvo que la parte o su representante se encuentre presente en la audiencia preliminar, en cuyo caso se la tendrá por citada, con la simple manifestación respectiva de la contraparte y bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el ordinal siguiente (...)” (Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, 1988).

³⁴ En igual sentido se consagra en Honduras en el artículo 254.3 (Decreto No. 211, 2007) y en Nicaragua en el artículo 257 (Ley 506, 2015).

porque estas cumplan los requisitos del artículo 302³⁵, para que una vez este compruebe que las preguntas corresponden a los hechos que guardan relación con el objeto del juicio, decida en el mismo acto de la práctica de la prueba sobre la admisibilidad de las mismas, salvo en los casos donde el interrogatorio se presente por escrito como sucede en el interrogatorio domiciliario³⁶.

El código ecuatoriano al igual que para la solicitud de la declaración de parte remite a las reglas generales establecidas para todos los medios de prueba en cuanto a su decreto, de esta forma el artículo 160 consagra los criterios que el juez debe analizar para admitir una prueba como lo son los criterios de pertinencia, utilidad y conducencia de la misma.

Por último Venezuela en su Código de Procedimiento Civil en el artículo 399 contempla respecto a la admisión de las pruebas un caso en el cual se procede a su práctica sin necesidad de providencia de admisión, esto es cuando no existe oposición de las partes para su admisión³⁷. Por otra parte, luego de que en la solicitud de la prueba las partes han acordado absolver las posiciones de la parte contraria, el tribunal fija mediante auto la oportunidad en que deberán absolver las de la otra parte (artículo 406).

4.3. Práctica

El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de 1988 ya vislumbraba cambios en el medio probatorio en cuestión al consagrar la posibilidad del interrogatorio abierto y cruzado³⁸, novedades bien recibidas por los profesores Jorge Fábrega Ponce y Adán Arnulfo Arjona López

³⁵ Estos requisitos son: la formulación de las preguntas en sentido afirmativo, con claridad y precisión, y que no contengan valoraciones ni calificaciones.

³⁶ Los artículos 311 y 313 indican circunstancias en las cuales la parte proponente no puede concurrir al acto de práctica del interrogatorio, ya sea por considerarse por el tribunal que es inconveniente la presencia de esta o por razones de territorio, caso en los que la parte proponente puede presentar un pliego de preguntas que consideradas pertinentes por el juez serán formuladas por este o por el comisionado.

³⁷ Artículo 399. “(...) y si no hubiere oposición de las partes a la admisión, éstas tendrán derecho a que se proceda a la evacuación de las pruebas, aun sin providencia de admisión. Si hubiere oposición sobre la admisión de alguna prueba, no se procederá a evacuar ésta sin la correspondiente providencia” (Ley 4196, 1990).

³⁸ “Artículo 139. (*Interrogatorio*). 139.1. El interrogatorio se hará por el Tribunal, sea el dispuesto de oficio o por pedido de parte. Las preguntas recaerán sobre los hechos controvertidos; terminado el interrogatorio, las partes, por intermedio de sus abogados, podrán interrogarse libremente, pero sujetos a la dirección del Tribunal conforme con lo dispuesto por el numeral 30 del artículo 151” (Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, 1988).

quienes se pronunciaron por la bondad que ofrecen los mismos, pero que a su vez se mostraron en contra de las llamadas “posiciones” por considerar que pueden provocar indefensión en el caso de personas con poca instrucción (Parodi Remón, 1992)³⁹. Como singular característica se puede encontrar al igual que en el Código General del Proceso de Uruguay la posibilidad de realizar el interrogatorio a menores púberes, el cual debe llevarse a cabo en presencia de su representante (artículo 141.2). De otro lado, en el caso de personas jurídicas, sus representantes pueden solicitar o el tribunal disponer que sea citado como testigo “otra persona que tenga la condición de representante estatutario o legal de la persona jurídica o integrante de su dirección” que si tenga conocimiento personal de los hechos (art. 141.4).

Siguiendo la tendencia del derecho procesal iberoamericano la Ley de Enjuiciamiento Civil española consagra un interrogatorio oral y cruzado (artículo 306)⁴⁰ pero cuyas preguntas deben ser en sentido afirmativo o negativo (artículo 302)⁴¹, lo que se considerada por autores como Guasp que “se trata de una reminiscencia de los antiguos pliegos de posiciones y que tal formalismo no debe aplicarse rigurosamente” (Lluch, 2012, pág. 536), además no pueden incluir valoraciones ni calificaciones (artículo 302.1) pues de lo contrario pueden ser impugnadas por la parte que absuelve el interrogatorio y considerarse por consiguiente como no realizadas (artículo 303).

Es importante resaltar que en virtud de la oralidad que se introduce para la práctica de este medio de prueba, en el interrogatorio se permite modular una nueva pregunta a la vista de la respuesta a la anterior lo que aporta espontaneidad y frescura en su desarrollo (Lluch, 2012, pág. 558). Así mismo se permite que el interrogado para dar respuesta a las preguntas que le sean formuladas pueda utilizar documentos, notas o apuntes dirigidos a auxiliar su memoria, pudiendo

³⁹ Lo mismo ocurre en la regulación procesal peruana (Decreto Legislativo No. 768, 1992) donde pese a consagrarse como medio probatorio la declaración de parte aún se contempla las posiciones como el instrumento a través del cual se adelanta la práctica de la prueba (art. 213).

⁴⁰ De igual forma en el código procesal mexicano se prevé la posibilidad de realizar luego del interrogatorio en que se absuelven posiciones nuevas preguntas por parte del absolvente (art. 112), entendiéndose esto como un interrogatorio cruzado pese a desarrollarse en el medio de prueba de confesión.

⁴¹ Al respecto el profesor Xavier Lluch indica que la “LEC, sin renunciar al carácter formal y asertivo del interrogatorio, abandona la escritura y prescinde del juramento” (Lluch, 2012, pág. 535).

agregar también las explicaciones que estime convenientes y que guarden relación con lo que se le plantea (artículo 305).

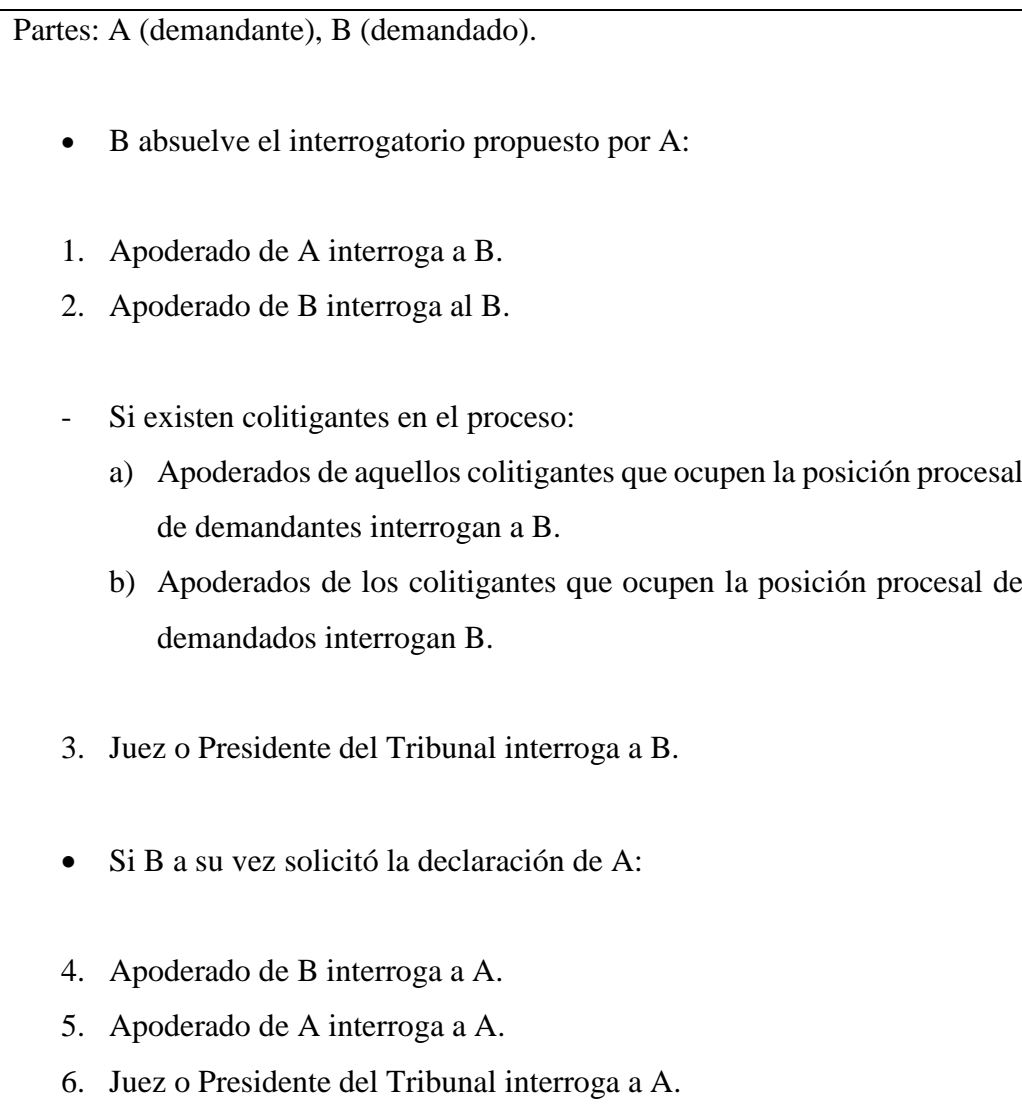
Ahora, tratándose de preguntas sobre hechos no personales del interrogado sucede algo particular pues éste debe responder según sus conocimientos pero puede proponer que conteste un tercero que sí tenga conocimiento personal de los mismos, lo cual debe ser aceptado por la contraparte y el declarante aceptar a su vez las consecuencias de la declaración de este; en caso de no darse tal aceptación deberá entonces declarar ese tercero como testigo según dispone el artículo 308 de la norma en comento. Para las personas jurídicas de derecho privado también se contempla la anterior figura, pero en este caso se establece que una vez el representante indica el nombre de ese tercero, el tribunal lo citará a rendir interrogatorio fuera de juicio como una diligencia final (artículo 309.2)⁴².

Además, consagra el interrogatorio domiciliario (artículo 311)⁴³ para casos en los que por enfermedad u otra circunstancia le impida al declarante comparecer a la sede del tribunal, esta declaración se toma en presencia del juez y del secretario judicial quien además debe levantar acta de tal declaración conforme a lo dispuesto por el artículo 312. Otra particularidad presente en la consagración del interrogatorio en la LEC es la posibilidad de practicarlo de forma conjunta con otro medio de prueba y particularmente con el dictamen pericial (artículo 357.2), pero este sólo procede a petición de parte a diferencia de lo que sucede con la práctica conjunta de los otros medios probatorios (Lluch, 2012, págs. 565-567).

⁴² Debe aclararse que lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 309 de la LEC hace referencia a aquellas situaciones en las que alguna pregunta del interrogatorio que se le realiza al representante de la persona jurídica se refiera a hechos en los que este no ha participado, es decir, que pese a haber intervenido en los hechos es sometido a una pregunta en la que no intervino personalmente, debiendo responder no obstante según sus conocimientos e identificar a la persona que sí intervino. Mientras que lo dispuesto en el numeral 1 del mismo artículo se refiere a los casos en que el representante no intervino en los hechos materia de controversia en el proceso, caso en el que debe alegar tal circunstancia en la audiencia previa al juicio indicando la identidad de la persona que si intervino de forma personal en estos, para que sea citada al juicio o de ser así solicitado por el representante que sea citado en calidad de testigo.

⁴³ Situación que se eliminó en el Código General del Proceso: “Artículo 201. Traslado de la parte a la sede del juzgado. Cuando la parte citada resida en lugar distinto a la sede del juzgado, el juez dispondrá que quien haya solicitado la prueba consigne, dentro de la ejecutoria del auto, el valor que el juez señale para gastos de transporte y permanencia, salvo que la audiencia pueda realizarse por videoconferencia, teleconferencia o se encuentre en una de las eventualidades que permiten comisionar. Contra tal decisión no cabe recurso.”

La regulación del Código Procesal Civil hondureño sigue en términos generales las reglas de práctica de este medio de prueba vistas en la LEC pero establece de forma particular en el artículo 257 la estructura de tal práctica, señalando entonces que en un primer momento interrogará el apoderado de la parte que ha solicitado la prueba, luego los apoderados de las demás partes (primero aquellos que ocupen la misma posición procesal y luego los contrarios), posteriormente el juez o el presidente del tribunal con fines aclaratorios o para adicionar los hechos declarados y finalmente la parte que absuelve tal declaración interrogará a la contraparte siempre que haya solicitado la prueba respecto de esta, siguiendo a continuación las anteriores pautas hasta completarse la práctica de esta prueba, como puede verse en la siguiente gráfica:



Cuadro 2. Práctica del interrogatorio de parte según el Código Procesal Civil de Honduras.

Así mismo en el artículo 267 de este código se contempla la no reiteración⁴⁴ e irrevocabilidad⁴⁵ de la declaración realizada por la parte, con lo cual se niega la procedencia de interrogatorio sobre los mismos hechos que hayan sido objeto de declaración por las partes o terceros asimilados a estas y se tiene por no realizada cualquier rectificación que realice el declarante sobre los hechos del interrogatorio, salvo que a través de otros medios de prueba se demuestre la existencia de error, intimidación o violencia al declarar sobre los mismos.

Ahora, si de novedades y nuevas tendencias se trata el Código Orgánico General de Procesos de Ecuador ha tomado la iniciativa al consagrar como ya se ha indicado, la prueba testimonial como género y la declaración de parte y de testigos como especies, lo cual genera una marcada diferencia con lo previsto en los demás sistemas probatorios pues contempla reglas comunes de producción probatoria. En ese orden, su práctica se lleva a cabo en la audiencia de juicio por medio de interrogatorio de la parte que la propone y contrainterrogatorio de la contraparte⁴⁶, directamente o a través de videoconferencia u otro medio tecnológico (artículo 174)⁴⁷, siguiendo la estructura prevista en el artículo 178⁴⁸:

⁴⁴ Aspecto que se comparte por otros ordenamientos procesales civiles como el de España (art. 314) y Nicaragua (art. 265), que como ya se ha manifestado encuentran gran similitud en la consagración del medio de prueba estudiado.

⁴⁵ Sobre este punto también coinciden Nicaragua (art. 265) y Venezuela (art. 1404 Código Civil).

⁴⁶ Lo que implica la posibilidad de que la misma parte pueda solicitar su declaración.

⁴⁷ Frente a la posibilidad de que la parte posea limitaciones físicas de carácter auditivo o de lenguaje, se permite que pueda rendir declaración utilizando para ello la escritura, o en su defecto, intérprete o una persona que pueda entenderle su lenguaje de signos quienes deberán prestar previamente juramento de decir la verdad (art. 180). Lo mismo ocurre en Nicaragua donde se prevé para estos casos la posibilidad de acudir a la escritura, intérprete o algún medio tecnológico que permita tal comunicación (art. 259.4).

⁴⁸ Sobre este punto es preciso señalar que conforme a este artículo en su numeral 4 “La o el declarante no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su declaración a menos que se trate de valores o cifras” (Ley 506, 2015), lo que dista de regulaciones como la española en la que según el artículo 305.1 se permite “consultar en el acto documentos y notas o apuntes, cuando a juicio del tribunal sean convenientes para auxiliar a la memoria” (Ley 01, 2000).

Partes: A (demandante), B (demandado).

Primer supuesto: Se solicita la declaración de la contraparte.

- B absuelve la declaración propuesta por A:
 1. Toma de juramento por el juez a B.
 2. Identificación de B (nombres y apellidos, edad, estado civil, dirección domiciliaria, nacionalidad, profesión u ocupación).
 3. Apoderado de A interroga a B.
 4. Apoderado B contrainterroga a B.

Segundo supuesto: La parte solicita su propia declaración.

- A solicita su propia declaración:
 1. Toma de juramento por el juez a A.
 2. Identificación de A.
 3. Apoderado de A interroga a A.
 4. B contrainterroga al A.

Cuadro 3. Práctica de la prueba testimonial según el Código Orgánico General de Procesos.

En el desarrollo de la práctica de esta prueba se presentan algunas particularidades dentro de las que se encuentran la posibilidad de negarse a responder bajo los supuestos expresamente contemplados en el artículo 175⁴⁹, el deber de estar asistido por defensor so pena de nulidad

⁴⁹ “Artículo 175. (...) La o el declarante podrá negarse a responder cualquier pregunta que: 1. Pueda acarrearle responsabilidad penal personal, a su cónyuge o conviviente en unión de hecho o a sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto las que se refieran a cuestiones de estado

(artículo 177) y la posibilidad de formular preguntas sugestivas en temas introductorios, para recapitular información previamente aportada, en el contrainterrogatorio o en los casos en que se haya declarado al testigo como hostil (artículo 177.7). Además, si el declarante no asiste a la audiencia la contraparte tiene la posibilidad de solicitar de forma razonada al juez la suspensión de la misma dada la importancia de tal declaración conforme lo dispone el artículo 177.2.

4.4. Valoración

La valoración de la declaración de parte es un punto de gran complejidad, siendo posible observar en los códigos iberoamericanos tres corrientes que determinan la valoración que el juez debe otorgarle a la declaración rendida por las partes en el proceso.

Por un lado aquellos códigos que conservan la confesión como medio de prueba y que sólo otorgan valor probatorio a los dichos de las partes que generen efectos adversos a estas o favorables a la contraparte, tal es el caso de Chile con su Código de Procedimiento Civil en el que la fuerza probatoria de la confesión judicial remite a lo dispuesto en el artículo 1713 del Código Civil donde se advierte que ésta constituye plena fe contra la parte confesa (salvo excepciones que la ley expresamente exceptúa⁵⁰ o que se pruebe que la misma ha sido resultado de error) y respecto de la cual como se estipula en el artículo 402 del Código de Procedimiento “No se recibirá prueba alguna contra los hechos personales claramente confesados por los litigantes en el juicio” (Ley 1556, 1902), afirmación de la que puede concluir que con la confesión realizada por la parte se está frente a una presunción de derecho. Por su parte la confesión extrajudicial tal como se establece en el artículo 398 “es sólo base de presunción judicial, y no se tomará en cuenta, si es puramente verbal, sino en los casos en que sería admisible la prueba de testigos” (Ley 1556, 1902).

En el mismo sentido se encuentra el Código de Procedimiento Civil de Venezuela que también remite al Código Civil en el que como lo expresa el profesor Rodrigo Rivera Morales se

civil o de familia. 2. Viole su deber de guardar reserva o secreto por razón de su estado u oficio, empleo, profesión, arte o por disposición expresa de la ley.” (Ley 506, 2015).

⁵⁰ Tal es el caso previsto en el artículo 1701 del Código Civil de Chile también conocido como el Código de Bello, según el cual “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad (...)” (Congreso Nacional, 1855).

define con claridad su fuerza o eficacia probatoria advirtiéndole que la confesión judicial aun cuando el juez sea incompetente, producirá plena prueba sobre el hecho confesado; ahora, tratándose de confesión extrajudicial pueden existir dos variables, la primera es respecto de la confesión realizada ante la parte contraria o su representante que tendrá la misma eficacia probatoria de la judicial siempre y cuando se cumplan los requisitos de existencia, validez y eficacia, y si se realiza tal confesión ante un tercero tiene entonces valor de indicio (Morales, 2002, pág. 293).

El Código Procesal Civil de Bolivia como se advirtió previamente, pese a ser promulgado recientemente, no siguió la corriente iberoamericana para el medio de prueba que ocupa el presente estudio consagrando como medio probatorio la confesión, a la cual se le da valor de plena prueba “salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la Ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles” (artículo 162). Posición que comparte Gerardo Parajales al considerar que “la ley impone este tipo de valoración tasada a la prueba documental y confesional. La eficacia probatoria de la confesión de hechos desfavorables se basa precisamente en la máxima de experiencia que demuestra que nadie confiesa en contra de uno mismo si los hechos son falsos, pues si es normal mentir para obtener un beneficio, no cabe dentro de un juicio medianamente lógico mentir para obtener un perjuicio; por la misma razón, desde el punto de vista probatorio, no son atendibles las declaraciones favorables de uno mismo” (Parajales, 1997, pág. 213).

Se resalta de igual forma sobre este punto lo previsto en el código procesal civil mexicano en su artículo 96, donde pese a que el medio de prueba consagrado es la confesión y por lo tanto de lo dicho por la parte sólo produce efecto aquello en lo que la perjudica, se prevé en caso de que ésta sea la única prueba contra el absolvente, que debe tomarse íntegramente lo manifestado por la parte, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique (Código Federal de Procedimientos Civiles, 1943), lo que implica que en el supuesto de ser la única prueba obrante en el proceso para una de las partes, se enmarcaría entonces también en la segunda corriente desarrollada en el presente escrito como se podrá ver más adelante.

De esta corriente puede considerarse se desprende otra en la que si bien se consagra como medio de prueba la declaración de parte, lo cierto es que sólo se le otorga valor probatorio a los dichos de las partes que generen efectos adversos a estas o favorables a la contraparte, en esta se

circunscriben el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (CPCMI) y el Código General del Proceso (CGP) de Uruguay que siguen la misma línea ideológica y donde la confesión que logre obtenerse del interrogatorio de parte o la absolución de posiciones tendrá valor de plena prueba contra la parte que la realiza, salvo los casos en que constare haber sido determinada por error, violencia o dolo (artículo 143 CPCMI y artículo 153 CGP de Uruguay).

La segunda corriente se encuentra presente en países como España, Honduras, Nicaragua y México (tratándose del supuesto en el cual obre como única prueba contra el absolvente, como pudo verse), donde se le otorga valor probatorio independiente a los dichos de las partes que generan confesión y a los que constituyen declaración. De esta forma la LEC española indica en su artículo 316 que en la sentencia serán considerados como ciertos los hechos que la parte haya reconocido como tales si en ellos intervino personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial (confesión), y en todo lo demás, los tribunales valorarán las declaraciones según las reglas de la sana crítica⁵¹, este criterio es tomado en su literalidad por los códigos procesales de Nicaragua⁵² y Honduras⁵³.

Por último se encuentra una corriente novedosa en el contexto iberoamericano pues se origina desde el año 2015 con el Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano, en el que se

⁵¹ Al respecto el autor Xavier Abel Lluch indica que aun cuando prima facie pudiera parecer que la libre valoración sería residual, puede acabar produciéndose el efecto contrario, pues para que sea prueba tasada deben concurrir los requisitos del art. 316.1 (la intervención personal del declarante y que su declaración le sea enteramente perjudicial). Será por ende de libre valoración el reconocimiento sobre hechos no personales, hechos favorables al declarante y el reconocimiento que ha sido contradicho por el resultado de las demás pruebas. (Lluch, 2012, págs. 568-569).

⁵² “Artículo 266. Valoración. Si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en las sentencias se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales, si en ellos intervino personalmente y dicha certeza le es enteramente perjudicial. La autoridad judicial valorará las declaraciones de las partes y de las terceras personas vinculadas a ellas, de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico.” (Ley 902, 2015)

⁵³ “Art. 268, valoración. 1. El juzgado o tribunal considerará en la sentencia como ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si ha intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le es parcial o enteramente perjudicial, salvo que sean contradichos por el resultado de las demás pruebas practicadas, sin que pueda dividirse la declaración en contra del declarante. 2. En todo lo demás, el juez o tribunal valorará las declaraciones de las partes y de las terceras personas asimiladas a ellas de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, sin perjuicio de las consecuencias probatorias previstas para los casos de admisión ficta de los hechos.” (Decreto No. 211, 2007).

valora la declaración de las partes de acuerdo al contexto de toda la declaración y su relación con las otras pruebas (artículo 186) de acuerdo con las reglas de la sana crítica (artículo 164).

Pese a existir variedad de criterios para valorar los dichos de las partes en los diferentes códigos iberoamericanos estudiados, en relación con las consecuencias que acarrearán las respuestas evasivas o incongruentes, la negativa a declarar y el no comparecer a absolver la declaración, existe uniformidad en casi todos los sistemas procesales, pues, con excepción del código ecuatoriano en el que “las respuestas evasivas o incongruentes así como la negativa a declarar y toda la prueba debidamente actuada será valorada íntegramente por la o el juzgador conforme con las reglas de la sana crítica, siempre que la ley no requiera que se prueben de otra forma” (artículo 177.6), los demás países prevén consecuencias desfavorables para la parte que incurra en las mencionadas circunstancias, desde la presunción simple sobre los hechos de la demanda y su contestación o sobre los hechos objeto de la absolución de posiciones⁵⁴ hasta declarar la confesión tácita o presunta⁵⁵.

⁵⁴ Al respecto puede verse lo dispuesto en el Código General del Proceso de Uruguay (arts. 149.4 y 150.2) frente a lo cual se ha entendido que en estos casos resulta claro que se está estableciendo una presunción simple en contra del interesado principal, y que debe tenerse presente “que en el caso del interrogatorio libre estas conductas hacen nacer una presunción simple respecto a (todos) los hechos alegados en demanda y contestación y, en cambio, cuando se trata de estas mismas conductas en caso de absolución de posiciones la presunción simple no comprenderá todos los hechos alegados en la demanda y contestación, sino solamente los concretamente alegados en las posiciones que representará la contraparte (que naturalmente suelen ser los principales hechos alegados en la demanda y contestación, pero no necesariamente todos ellos)” (Abal Oliú, 2014, págs. 43-44 y 48).

⁵⁵ Los códigos que adoptan esta posición son: Código de Procedimiento Civil de Chile (art.394), Código Procesal Civil Modelos para Iberoamérica (art. 139), Código Procesal Civil de Bolivia (art. 165), Código de Procedimiento Civil de Venezuela (art. 412), Código Federal de Procedimientos Civiles de México (arts. 104, 111 y 124).

Relaciones entre el medio de prueba de la declaración de parte y la confesión		
Código – país	Relación de subordinación: la declaración de parte es un instrumento para alcanzar la confesión – o el medio de prueba que se contempla es sólo la confesión.	Relación autonómica: son medios de prueba independientes por lo que ambos tienen valor probatorio diferenciado.
Código de Procedimiento Civil (Ley 1556, 1902) – Chile	X	
Código Federal de Procedimientos Civiles (1943) – México	X	
Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (1988) – Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal	X	
Código General del Proceso (Ley 15982, 1988) – Uruguay	X	
Código de Procedimiento Civil (Ley 4196, 1990) – Venezuela	X	

Código Procesal Civil (Decreto Legislativo No. 768, 1992) - Perú		X
Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 01, 2000) – España		X
Código Procesal Civil (Decreto No. 211, 2007) – Honduras		X
Código Procesal Civil (Ley 439, 2013) – Bolivia	X	
Código Orgánico General de Procesos (Ley 506, 2015) – Ecuador		X
Código Procesal Civil (Ley 902, 2015) – Nicaragua		X

Cuadro 4. Relaciones de subordinación o autonomía entre el medio de prueba de la declaración de parte y la confesión en los códigos procesales civiles de Iberoamérica.

Valor probatorio de los dichos de las partes		
Código – país	Valor probatorio de la confesión.	Valor probatorio de los dichos de la parte no constitutivos de confesión.
Código de Procedimiento Civil (Ley 1556, 1902) - Chile	<p>La confesión judicial (tácita o expresa) constituye plena fe contra el absolvente (artículo 368 C.P.C. y 1713 C. Civil). Además de que se establece una presunción de derecho al impedir prueba en contrario (artículo 402).</p> <p>La confesión judicial y trasladada constituyen base de presunción judicial (artículo 368).</p>	
Código Federal de Procedimientos Civiles (1943) – México	<p>La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace; pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique. (Artículo 96).</p> <p>Se tendrá por confeso al articulante, y sólo en lo que le perjudique respecto a los hechos propios que consten en las posiciones que formule, y contra ellos no se le admitirá prueba de ninguna clase. (Artículo 126).</p>	.

<p>Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (1988) – Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal</p>	<p>Según lo dispone el artículo 143, la confesión judicial hace prueba contra la parte que la realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles. Y cesa de hacer fe cuando constare haber sido determinada por error, violencia o dolo.</p> <p>La confesión ficta a que refieren los artículos 139.4 y 140.2 hará también prueba, salvo en lo que resultare contradicha por las demás pruebas producidas u otras circunstancias de la causa.</p>	
<p>Código General del Proceso (Ley 15982, 1988) – Uruguay</p>	<p>Hacen prueba contra la parte que la realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles. Cesa de hacer fe cuando constare haber sido determinada por error, violencia o dolo. La confesión ficta hace prueba, salvo en lo que resultare contradicha por las demás pruebas producidas u otras circunstancias</p>	

	de la causa (artículo 153 numerales 2 y 3).	
Código de Procedimiento Civil (Ley 4196, 1990) – Venezuela	Constituye plena prueba acerca del hecho confesado (artículo 1402 y 1042 C.C.).	
Código Procesal Civil (Decreto Legislativo No. 768, 1992) - Perú		A falta de regulación especial sobre este medio de prueba, se acude a la disposición general de valoración probatoria según la cual todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. (Artículo 197).
Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 01, 2000) – España	Se consideran como ciertos los hechos objeto de confesión si no lo contradice el resultado de las demás pruebas (artículo 316.1).	Según las reglas de la sana crítica (artículo 316.2).
Código Procesal Civil (Decreto No. 211, 2007) – Honduras	Se consideran como ciertos los hechos objeto de confesión si no lo contradice el resultado de las demás pruebas y sin posibilidad de dividir la confesión (artículo 268).	De acuerdo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico (artículo 268.2).

Código Procesal Civil (Ley 439, 2013) – Bolivia	<p>La confesión judicial hace plena prueba contra la parte que la realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la Ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles.</p> <p>También se exceptúan las siguientes situaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estuviere excluida por la Ley respecto a los hechos que constituyen el objeto del proceso, o afectare derechos que el confesante no pudiese renunciar o transigir válidamente. 2. Recayere sobre hechos cuya investigación o información esté prohibida por Ley. 3. Fuere opuesta a documentos fehacientes de data anterior, ya agregados al expediente. (Artículo 162). 	
Código Orgánico General de Procesos (Ley 506, 2015) – Ecuador		El juzgador considerará el contexto de toda la declaración y su relación con las otras pruebas (artículo 186) conforme las reglas de la sana crítica (artículo 177).
Código Procesal Civil (Ley 902,	Si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en las sentencias	La autoridad judicial valorará las declaraciones de las partes y de las

2015) – Nicaragua	se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales, si en ellos intervino personalmente y dicha certeza le es enteramente perjudicial (artículo 266).	terceras personas vinculadas a ellas, de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico (artículo 266).
----------------------	--	---

Cuadro 5. Valor probatorio de los dichos de las partes en los códigos procesales civiles de Iberoamérica.

5. CONCLUSIONES

En el derecho procesal colombiano tradicionalmente se había tomado como único medio de prueba de los dichos de las partes, a la confesión, pero a partir del 2012 con el Código General del Proceso se consagra a la confesión y la declaración de parte como medios de prueba autónomos e independientes. En el CGP se han definido reglas de producción probatoria para la confesión que, entre otras, son que: i) la solicitud de este medio de prueba lo realiza la parte contraria al absolvente, ii) se realiza por medio de interrogatorio de parte que actúa como el instrumento por medio del cual se llega a la confesión, iii) tal interrogatorio puede constar máximo de veinte (20) preguntas. Circunstancia que no ocurrió con la declaración de parte, dando lugar a una serie de anomalías que se traducen en problemas jurídicos que deben ser resueltos para la adecuada aplicación de este medio de prueba en la administración de justicia.

1. El paradigma racional del derecho probatorio y la consecuente función-fin epistémica del proceso judicial tiene varias implicaciones para la presente investigación. Si se parte de la base que la producción del conocimiento al interior del proceso debe seguir las reglas de la epistemología moderna, las partes y el juez puedan aportar cualquier medio de medio de prueba para demostrar los hechos, siendo el criterio principal para evaluar su admisibilidad la relevancia: a mayor prueba relevante mayor será la calidad del conocimiento. Bajo este paradigma, no tiene cabida tarifas legales establecidas previamente por el Legislador, ni en su faceta positiva ni en su faceta negativa.

La fundamentación de la negativa a otorgarle valor probatorio a los dichos de las partes que no alcanzaran a ser confesión, regla que contemplaba el Código Procesal Civil, era una tarifa legal negativa: nadie puede ser prueba de su propio dicho, pues nadie tiene más interés en la causa que la parte. Aunque hay mucho de cierto es esta última frase, que técnicamente constituye una regla de la experiencia, bajo el paradigma racional no es correcto descartar *per se* los datos de prueba relevantes que pueda aportar las declaraciones de las partes.

La concepción hoy adoptada se fundamenta bajo el principio denominado “principio de relevancia” el cual establece que toda prueba (jurídica o no) que tenga gran relevancia y aporte

información necesaria para resolver el problema de investigación o jurídico en los procesos judiciales, debe ser tenido en cuenta. Por lo tanto, conforme a este paradigma mayoritariamente adoptado por la legislación vigente, la prueba consistente en los dichos de las partes sobre los hechos objeto de controversia son completa e indiscutiblemente relevantes por ser la parte quien mayor conocimiento tiene de los hechos y en consecuencia se convierte en casi una obligación (por consecuencia lógica) de que esa información sea utilizada para efecto de la demostración de los hechos.

2. En las fuentes del derecho aplicables en Colombia, se identifica en un primer momento, que desde la ley como fuente del derecho, existe una serie de anomalías en la regulación de la producción probatoria de la declaración de parte, las cuales, desde una interpretación sistemática de la misma norma, encuentran un criterio de solución a partir del postulado contemplado en el artículo 165 del Código General del Proceso, según el cual, el juez practicará las pruebas no previstas en dicha norma procesal de acuerdo con las disposiciones que regulan medios semejantes, y en ese sentido, no por no estar regulado el medio de prueba sino por no estar reguladas de forma detallada las reglas que permitan producir en el proceso los dichos de las partes, las reglas para este medio de prueba serían las que se prevén para la declaración de terceros por ser el medio de prueba que resulta similar.

No obstante, encontrarse una opción de respuesta en la misma norma procesal, ésta no resulta suficiente (por su ambigüedad) para dar solución a todos los problemas jurídicos que se plantearon con ocasión de las anomalías identificadas en la producción probatoria del medio de prueba objeto de la presente investigación, por lo que se estudia la jurisprudencia como fuente que hoy por hoy es llamada cada vez con mayor relevancia a solucionar los vacíos que se presentan en la ley. Sin embargo, no se encontró en ella pronunciamientos de las altas cortes que fijen criterios, reglas jurídicas que permitan ser aplicados por los operadores jurídicos en el país, tan sólo se identificó una providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. en el año 2017 que además de ser un pronunciamiento aislado, sólo se refiere a uno de los problemas jurídicos planteados como lo es la posibilidad de que se produzca en el proceso la declaración de la propia parte. Razón por la que –entendiendo la jurisprudencia en un sentido amplio- se acude a las posiciones adoptadas por los jueces y magistrados de la ciudad de Cúcuta que fueron

entrevistados en el desarrollo de la investigación, y que permiten identificar la existencia de diversos criterios que difieren notablemente entre sí, desde los que consideran que se trata de un medio de prueba autónomo, hasta los que asumen que no es posible valorar el dicho de la parte que no le sea desfavorable por tener este interés en el resultado del proceso.

Finalmente, desde la tercera fuente del derecho estudiada -la doctrina-, se identificaron al menos tres grandes grupos de posturas asumidas por reconocidos doctrinantes del país que se han pronunciado en torno a los vacíos que el Código General del Proceso ha dejado en su texto respecto de la declaración de la parte, una desde la que se considera a la parte como testigo y por lo tanto resultan aplicables las reglas descritas para la declaración de terceros, la segunda que afirma que la novedad del CGP radica en la valoración que se hace de aquellas manifestaciones de la parte que no constituyan prueba de confesión, y la última, que defiende la inexistencia de novedad alguna en el estatuto procesal general y, que por lo tanto, no es posible que la parte pueda hacer prueba con su propio dicho.

Lo anterior, lleva a concluir que a partir de los postulados jurídicos que las fuentes del derecho en Colombia ofrecen para la solución de los problemas formulados respecto de la producción probatoria de la declaración de parte consagrada en el Código General del Proceso, tal medio de prueba se ve afectado por la inseguridad jurídica que genera la indefinición de reglas claras que permitan su aplicación como fuente de conocimiento, con lo cual, en palabras de Cappelletti, se pueda “utilizar adecuadamente el saber de las partes en la formación del convencimiento del juez” (Cappelletti, 2002, pág. 3).

En otras palabras, ni desde la ley, ni la jurisprudencia aún en un sentido muy amplio, ni desde la doctrina, existe claridad respecto del medio de prueba de la declaración de parte y sus reglas de producción, lo que se traduce en inseguridad jurídica para quienes acuden a la administración de justicia.

3. El derecho comparado como herramienta de gran utilidad para conocer el derecho nacional al contrastarlo con otros ordenamientos jurídicos, que para el caso corresponden a los estatutos de procedimiento civil en los países de Iberoamérica, ha permitido establecer que en

relación con los dichos de la parte en el proceso, existe una tendencia de otorgar valor probatorio a la declaración de la parte de acuerdo con las reglas de la sana crítica (aunque no son pocas las legislaciones en las que aún se conserva la vieja postura de considerar como único medio de prueba a la confesión), pero sin dejar de lado la confesión como medio de prueba respecto de aquellas afirmaciones que son adversas a la parte que absuelve tal declaración; dicha tendencia puede entenderse ha sido asumida por el Código General del Proceso al regular los medios de prueba de confesión y declaración de parte, dejando atrás la concepción medieval de que el dicho de la parte que no sea adverso a ésta no tiene valor probatorio alguno. Los países que se acogen a esta tendencia: España, Honduras, Nicaragua y México (en caso de que sea la única prueba que se aduzca contra el absolvente), hacen uso, en su mayoría, de la técnica del interrogatorio cruzado, entendiendo que este sirve para decantar la información que la parte lleva al proceso.

No obstante, pese a que el avance que se ha logrado en las regulaciones anteriormente señaladas, es notable, debido a un cambio en la concepción del medio de prueba en comento, comprendiendo ahora que la parte puede aportar conocimiento útil para el proceso y la decisión que en este será adoptada; existe una regulación que en el derecho procesal iberoamericano constituye una verdadera transformación en la forma como se ha entendido el dicho de la parte en el proceso, se trata del Código Orgánico General de Procesos de Ecuador, expedido en el año 2015 y en el que se considera (como lo ha hecho un buen sector de la doctrina nacional e internacional) que la declaración de parte junto a la declaración de terceros son especies del género denominado “prueba testimonial”, razón por la cual las reglas de producción de estos medios de prueba son, salvo ciertas pautas propias de cada uno de ellos, las mismas, de las que se resalta además de la utilización de la técnica del interrogatorio cruzado, la valoración que se realiza sobre lo que la parte relata en su declaración, pues todos los dichos de ésta, incluso aquellos casos en los que las respuestas sean incongruentes o evasivas o se niegue a declarar, deben ser apreciados por el juzgador considerando “el contexto de toda la declaración y su relación con las otras pruebas” (artículo 186), lo que se ajusta más a un sistema de libre valoración probatoria.

4. Así las cosas, dado el contexto que se presenta a partir de la regulación del medio de prueba de la declaración de parte en el Código General del Proceso, en el que se identificaron una serie de vacíos normativos que deben ser resueltos para la correcta aplicación y apreciación del

dicho de la parte en el proceso, y a partir los insumos que se han podido extraer en el desarrollo de la investigación del paradigma racional de la prueba como criterio epistémico que orienta la aplicación del derecho probatorio en la actualidad, de los diferentes postulados que las fuentes del derecho colombiano ofrecen para la solución de los problemas planteados y del significativo aporte que realiza el derecho comparado; se pretenderá a continuación, realizar un análisis de las reglas de producción probatoria de la declaración de parte de cara a los problemas jurídicos que se presentan como consecuencia de las anomías identificadas en su regulación:

De esta forma, en un primer momento se abordará, como se ha señalado a lo largo de la investigación, uno de los problemas que más ha generado controversia en la doctrina nacional, se trata, de la posibilidad o no de que pueda ser solicitada, decretada, practicada y valorada la declaración de la propia parte. Atendiendo a que es un problema jurídico que importa a todas las etapas de producción de la prueba, para una mejor lectura de lo que se concluye tras el análisis realizado, se expondrán las posiciones asumidas al respecto en el momento oportuno para cada una de las fases del *íter* probatorio.

En ese sentido, la solicitud de la declaración de la propia parte, encuentra diversos fundamentos dentro de los que se encuentran, el primero, en un mandato de orden internacional que emana de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), específicamente de su artículo 8.1 en el que se consagra el derecho que tiene toda persona a ser oída como parte de una garantía judicial que debe ser respetada en todo proceso, lo que se traduce en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, entendiendo que el debido proceso es una garantía de carácter amplio dentro de la que se encuentra inmersa el derecho a ser oído como parte del ejercicio del derecho de contradicción y defensa. Se trata pues, de una oportunidad real de que quien acuda a la administración de justicia sea oído por el juzgador, y no como se asevera por cierto sector, que en las causas de naturaleza distinta a la penal, basta con las manifestaciones que se hacen en los escritos de demanda y contestación (entiéndase que con ello se incluye la reforma de la demanda y su contestación), pues esto, siguiendo lo señalado por el profesor Marco Antonio Álvarez (Álvarez Gómez, 2017, págs. 14-15), se trata de una versión indirecta y preparada de los hechos, en tales escritos no solo (usualmente) no es la parte quien realiza la descripción de los hechos que son materia de controversia en el proceso, sino que se trata de una versión ajustada a la técnica

jurídica que no siempre refleja con claridad el marco fáctico real desde el cual se generó la disputa entre las partes⁵⁶.

Aunado a lo anterior –como tercer argumento–, se tiene que es erróneo entender que de la demanda y su contestación, sea posible por el juez extraer elementos de conocimiento que soporten la premisa fáctica, porque esto desde el derecho probatorio sólo es admisible a través de un medio de prueba y tales escritos no lo son; y porque es precisamente en dichos escritos, donde se está planteando hasta el momento, la premisa fáctica que deberá ser acreditada o controvertida a través de los medios de prueba que se produzcan en el proceso. De acuerdo con ello, no es dable considerar que en el proceso contemporáneo basta para oír a las partes, con las manifestaciones que se hagan en esos escritos, más aun cuando es la probática y no el derecho probatorio, la técnica destinada a explorar el trance del hecho desde su nacimiento hasta su representación y construcción en la demanda y contestación, y que podría definirse como la disciplina que trata de los hechos del proceso (Muñoz Sabaté, 2012, págs. 18-19).

De igual forma, es necesario acudir a la importancia y necesidad específica que existe en diferentes procedimientos de que la parte rinda su declaración sobre los hechos, como ocurre en materia penal con el procesado y frente a lo cual no existe hoy discusión alguna. Hay procedimientos en los cuales se evidencia con gran claridad el importante papel que desempeñaría la declaración de las partes, así, en casos como los de simulación de un negocio jurídico o en los que se discute la existencia de un contrato realidad (bien sea de un trabajador del sector privado o del sector público), sólo por citar algunos ejemplos, en los que por regla general las pruebas son escasas y el juez tiene que decidir en muchos casos a partir de la carga de la prueba como regla de juicio para dar solución a la controversia, convendría mucho para la toma de la decisión, escuchar a las partes, que hablen por ejemplo acerca de cómo celebraron esos contratos que se dicen simulados, de cuál era su horario de trabajo, que funciones cumplía dentro de la empresa; y que con ello contribuyan realmente a la solución de la controversia.

⁵⁶ En el mismo sentido se manifiesta Jordi Nieva Fenoll, pues para él, “quien habla en dichos escritos dispositivos no es el litigante, sino su abogado, que evidentemente utilizará toda su técnica de argumentación para conseguir presentar una versión de los hechos más favorable a su cliente. Pues bien, la declaración del litigante es esencial para comprobar dicha versión y contrastarla con los alegatos que realice su abogado.” (Nieva Fenoll, 2010, pág. 237).

Así mismo, el CGP no señala la prohibición de que la parte pueda declarar voluntariamente, como sí lo hacía expresamente el derogado Código de Procedimiento Civil, en donde solo existía la oportunidad de solicitar la declaración forzada de la contraparte⁵⁷, con lo que se está frente a la eliminación de una inhabilidad impuesta a la parte en el proceso regulado por la Ley 1564 de 2012.

Finalmente, es necesario aludir a los cambios que implica el proceso oral y por audiencias que se ha acogido en el Código General del Proceso (artículo 3° CGP), lo que conlleva necesariamente a desdibujar de la práctica, judicial especialmente, la idea de un juzgador aislado de las partes, un juez que en el sistema escrito que imperaba hace algunos años, no tenía contacto alguno con quienes acudían a la administración de justicia. Ese panorama, ha debido dar un enorme giro con la entrada de la oralidad en el proceso, que trae como consecuencia el deber de acoger por parte de quien administre justicia, al principio de inmediación (artículo 6° CGP), que supone ahora, el contacto directo del juez con las pruebas y con las partes, lo que no da lugar a que en un sistema de libre valoración probatoria, no sea posible que la parte pueda solicitar dar su versión de los hechos libremente y que ésta sea apreciada por el juez, pues con gran acierto lo señaló Cappelletti “la parte es el sujeto mejor informado del caso en concreto que en el proceso se debe examinar. De ahí la inderogable necesidad que en todos los ordenamientos civiles existe, de utilizar a la parte como fuente de prueba” (Cappelletti, 2002).

No es consecuente entonces, que en el actual sistema probatorio de libre valoración y en un proceso que se adelanta a través de audiencias y por lo tanto, tiene el juez la posibilidad de enterarse del asunto de forma más directa a través de la oralidad, no se le dé cabida a que la parte pueda rendir su testimonio de los hechos en juicio, porque bien lo expone el profesor Jordi Nieva Fenoll en relación con la desconfianza que pueda generar la declaración de un litigante dentro del proceso, y es que por mucho que éste tenga un interés evidente en el objeto del juicio, la declaración que rinde será útil probatoriamente por el simple hecho de que puede ser quien mejor

⁵⁷ Artículo 203. Interrogatorio a instancia de parte. Dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia, cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. En la segunda instancia el interrogatorio sólo podrá pedirse en los casos señalados en el artículo 361.

conozca los hechos, o al menos su coartada, por lo que a lo mejor es quien acaba ofreciendo incluso mejor información (Nieva Fenoll, 2010, pág. 237).

Por su parte, en el decreto de las pruebas, desde la regulación prevista en el Código General del Proceso para el medio probatorio que ocupa este escrito, se presentan dos grandes interrogantes, el primero (como se advirtió) relacionado con la declaración de la propia parte y el segundo que tiene que ver con lo que se ha denominado en la investigación como “el momento procesal del decreto”, es decir, se debe definir en qué momento del proceso (tomando como modelo el proceso verbal regulado por el CGP) el juez debe decidir acerca del decreto de la confesión y la declaración de parte, sobre lo que como se verá más adelante, se entiende que se trata de dos medios de prueba diferentes y así mismo son sus instrumentos de práctica.

Se tiene entonces que el artículo 372 del Código General del Proceso regula la audiencia inicial y en ella sitúa la oportunidad procesal del decreto de pruebas (numeral 10), escenario idóneo para que el juez decida a cerca de la admisibilidad o no de los medios de prueba. No obstante, luego de analizadas las posiciones doctrinales sobre la materia, se encuentra una cierta inclinación⁵⁸ por determinar que el interrogatorio de parte (como instrumento a través del cual se surte la confesión) y la declaración de parte deben ser practicadas en la audiencia inicial durante el momento que se ha designado por el mismo artículo 372 en su numeral 7° para el interrogatorio exhaustivo que debe realizar el juez a las partes, lo que en principio parece acertado y al menos desde la configuración actual del Código General del Proceso es probablemente lo que se aplique

⁵⁸ Como ocurre con Octavio Tejeiro para quien “La práctica de esa prueba comienza con las interrogaciones del juez, exhaustivas, según ya se dejó dicho, una vez que se ha recibido al declarante el juramento de no faltar a la verdad, continua con las que ha de realizar la parte contraria, bajo las formalidades establecidas en los artículos 202 y 203, según los cuales no serán más de 20 preguntas, pese a que el juez sí puede adicionar las que estime convenientes y a que lo puede hacer en el orden que le parezca mejor, interrumpiendo si es del caso, al que inquiriere, así como al inquirido, siempre con la mira puesta en la verificación de los hechos materia del proceso y en la más justa resolución del conflicto” (Tejeiro Duque, 2015, pág. 564). También, en cierta medida puede considerarse que esa tesis es expuesta por Adriana López Blanco quien afirma que “Frente a la oportunidad en la cual se llevaría a cabo la declaración de parte voluntaria, esta debería practicarse dentro de la audiencia inicial, pues dispone el art. 372 que los interrogatorios de las partes se practicarán en la audiencia inicial (...). Sea que nos encontremos frente a la declaración voluntaria, la forzada, o ambas, la prueba deberá practicarse en la misma diligencia aplicando las reglas establecidas para la confesión y las que analógicamente sean las más apropiadas a la declaración de parte.” (López Martínez, 2016, págs. 485-486), no obstante, en su caso parece existir una distinción entre los dichos de la parte, forzados o voluntarios, último de los cuales entonces podría entenderse se practica en audiencia inicial pero, en virtud de la facultad que el CGP le otorga al juez de practicar las pruebas en esa audiencia.

por los operadores jurídicos, otorgándole en dicho interrogatorio el derecho de contradicción a la parte contraria y con ello considerando se entiende surtido el medio de prueba, especialmente tratándose de la confesión.

Sin embargo, si desde una visión estricta del derecho probatorio y específicamente del íter de la prueba se aborda este tema, el anterior panorama debe replantearse, y para ello en primer lugar debe tenerse en cuenta la distinción que de los instrumentos de práctica de los medios de prueba de la declaración de parte y confesión se hace por los investigadores; así, son tres los tipos de interrogatorio que se desprenden de los regulado en el CGP, el interrogatorio de parte (cuando se solicite por la parte interrogatorio para obtener confesión de su contraria, bien sea procesal o extraprocesalmente), interrogatorio de oficio (artículos 169 y 170 CGP) e interrogatorio legal (el dispuesto en el artículo 372.7 CGP)⁵⁹. Y la declaración de parte se practica conforme a las reglas definidas para el testimonio de terceros.

Dado lo anterior, tanto el interrogatorio de parte como la declaración de parte deberían ser decretadas por el juez en el que se ha dicho es el momento procesal oportuno –la etapa del decreto de pruebas-, que se llevará a cabo en la audiencia inicial después de la fijación del litigio, en el entendido de que el interrogatorio exhaustivo que el código ordena realizar al juez, es un interrogatorio de tipo legal que no debería considerarse como un medio de prueba o como un instrumento de práctica de prueba sino que su finalidad, es precisamente, la de generar hechos admitidos o no controvertidos que faciliten la fijación del litigio.

Así, sólo una vez se hayan definido los hechos que se encuentran en controversia, es donde el juez puede determinar a través del juicio de admisibilidad, cuáles medios de prueba de los solicitados por las partes, deben ser decretados, y es allí donde el juez deberá examinar la pertinencia de ordenar la práctica de la declaración de parte y de la confesión, pues sólo en caso de que estos resulten relevantes para la demostración de los hechos controvertidos, podrán ser admitidos por el juez.

⁵⁹ Al respecto, se realizó un análisis de forma más detallada en el acápite de propuesta de la investigación que puede consultarse en la página 172 y siguientes.

En consecuencia, valga aclarar, dada la confusión que para el lector puede generar –y con razón–, la determinación de un momento procesal para la práctica de estos medios de prueba si son decretados por el juez en el momento previsto en el artículo 372.10, y con ello se abre paso a la siguiente etapa del *iter* probatorio (la etapa de práctica), con lo que, teniendo en cuenta que no se practicarían estos medios de conocimiento en el momento del interrogatorio legal o exhaustivo por el juez, es posible entonces que se practiquen en audiencia inicial (en atención a la facultad preceptuada en el mismo artículo 372.7 inciso 3°) o en la de instrucción y juzgamiento, lo que dependerá de las circunstancias propias de cada caso en concreto, donde de ser posible, en aras obtener mayor economía procesal, agotando la mayor cantidad de actos procesales en una misma audiencia y por ser en la cual por regla general están presentes las partes, se practicarán en la audiencia inicial, pero luego de fijado el litigio.

En todo caso, respecto de la declaración de parte, a partir de la distinción de sus instrumentos de práctica, como se llevaría a cabo a través de un instrumentos distinto a los interrogatorios señalados de forma precedente, aun cuando se considerara que el interrogatorio legal si es un escenario de práctica probatoria, ésta no podría surtir en ese momento, debiéndose decretar en la etapa que se denominó como oportuna.

Ahora, definidas las etapas procesales en las que de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso, se practicarán la confesión o la declaración de parte, deben resolverse dos nuevos interrogantes: el primero en relación con las reglas de práctica que deben ser utilizadas para rendir la declaración de la propia parte y el segundo sobre las reglas de práctica que se propone sean seguidas dependiendo de las diversas solicitudes probatorias que realicen las partes o cuando el juez así lo decreta de oficio.

Para resolver el primero de los anteriores cuestionamientos, deberá acudirse en principio a lo que la doctrina nacional e internacional ha propuesto al respecto y a las codificaciones que en el derecho comparado puedan contribuir al esclarecimiento de este tema. A partir de ello, se puede identificar una postura en la doctrina nacional que encuentra sustento en los autores internacionales

frente a considerar a la parte como un testigo⁶⁰, en el entendido de que es testigo toda persona que haya presenciado los hechos que se debaten en el proceso, sin miramiento a si es un tercero ajeno al conflicto o hace parte de este. Esto también encuentra acogida en el derecho procesal comparado, pues en el sistema del *Common Law*, puntualmente en Inglaterra desde el siglo XIX con las *Lord Brougham's Act* y en Estados Unidos desde el *Field Code* en 1849 se empezó a pensar en las partes como testigos en las causas civiles hasta llegar a la actual regla de que «toda persona es competente para ser testigo» incluyendo por supuesto a la parte, por lo que las reglas de práctica son en todo caso las mismas (Taruffo, La prueba, 2008, pág. 67).

La anterior referencia al derecho comparado puede generar, a primera vista, una oposición en relación con el sistema de derecho al que se alude y el sistema al que se inscribe el derecho colombiano (con todo y los diversos cambios que acercan en ciertas materias al derecho nacional al del *Common Law*), sin embargo, incluso en el mismo sistema del *Civil Law* se aprecian ejemplos en los que (con las diferentes formalidades en su reglamentación), en esencia, las partes son interrogadas de la misma forma en que se interroga a los testigos (terceros) (Taruffo, La prueba, 2008, págs. 68-69). Lo que se identifica también, en el derecho procesal iberoamericano, donde existe ya una inclinación de países como España, Honduras y Nicaragua, en dirección a practicar a través del interrogatorio cruzado, utilizado en los sistemas de *Common Law*, la declaración que las partes rinden en el proceso; idea que propone con más fuerza el Código Orgánico de Procesos de Ecuador, donde expresamente se considera a la declaración de la parte como un especie del género que es la prueba testimonial.

De acuerdo con lo expuesto y armonizando ello con lo previsto en el Código General del Proceso, para determinar si es posible o no solicitar y con ello decretar, practicar y valorar la declaración de la misma parte, debe partirse del hecho de que el CGP guardó silencio al respecto, por lo que el debate está abierto; así, acudiendo a los principios del derecho probatorio como lo son el de contradicción, economía procesal, lealtad procesal, buena fe, entre otros, y teniendo en

⁶⁰ Aquí se sitúan concretamente autores como Adriana López Martínez (López Martínez, 2016), Marco Antonio Álvarez (Álvarez Gómez, 2017), Marín Verdugo (Verdugo Marín, 2010) y Michele Taruffo (Taruffo, La prueba, 2008). Y como una referencia doctrinal más remota la propuesta en su momento por el maestro Devis Echandía, quien señaló que “no vacilamos en incluir la declaración de parte en el grupo, más general, del testimonio como fuente de prueba” (Devis Echandía, 2012, pág. 539)

cuenta que se adoptó un sistema de valoración bajo las reglas de la sana crítica y la libre apreciación de las pruebas, se deriva la posibilidad de que efectivamente sea llevado a cabo este medio de prueba, pues no se encuentra razón válida para que lo que aduce la parte en el proceso no pueda ser apreciado por el juez, porque si bien existe un interés respecto del litigio, la parte resulta una buena fuente que puede proveer de conocimiento al juez sobre los hechos de la controversia ya sean favorables o no a ésta.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo sostenido por el profesor chileno Felipe Marín Verdugo, quien afirma que la limitación que se le ha impuesto a las partes, de contar voluntariamente su historia con valor probatorio, es decir, como medio de prueba, es propia de los sistemas escritos donde rige la valoración legal de la prueba, por lo que en cambio, en los procesos por audiencias, donde rige la valoración judicial y concreta de la prueba, no hay sentido para prohibir que las partes declaren voluntariamente. La limitación de la que se ha hablado, considera el autor, pertenece al pasado, aquel del cual los reformadores no fueron capaces de escapar pero que ahora nos corresponde superar⁶¹ (Marín Verdugo, 2016, págs. 129-130).

En este entendido, se considera por el grupo de investigación que las reglas generales de práctica que deben ser acogidas para la declaración que rinda la propia parte, son las dispuestas para la declaración de terceros en el Código General del Proceso (artículo 221 y concordantes), atendiendo a que la parte es testigo de los hechos que dieron origen a la controversia, es más, se trata del testigo mejor informado de los hechos y porque en virtud del criterio previsto en el artículo 165, se trataría de medios de prueba semejantes que pueden practicarse a través de las mismas reglas.

Sin embargo, pese a que se considere a la parte como integrante de un grupo más general, el de los testigos, no debe perderse de vista que se trata de un testigo con ciertas características que

⁶¹ Además, si entendemos que con el vigente estatuto se ha implementado un sistema de libre valoración de la prueba, un testigo debe ser entendido como toda persona que ha percibido hechos pertinentes por sus sentidos, así lo adoptó el CGP en su artículo 208. Por lo tanto, entender al testigo como “tercero ajeno e imparcial” es propia del sistema de prueba legal que valoraba la prueba a priori y en abstracto, en el cual las inhabilidades constituían un prejuicio sobre la credibilidad de ciertas personas, explicado por la imposibilidad del juez de tener contacto directo con la prueba (Marín Verdugo, 2016).

le otorgan una connotación especial, y es por eso que desde el análisis de la norma procesal, específicamente de aquellos postulados normativos que regulan la declaración de terceros, es necesario precisar cuáles son equiparables y cuáles no, dado que no todas las figuras del testimonio reguladas por el Código General del Proceso, son aplicables a la declaración de parte, a saber:

En relación con el instrumento de práctica a utilizar, es decir, la técnica utilizada para la formulación de las preguntas y el desarrollo de las mismas, el régimen que ha adoptado el CGP para el testimonio de terceros es completamente compatible con la prueba de la declaración de parte, por lo que en el punto del instrumento o la metodología de práctica, estas le resultan aplicables, teniendo en cuenta la naturaleza de estos dos medios de prueba dada la calidad de los declarantes, persiguen el mismo fin: otorgarle conocimiento al juez sobre los hechos que le constan y conoce desde su propia experiencia, en donde se busca un relato espontáneo y libre de los hechos, por lo que se debe dar a través de un interrogatorio abierto y no limitado, tal como se ha establecido en el artículo 221 del CGP.

Debe precisarse que de acuerdo a lo regulado por el CGP sobre las reglas de la declaración de terceros, el método utilizado –aunque así no se señala expresamente en el código– es el denominado en el derecho anglosajón como “*cross examination*”, que consiste en una metodología de interrogatorio directo (realizado por el abogado de la parte que solicitó su propia declaración), conainterrogatorio (por la contraparte), interrogatorio re-directo y conainterrogatorio.

No obstante, dicho método según la regulación procesal del CGP no se aplica en sentido estricto, pues se dispone la posibilidad de una mayor intervención del juez, donde éste sea incluso es el que primero interviene, además de los generales de ley, para indagar a cerca de otras circunstancias que sirvan para establecer la personalidad e identificación del testigo, las circunstancias que afecten su imparcialidad (que no debe ser una limitante en sede de práctica para la recepción del testimonio de la parte) y para cumplir con una serie de deberes que le impone el CGP, como lo son: i) deber de informar al declarante a cerca de los hechos que serán objeto de su declaración; ii) deber de provocar un relato de lo que conozca o le conste al declarante sobre tales hechos; iii) deber de hacer preguntas para precisar el conocimiento del declarante sobre los hechos; iv) deber de buscar que la declaración rendida sea exacta y completa, para lo cual buscará a través

de preguntas que se justifique en circunstancias de modo, tiempo y lugar las razones por las cuales tenga conocimiento o le consten esos hechos. Además, el juez tendrá la posibilidad de interrogar en todo momento.

Paso seguido, el declarante tendrá la oportunidad de narrar a través de un relato espontáneo todos los hechos que conoce, después, el juez podrá cuestionar al testigo sobre la razón de la ciencia de su dicho (con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento) y, una última etapa en donde las partes (tanto la parte que solicitó la prueba como la contraparte) tienen la oportunidad de interrogar al testigo, en un interrogatorio cruzado, donde se hace efectivo el derecho de contradicción de la prueba.

La siguiente gráfica representa la estructura de la práctica de la prueba testimonial según el CGP:



Gráfica 6.

Práctica de la prueba testimonial aplicable a la declaración de terceros y a la declaración de parte de acuerdo al Código General del Proceso.

Ahora bien, el artículo 221 del CGP en su numeral 6° establece la posibilidad de que el testigo al rendir su declaración, haga dibujos o graficas con el fin de dar una mayor explicación de su dicho y que los mismos deben ser incorporados al proceso, así como también tiene la posibilidad de aportar y reconocer documentos. Sin embargo, frente a la declaración de parte, la posibilidad de aportar documentos sería una oportunidad que va en contra de la lealtad procesal, pues se estaría colocando en desventaja a la contraparte, que no tendría la oportunidad ni de aportar, ni de desvirtuar dichos documentos. Esto porque, además la oportunidad procesal para aportar documentos, ya se agotó con la presentación de la demanda y su contestación o en la reforma de la demanda y su contestación, por consiguiente, se omitirán de este ejercicio probatorio.

En lo que corresponde a las tachas por inhabilidad dispuestas por el CGP, las mismas son aplicables cuando se trate de la recepción del testimonio de la parte, pues van dirigidas a la capacidad física y psíquica con que cuenta la persona al rendir testimonio. Diferente sería frente a la tacha por imparcialidad (artículo 221 CGP) que aun rige para el testimonio de terceros. Esta, sin duda, no es aplicable a la parte, incluso no debería serlo para ningún testigo, independientemente de su relación o interés con las partes, en el entendido de que se adoptó un sistema de valoración que permite probar los hechos con cualquier medio de prueba idóneo y útil y es tarea del funcionario judicial, darle el grado de credibilidad a cada medio de prueba, aplicando las reglas de la lógica, la experiencia y las reglas técnico científicas, en su ejercicio de valoración.

Ahora bien, frente a los requisitos y las formalidades de la declaración, se deben adoptar las mismas al desarrollarse la declaración de la parte, en el entendido de que se debe garantizar el relato libre y espontaneo de ésta, esto es:

1. Las preguntas se formularán oralmente.
2. Cada pregunta deberá versar sobre un hecho y deberá ser clara y concisa, de lo contrario se debe replantear (artículo 219 CGP).
3. Incurrirán en responsabilidad penal por el falso testimonio.
4. El juez rechazará las preguntas inconducentes, impertinentes, sugestivas, (sin perjuicio de que una vez realizado el interrogatorio, el juez la reformule eliminando la insinuación, si la considera necesaria y solo en la fase de interrogatorio, pues en el contrainterrogatorio

las preguntas deberían ser de ese tipo), de opinión (excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia) y las repetidas y superfluas (a menos que sean útiles para precisar o aclarar algún aspecto o conocimiento del testigo sobre el hecho, artículo 220 CGP).

En términos generales, sería el camino más acertado para lograr el fin de este medio de prueba y conseguir una declaración efectiva, pues tal como lo afirma Marco Antonio Álvarez, el tema de los testigos (haciendo referencia al testimonio) no es solo de conocimiento, el tema también es de técnica, y en esto sí que hemos fallado (haciendo referencia los funcionarios judiciales) (Álvarez Gómez, 2014). En este entendido, la forma en cómo se pregunta por parte de los jueces y las partes y a su vez, como responde el deponente, es vital para una buena recepción en este tipo de pruebas e infiere indiscutiblemente al momento en el que el juez ejerce su actividad valorativa.

El último problema jurídico que se resuelve en la investigación para la etapa de práctica, como se dijo, es respecto de las reglas que se propone deben seguirse dependiendo de las diversas solicitudes probatorias que realicen las partes o las que han de surtir cuando el juez decreta el medio de prueba de oficio, por ello se abordara uno a uno los supuestos que se desprenden de las diferentes solicitudes para dar respuesta en cada caso. Previo a ello, es necesario precisar un aspecto de importancia para la resolución de cada una de las hipótesis planteadas: se trata del criterio que se denominó como “criterio material”, el cual alude a que aun cuando la solicitud probatoria sea dirigida en un determinado sentido (como interrogatorio-confesión o declaración de parte), lo que se tendrá en cuenta por el juez para su decreto y especialmente para la práctica es la finalidad que persigue dicha solicitud probatoria.

Sentadas esas bases, se procede a exponer la solución a la que se ha llegado en cada uno de los supuestos planteados:

a) Cuando la parte solicita el interrogatorio de la contraparte: En este caso de acuerdo con el criterio material se entiende que lo que pretende la parte es obtener confesión de la contraria y

para ello el instrumento de práctica adecuado es el interrogatorio de parte contemplado en los artículos 198 y siguientes del CGP.

b) Cuando la parte solicita su propia declaración: Siguiendo el criterio material, la finalidad perseguida con tal solicitud es que la propia parte pueda exponer ante el juez su versión de los hechos y en consecuencia, se adelantará conforme a la declaración de parte que, como se aclaró de forma precedente, se surte (con las salvedades expuestas), de acuerdo a las reglas previstas en el CGP para la declaración de terceros.

c) Cuando la parte solicita la declaración de su contraparte: Para este supuesto, el criterio material actúa indicando que el sentido de dicha expresión (declaración de su contraparte) es en realidad el de pretender obtener confesión, pues es este el curso lógico del debate probatorio.

No obstante, el criterio material puede encontrar una excepción tratándose de las declaraciones de los representantes de personas jurídicas de derecho público, respecto de los que por mandato expreso del artículo 195 del CGP, no es válida la confesión, con lo cual puede considerarse que aun cuando sea la parte contraria quien solicite la declaración de estos representantes, su versión puede surtirse desde la figura de declaración de parte, sirviéndose del instrumento de interrogatorio cruzado. Esto sin perjuicio del informe escrito bajo juramento que puede rendir dicho representante a solicitud de parte como equivalente de la declaración oral en audiencia.

d) Cuando la parte solicita su interrogatorio: Frente a esta posibilidad, ha de entenderse que lo que realmente busca la parte es rendir su versión sobre los hechos y que todo lo que exponga en audiencia al juez sea valorado conforme las reglas de la sana crítica, por lo que no resulta adecuado conforme al curso normal del debate probatorio que la parte solicite un medio de prueba que en esencia sólo pueda serle desfavorable a su pretensión o excepción. En ese sentido, debe practicarse dicha solicitud conforme a las reglas de la declaración de parte

e) Cuando el juez decreta prueba de oficio: En este caso, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el juez como tercero imparcial encargado de decidir acerca de la controversia que se le

pone en conocimiento, es el sujeto idóneo para determinar cuál de los dos medios de prueba, confesión o declaración de parte, es el procedente para la determinación de los hechos sobre los que aún existe duda en el proceso y que por lo tanto requieren de la intervención de éste a través de la prueba de oficio; más aún cuando es el juez quien aplicaría el criterio material que se propone.

En todo caso, dada la posibilidad con la que cuenta el juez para determinar que la parte, bien absuelva el interrogatorio de parte (como instrumento para obtener la confesión) o la declaración de parte, se considera por el grupo de investigación, que es esta última el medio de prueba que resulta ser más adecuado para la finalidad que ha de perseguir la prueba de oficio, que no es otra que el esclarecimiento de los hechos, llegar a la verdad material que se busca en el proceso; y por lo tanto, el ejercicio de práctica, a través de la metodología de interrogatorio cruzado con una alta participación del juez, permitiría logra tal fin respetando la contradicción de las partes, pues dicha metodología ha demostrado en los sistemas de derecho anglosajón y en las adopciones de éste en diferentes procesos del *Civil Law* (como ocurrió en la Ley 906 de 2004 que regula el proceso penal) ser adecuada para la averiguación de la verdad en el proceso⁶².

f) Cuando se pida al mismo tiempo interrogatorio de parte y declaración de parte respecto de uno o los dos litigantes: Frente a este supuesto se sigue lo propuesto por el autor Felipe Marín Verdugo que es reiterado por Adriana López Blanco (López Martínez, 2016, pág. 486), al señalar que se deberá evacuar en primer lugar la declaración voluntaria, que inicia con el interrogatorio directo, posteriormente, la otra parte realizará el contrainterrogatorio dentro del cual deberá incluir las preguntas que se harían en el interrogatorio de parte o declaración forzada, con lo cual ese contraexamen se entenderá como un equivalente funcional del interrogatorio de parte.

Lo anterior porque si al presentar sus medios de prueba, la parte con la carga de probar rinde efectivamente su declaración voluntaria (a través del interrogatorio cruzado), la declaración forzada solicitada por la contraparte que está pendiente sería, por regla general, sobreabundante,

⁶² Esto porque como lo afirma Adriana López Blanco, ésta metodología se “rige por la espontaneidad del interrogatorio desarrollado a partir de las respuestas anteriores. Si el declarante ha dicho la verdad en su testimonio, sus respuestas serán confirmadas en el cruce de interrogaciones; pero si ha mentado, quedará descubierta la falsedad de sus primeras declaraciones.” (López Martínez, 2016, pág. 486).

puramente dilatoria, pues materialmente ya se realizó al efectuar el contraexamen⁶³ (Verdugo Marín, 2010, pág. 160).

Como la última de las etapas del *iter* probatorio se encuentra la valoración, fase que recae exclusivamente sobre el juez como tercero imparcial encargado de dirimir el conflicto que las partes le ponen en conocimiento. Se trata de una etapa en la que el juzgador debe apreciar el valor que le otorgará a la prueba que se aportó al proceso a través de los diferentes medios probatorios y con ello construir la decisión que se tomará en el caso concreto. Pues bien, es allí donde surgen al menos dos interrogantes:

El primero, en relación con la definición de criterios de los que pueda servirse el juez para valorar el dicho de la parte, para ello ha de tenerse en cuenta que según el sistema de sana crítica y libre apreciación de las pruebas acogido por el Código General del Proceso, el juez debe emplear la lógica, la razón, las reglas de la ciencia y las máximas de la experiencia para determinar el valor que será otorgado a las pruebas en el proceso, con lo cual, el juez tiene la libertad de establecer diferentes parámetros para fundamentar el resultado del proceso evaluativo de las pruebas, motivando con ello la decisión basándose en criterios racionales y objetivos.

Ahora, en relación con la valoración de la declaración de las partes, resulta pertinente traer a colación el estudio realizado por Cristian Contreras Rojas en el artículo de investigación denominado “la prueba de interrogatorios: bases para su práctica y valoración” (Contreras Rojas, La prueba de interrogatorios: bases para su valoración, 2016) quien establece una serie de criterios que debe tener en cuenta el juez al momento de realizar la valoración de este tipo de pruebas (con ello se refiere tanto a la declaración de parte como al interrogatorio de parte en lo que de este no constituya confesión), dentro de los que se destacan:

⁶³ Sobre este punto, sigue el autor señalando que “Excepcionalmente podría permitirse la realización de la declaración forzada si con ella se pretende preguntar respecto de información que fue presentada en el juicio después del contraexamen de la parte. En este caso se trataría de información nueva que no ha sido contrastada anteriormente y, por lo mismo, no sería necesariamente sobreabundante.” (Verdugo Marín, 2010, pág. 160).

i) Analizar por separado la veracidad y la exactitud del relato, tanto en su elemento volitivo que hace referencia al grado de honestidad o veracidad del dicho, como en el elemento mnemónico que se relaciona con la exactitud del recuerdo y la forma en como en realidad ocurrieron los hechos⁶⁴.

ii) Analizar las condiciones subjetivas de observación, interpretación y registro que sobre los hechos posee el declarante, esto es, constatar las condiciones físicas y psicológicas del declarante al momento de rendir su versión dependiendo de las circunstancias que integran el relato⁶⁵, pues dos personas pueden narrar de forma distinta un mismo hecho.

iii) Atender al grado de contextualización que alcanza el relato, es decir, debe analizarse la capacidad de precisión con que el declarante describe los elementos tanto ambientales, como emocionales y cognitivos que se desarrollaron en el hecho sobre el cual se está pronunciando.

iv) Verificar la coherencia interna y externa de la narración, la primera de ellas hace referencia a los elementos secuenciales y cronológicos y la segunda a la relación que existe entre los dichos del declarante. Aquí es donde el juzgador debe identificar si la parte se contradijo en su dicho o no, así como la coherencia en el orden en que fueron expuestos sus relatos⁶⁶.

v) Considerar si el olvido ha afectado el recuerdo, donde es indispensable que el juez al valorar el relato, tenga en cuenta el efecto que el transcurrir del tiempo pudo generar en la eliminación total o parcial del recuerdo de los hechos en la memoria, lo que de ser así, reducirá el valor de su declaración.

⁶⁴ Ello porque debe tenerse en cuenta que, como lo diría Muñoz Sabaté (Muñoz Sabaté, 2012), cuando el hecho llega al proceso es sólo una representación deformada de aquél, se trata de una representación imperfecta a la que se llega a través de los medios de prueba, y lo es porque los instrumentos de ese traslado y el proceso de valoración que luego habrá de experimentar están sujetos a una serie de factores y variables diferentes a las que existían cuando el hecho se produjo realmente.

⁶⁵ Valga aclarar que con ello no se está aludiendo a las causales de inhabilidad previstas en el artículo 210 del CGP.

⁶⁶ Criterio que no puede sobrevalorarse, porque como lo indica Jordi Nieva Fenoll “El litigante puede haber hablado mil veces del objeto del juicio con el abogado, por lo que es posible que incluso haya llegado a distorsionar la historia real de base, adaptándola, sin ser del todo consciente, a lo que dicen los escritos dispositivos.” (Nieva Fenoll, 2010, pág. 240).

vi) Concentrarse en el contenido de la declaración, no en las condiciones personales del declarante, el que es quizá uno de los criterios más importantes a tener en cuenta durante el ejercicio valorativo del juez⁶⁷, explica que se debe aplicar una de las recomendaciones básicas de la moderna psicología del testimonio “el material a analizar no debe estar conformado por la persona del declarante y sus condiciones particulares, sino por el contenido de su relato” (Contreras Rojas, 2016, pág. 136), es decir, no se puede prejuzgar la veracidad u honestidad de la declaración de una persona, en este caso la parte, por el hecho de que esta tenga interés en el proceso, ya que es innegable el impacto negativo que ello puede generar en el resultado final de la valoración⁶⁸.

Sin embargo, sobre este punto debe tenerse en cuenta que, si bien no debe prejuzgarse al declarante por su condición de parte en el proceso, el juez al momento de realizar la valoración de la prueba, si debe tomar en consideración que, tratándose de los dichos de las partes, debe aplicar la máxima de la experiencia de que es la parte quien tiene un interés intenso en el resultado del proceso y por lo tanto evaluarlos con mayor rigurosidad. Pero como lo señala Jordi Nieva Fenoll de nada sirve esta máxima si no se dan otros criterios de los que pueda hacer uso el juez para analizar la declaración, lo que en suma, de los criterios ya expuestos, es “que su relato esté espontáneamente contextualizado y que se vea acreditado por otros medios de prueba” (Nieva Fenoll, 2010, pág. 241).

Todo esto debe servir para la motivación que realice el juez en la sentencia, donde en atención a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 176 del Código General del Proceso debe “exponer razonadamente el valor que le asigne a cada prueba”, lo que sólo es posible en relación con la declaración que la parte realice en el proceso, si se hace un análisis adecuado de la misma, esto es, sin sesgos generados por preconcepciones respecto de la persona del declarante, valorando en conjunto el acervo probatorio y acudiendo a las reglas de la sana crítica donde se indica a través

⁶⁷ Lo que no ocurre como una etapa aislada, pues en virtud de la inmediación, el juez está en contacto con lo que se produjo en la prueba desde su práctica, lo que implica que desde ese momento empieza su labor valorativa.

⁶⁸ Otros criterios son: i) Restar todo valor al componente no verbal de la declaración, por lo tanto, aquellas señales que acompañan a las palabras de forma complementaria, no deben ser los que determinen el nivel o grado de sinceridad de la narración, pues si así se hiciera, se estaría acudiendo a criterios irracionales y especulativos; ii) no utilizar la confianza del declarante como indicador de su nivel de certeza; iii) averiguar si el declarante ha recibido influencias externas para moldear su relato y; iv) Determinar si el recuerdo ha sido afectado durante el interrogatorio, esto es, en relación con las preguntas planteadas y con ello debe hacer uso el juez y las partes de la facultad de impedir las preguntas capciosas que lleven a error o a determinar el contenido de la declaración.

de las reglas de la experiencia una apreciación rigurosa en la que se debe tener en cuenta el contexto de lo expuesto por la parte, donde no haga alusión a aspectos que son normalmente imposibles de recordar y que si lo hace se justifique con una razón válida el motivo por el cual lo recuerda⁶⁹.

El segundo problema que se presenta en la etapa de valoración, concierne precisamente a un aspecto que se trató con anterioridad –la valoración en conjunto de la declaración de la parte con las demás pruebas que obren en el proceso-, y que pese a que sea de forma remota puede llegar a ocurrir y en ese escenario el juzgador no tendrá más opción que la de resolver de alguna forma el problema planteado pues es su deber impartir justicia⁷⁰; se trata de la posibilidad de que el juez pueda dictar sentencia favorable con base en la declaración de parte como única prueba en el proceso, lo que puede ocurrir porque no obren en el proceso otros medios de conocimiento (lo que en la práctica resulta casi imposible) o porque los que allí se produjeron en nada aportan a la solución del caso.

El interrogante fue abordado por el profesor Marco Antonio Álvarez (Álvarez Gómez, 2017, págs. 15-16), para quien en principio, debería existir al menos un indicio que permitiera corroborar la declaración de la parte, pero en caso de no haberlo y si la declaración resulta válida conforme a las reglas generales de apreciación de las pruebas (lo que sería con base en, como ya se refirió, una adecuada contextualización de la declaración), es aceptable que el fallo que profiera el juez sea favorable a la parte que declara y para ello hace alusión a que en el mismo ordenamiento procesal existen otras figuras en las que las alegaciones de las partes constituyen prueba, como ocurre con el juramento estimatorio (artículo 206 CGP) o el juramento de que no existen soportes de la obligación contractual reclamada para el proceso monitorio (artículo 420.6, inciso 2°).

Lo expuesto resulta razonable y puede ser adoptado por el juez tomando para ello en consideración, que la valoración que realice de la versión que rinde la parte, debería adecuarse a los criterios expuestos para el problema jurídico precedente, con el fin de evaluar la validez del

⁶⁹ Por ejemplo, tratándose de un suceso específico del que el declarante recuerde la fecha exacta, podría justificarlo a partir de una situación que tenga muy presente como lo podría ser el día de su cumpleaños o el de algún familiar muy cercano.

⁷⁰ Esto por cuanto, con el CGP se elimina la figura de la sentencia inhibitoria, contemplada en el anterior Código de Procedimiento Civil.

relato ofrecido por ésta. No obstante, existe otra posibilidad de la que el juez puede hacer uso para dirimir el conflicto, la carga de la prueba como regla de juicio, donde al estimar la existencia de una insuficiencia probatoria, se hace uso de dicha institución que genera como resultado un fallo en contra de quien tenía a su cargo la obligación de probar los hechos que constituyan su defensa o alegación y no lo hizo.

En todo caso, se trata de un examen que debe realizar el juez al momento de valorar el acervo probatorio y argumentar con ello la decisión que adopta en sentencia, se trata de una determinación que deberá analizarse con prudencia y habiendo agotado todas las posibilidades de obtener otros insumos de prueba que puedan contribuir a tomar una decisión mejor fundada como lo es la prueba de oficio; pero suponiendo que incluso la declaración de la parte sea precisamente esa prueba de oficio decretada por el juez, deberá entrar a definir el peso de prueba que según las circunstancias propias de cada caso se le pueda otorgar al dicho de la parte y con ello establecer si se acoge a una u otra posibilidad de decisión, que por cierto, en muchos casos podrían llevar al mismo resultado⁷¹.

Así las cosas, la consagración en el Código General del Proceso de la declaración de parte como un medio de prueba autónomo de la confesión, ha traído consigo la necesidad de analizar las reglas de producción probatoria que deberían aplicarse para que la parte pueda ofrecer al proceso su versión de los hechos por ser el sujeto que por regla general está mejor informado del supuesto fáctico que debe ser apreciado por el juez para la resolución del litigio. Todo ello obedece no más que a un cambio en la concepción de la parte y su papel en la producción de la prueba, que en Colombia se había desconocido hasta la promulgación de la Ley 1564 de 2012, pero de la que aún queda mucho camino por recorrer, porque no sólo se trata de un cambio en la legislación, sino que ello debe trasladarse a los sujetos que hacen uso de ésta, en donde pervive la máxima *nemo idoneus testis in sua intelligitur, nemo in propria causa testis esse debet*, desde la cual, la parte no puede

⁷¹ Como podría ocurrir por ejemplo, en el caso de que la parte demandante allegue pruebas al proceso que en nada aportan a la solución del litigio y que el demandado sea quien en su defensa solicite como medio de prueba su propia declaración, y que ésta una vez rendida en juicio se considere como válida de acuerdo a las reglas generales de apreciación de las pruebas. En ese caso ya sea que se opte por acoger la posición propuesta por Marco Antonio Álvarez o la de acudir a la carga de la prueba como regla de juicio, la decisión sería favorable al demandado, porque la carga de probar el supuesto de hecho que sustenta su pretensión correspondía al demandante y no la satisfizo.

hacer prueba con su propia dicho, lo que se trata de “toda una pléyade de paradigmas cargados de desconfianza; «preciosismos jurídicos», como diría Hernán Fabio López, transmitidos de generación en generación como verdades irrefutables” (Álvarez Gómez, 2017, pág. XVI). Circunstancia que se agrava con la indefinición de reglas claras de producción de la prueba que permitan distinguir claramente la declaración de parte de la confesión y que ofrezcan seguridad al operador jurídico y a quienes acceden a la administración de justicia acerca de los posibles interrogantes con los que se puede encontrar en cada una de las fases del *íter* probatorio, y es precisamente ello, lo que se propuso la presente investigación.

6. PROPUESTA

6. 1. Análisis crítico de la confesión como medio de prueba.

El desarrollo histórico del derecho probatorio europeo fundamentado en la vertiente jurídica mesopotámica apoyada en el Código de Hammurabi, los escritos del Pentateuco y del Deuteronomio, y el Codex de Justiniano, hicieron que lo venidero después del legado romano se direccionará hacia la implementación del sistema de prueba legal, como lo afirma Jordi Nieva Fenoll, desde época romana hasta el principio de la edad moderna, si bien se mantuvo el principio de libre valoración de la prueba, lo cierto es que, con el tiempo, las normas de prueba legal fueron creciendo en número (Nieva Fenoll, 2010), esto desarrolló un automatismo fatal que al día de hoy ha llegado a subsistir en medios de prueba presentes en el Código General del Proceso como la carga de la prueba, las presunciones, la confesión, las tachas de testigos, la prueba documental y el juramento (Nieva Fenoll, 2010).

Lo anterior, contrastando con el sistema de valoración que ha pretendido adoptar el Código General del Proceso, la libre valoración de la prueba, en donde se debe valorar de forma abstracta cualquier medio de prueba y haciendo para ello uso de las reglas de la sana crítica: reglas de la lógica, la experiencia y las técnicas científicas, el juez debe evaluar cada acto probatorio de la manera más objetiva posible y algunos postulados normativos del actual estatuto procesal, como lo son los que regulan la confesión, evidencian los rezagos de una ya no tan vigente visión admonitiva del derecho de la prueba.

Al respecto, desde la doctrina, Michelle Taruffo afirma sobre la prueba de confesión, que algunos sistemas jurídicos en Europa, a saber, España, Francia e Italia, ven enraizados en sus regímenes procesales la confesión como una prueba especial y de específicas disposiciones en su *iter* probatorio⁷².

⁷² En Francia, sólo se puede hacer en el curso de la *comparution personnelle* de las partes. En Italia y en España se pueden hacer en el curso del proceso, sea de manera espontánea o mediante mecanismos procesales específicos que tienen por objeto pedir a una de las partes que responda un conjunto de preguntas formuladas por la otra parte, quien solicita la confesión (Taruffo, La prueba, 2008, pág. 71).

De la misma forma, Michelle Taruffo explica que en los ordenamientos procesales antes reseñados, si no se logra la confesión desde las preguntas formuladas no se produce ningún medio de prueba, y que aun existiendo la prueba de la confesión en otro proceso o documento solemne en que ya exista la confesión, ésta se debe volver a practicar en el proceso materia del litigio para que tenga efectos probatorios, todo este procedimiento de práctica se justifica desde la máxima que se ha mantenido a lo largo de los años, de que nadie admite hechos que le perjudican a menos que sean verdaderos (Taruffo, La prueba, 2008), y este argumento mantiene a la confesión como un medio de prueba vigente en la mayoría de ordenamientos procesales tanto de Europa como de América y específicamente en Colombia.

Ambas prácticas antes reseñadas son un desperdicio procesal que no tiene fundamento racional sino desde la falacia *ad antiquitatem*, según la cual, en palabras de Jordi Nieva Fenoll “los seres humanos la utilizan para dar solidez aparente a un argumento erróneo, evocando que el contenido de dicho argumento es correcto porque ya estaba vigente en tiempos pasados” (Nieva Fenoll, 2010).

Se trata de un medio de prueba que ha perdido vigencia por no aportar en mayor medida a la real consecución de la verdad en el proceso, pues no resulta aceptable que se considere como verdad una afirmación de la parte sólo porque ésta le resulta desfavorable o que se entienda que por no contestar a una pregunta se está necesariamente ocultando algo. En los países que han adoptado el sistema del *common law*, han derogado las pasadas costumbres y han empezado a oír a las partes como testigos, valorando lo dicho por estas en conjunto, sin acudir a determinaciones legales de la forma en cómo se debe apreciar, porque pese a que no puede negarse el interés que tienen las partes en el resultado del proceso y que es normal que las personas no tiendan a mentir sobre cuestiones que le perjudiquen, no es una regla que pueda considerarse como absoluta, en muchos casos pueden existir motivos (como ocurre cuando se busca encubrir a otra persona) que conlleven a que la parte mienta en un asunto que le resulta desfavorable o que por las circunstancias la parte pueda equivocarse en su relato.

Por lo tanto, es un trabajo de valoración del juez, en donde se debe tener en cuenta todos los aspectos que se han demostrado en el desarrollo del proceso, valorar de forma conjunta todos

los medios de prueba y no solo centrar su valoración en un dicho (que al parecer le pone en evidencia a la parte por afirmar hechos que le desfavorecen) para establecer la veracidad de los hechos y tomar con ello la decisión en el proceso.

De esta forma, la confesión es un medio de prueba que ha perdido sentido y que desde la aplicación del paradigma de la libre valoración probatoria, se trata un medio de prueba que se mantiene reminiscente ante la paulatina eliminación del sistema de prueba o tarifa legal que solo encuentra cabida en la práctica judicial que se aferra a la tradición por sobre la razón, basada en la desconfianza en la valoración de la prueba por los jueces y en un sistema escrito en el que encontraba mayor justificación por el escaso o nulo contacto del juez con las partes. Pero que dado el excesivo formalismo de este medio de prueba y su falta de eficacia en relación con la averiguación de la verdad material que es lo que persigue el derecho procesal actual, está llamada a desaparecer.

6.2. El interrogatorio legal no es un instrumento de práctica para obtener confesión.

Desde la regulación realizada en el Código General del Proceso, se ha podido identificar que tratándose del “interrogatorio”, existen en realidad diversos tipos: i) el interrogatorio de parte (procesal o extraprocésal) entendido como el instrumento para obtener confesión, que es realmente el medio de prueba; ii) el interrogatorio de oficio, que es el mismo interrogatorio de parte (entendido como instrumento o vehículo para obtener confesión) pero en este caso decretado por el juez en virtud de lo que se establece en el artículo 169 del CGP y; iii) el interrogatorio legal, que es el previsto en el artículo 372.7 del CGP al señalar que “El juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogará de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso”.

Así, respecto al interrogatorio que se ha denominado como “legal”⁷³, desde lo contemplado en el Código General del Proceso, se tiene que este se realiza en audiencia inicial, previo a la fijación del litigio, situación que es dispuesta de esa forma debido a que la finalidad

⁷³ De las otras dos figuras, interrogatorio de parte solicitado por las partes y decretado de oficio, se ocupará la presente investigación en el siguiente capítulo.

con la que se concibe ese interrogatorio es contribuir a una adecuada fijación del litigio, esto es, a optimizar la determinación del supuesto fáctico que será objeto del debate probatorio. Se trata de un interrogatorio de carácter principalmente aclarativo⁷⁴.

El juez como un deber impuesto legalmente por la norma procesal, debe interrogar de forma exhaustiva a las partes, pero no para obtener confesión, como podría afirmarse en principio, sino para generar lo que se denomina como “hechos admitidos o hechos no controvertidos”, los cuales, en Colombia, se han entendido como pruebas, asimilándolos a la confesión. No obstante, si se observa en estricto sentido desde el derecho probatorio, los hechos no controvertidos, son precisamente hechos que no requieren prueba⁷⁵, por lo que si se entiende que son hechos confesos se estaría frente a una contradicción porque la confesión es prueba y los mencionados hechos, precisamente, no pueden ser objeto de prueba.

Para obtener los hechos admitidos o no controvertidos, se requiere la existencia del hecho en el proceso como afirmación o alegación realizada por alguna de las partes (como ocurre también en los escritos de demanda y contestación) y que hayan sido admitidos por estas, en este caso a través de las respuestas que las partes realicen en el interrogatorio legal; es decir, para que un hecho se entienda como no controvertido y, por tanto, exento de prueba, se requiere que exista un acuerdo de las partes sobre los mismos.

Lo anterior se traduce en que:

(...) la admisión de hechos por todas las partes obliga al juez a tenerlos por ciertos, no porque su reconocimiento les confiera el estatus de probados, sino porque la ley dispone

⁷⁴ Esta afirmación encuentra soporte en los estudios doctrinales (Devis Echandía, 1993) que se han desarrollado alrededor de la figura del interrogatorio *ad clarificandum*, institución que tiene como función poner al juez en inmediato contacto con las partes, no (directamente) con fines de prueba, sino de clarificación, para esclarecer los hechos plasmados en los escritos dispositivos del proceso (demanda, contestación, reforma de la demanda y su contestación).

⁷⁵ Al respecto Cristian Contreras señala que “(...) sólo los hechos que sean afirmados por las partes y resulten controvertidos por la contraria serán objeto de prueba, de manera que los hechos admitidos por todas las partes quedan exentos de prueba” (Contreras Rojas, 2015, pág. 20).

que estos hechos están exentos de prueba. Por ende, el efecto de la admisión es simplemente excluir la prueba respecto de esos hechos (Contreras Rojas, 2015, pág. 21).

En ese sentido, el interrogatorio legal no es un ejercicio para producir conocimiento sino para generar hechos no controvertidos o pacíficos, es un ejercicio de aceptación de hechos, lo que se hace en virtud del principio dispositivo con que cuentan las partes y que les permite determinar el marco fáctico que será discutido en el proceso. Y es precisamente, en la determinación o fijación del marco fáctico que se discutirá (fijación del litigio), donde el juez con ayuda del interrogatorio que realice de forma precedente en la audiencia, conmina a las partes para que se pongan de acuerdo acerca de que hechos no serán controvertidos porque fueron aceptados por las partes en esa interrogación exhaustiva, con lo que de no llegar a ningún acuerdo, no puede entenderse por el juez como hecho admitido por confesión, porque cosa distinta es que estos hechos deban ser susceptibles de dicha prueba en atención a que ello implica que son hechos susceptibles a su vez de disposición por las partes.

Las anteriores afirmaciones encuentran lugar en lo dispuesto por el CGP al señalar que:

A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determine los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, y fijará el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran ser probados (artículo 372.7 inciso 4°). (Aparte subrayado fuera del texto).

Valga aclarar que la palabra subrayada según la interpretación que realiza el grupo de investigación, debe entenderse como hechos admitidos o no controvertidos, el vocablo señalado es producto del erróneo entendimiento que se le ha dado en Colombia al interrogatorio legal (si desde la óptica del derecho probatorio se analiza) porque hasta el momento no ha existido ejercicio de práctica probatoria en el proceso, pues es precisamente, a partir de ese acuerdo que se realiza entre las partes, donde se determinará qué hechos deben ser o no objeto de prueba.

De acuerdo con lo anterior, no debe afirmarse que se entiende agotado el interrogatorio de parte con la realización del interrogatorio legal, porque este no es un instrumento de práctica de

prueba sino un acto procesal mediante el cual se obtienen hechos admitidos que servirán de base para la fijación del litigio. En consecuencia, se considera que no es posible que se ejerza contradicción por las partes en el interrogatorio legal, porque justamente, tal derecho sólo es predicable respecto de la práctica de los medios de prueba que no ocurre con el interrogatorio en comento.

Así las cosas, lo que puede ocurrir es que, en virtud de ese ejercicio de aceptación de hechos, al realizar el juicio de admisibilidad el juez determine declarar como improcedente el decreto de los medios de prueba de confesión (interrogatorio de parte) o la declaración de parte solicitados, en atención a que los hechos sobre los que recaían esos medios probatorios ya fueron aceptados por las partes. Porque con ayuda del interrogatorio legal se puede lograr incluso que la discusión que se plantee en el proceso a partir de éste, sólo sea por cuestiones jurídicas.

En todo caso, si se advierte que lo anterior podría afectar el principio de economía procesal, por el que se propende desde el proceso oral y por audiencias, debe tenerse en cuenta, que desde la concepción de hechos admitidos o no controvertidos puede lograrse incluso mayor eficiencia, pues a diferencia de la confesión, esta clase de hechos no admiten prueba en contrario, situación que podría llegar a evitar la práctica de otros medios de prueba. Lo que en todo caso, no impide que si en la práctica de la prueba se advierte la existencia de elementos de conocimiento que desvirtúen el hecho aceptado o pacífico, no se ve impedimento por el cual el juez, en el ejercicio de valoración libre de las pruebas, pueda dar por descontada la aceptación de tal hecho y en su lugar utilizar como parte del fundamento de su decisión ese elemento que contraría la calidad de hecho aceptado.

7. REFERENCIAS

- Abal Oliú, A. (2014). Prueba por declaración de parte. *Revista de Derecho*(9), 13-54.
- Álvarez Gómez, M. A. (11 de septiembre de 2014). *Interrogatorio a Testigos (terceros) en el Código General del Proceso*. Obtenido de XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal: <https://www.youtube.com/watch?v=xsiKyMoV-4k>
- Álvarez Gómez, M. A. (2015). Documentos y Declaraciones. En I. C. Procesal, *Código General del Proceso Comentado*. Bogotá D.C.
- Álvarez Gómez, M. A. (2017). *Ensayos sobre el Código General del proceso* (Vol. III). Bogotá D.C.: Temis Editores S.A.
- Arazi, R. (1976). *La prueba en el proceso civil*. Buenos Aires: Cooperadora de Derecho.
- Areal, L. J., & Fenochietto, C. E. (1970). *Manual de derecho procesal*. Buenos Aires: S.E.
- Arguedas Salazar, O. (1988). Derecho procesal moderno. En J. Velásquez, H. Briseño Sierra, H. Devis Echandía, J. Sanguino Sánchez, J. Parra Quijano, J. A. Zepeda, . . . O. Gozaini, *Derecho procesal contemporaneo* (págs. 203 - 208). Costa Rica: Diké.
- Armenta Deu, T. (2007). *Lecciones de derecho procesal civil Proceso de Declaración, Proceso de Ejecución y Procesos Especiales* (Tercera ed.). Madrid: Marcial Pons.
- Auto 231-01. (14 de junio de 2001). Corte Constitucional. *M.P.: Jaime Araujo Rentería*. Bogotá D.C., Colombia: Radicado No. 212-2001.
- Azula Camacho, J. (2015). *Manual de Derecho Procesal*. Bogotá D.C.: TEMIS S.A.
- Azula Camacho, J. (2015). *Manual de Derecho Procesal. Pruebas judiciales* (Vol. VI). Bogotá D.C.: Editorial Temis.
- Bejarano Guzmán, R. (10 de junio de 2016). *El caos del interrogatorio en el Código General del Proceso*. Obtenido de ámbito Jurídico: <https://www.ambitojuridico.com/procesal-y-disciplinario/el-caos-del-interrogatorio-en-el-codigo-general-del-proceso>
- Bejarano Guzmán, R. (11 de octubre de 2017). *La parte no puede pedir su propia declaración*. Obtenido de <https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/civil-y-familia/la-parte-no-puede-pedir-su-propia-declaracion>
- Bentham, J. (1959). *Tratado de las Pruebas Judiciales* (Vol. II). (M. Ossorio Florit, Trad.) Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.

- Bilalama. (2000 a. C.). Leyes de Eshnunna. *Extraído de Historia del cercano Oriente por Carlos Wagner de Universidad de Salamanca.*
- Bonnier, E. (1925). *Tratado teórico y práctico de las pruebas en derecho civil y en derecho penal* (Quinta ed., Vol. I). Madrid: Reus S. A.
- Camaño Rosa, A. (1973). *Estudios penales y procesales* (Vol. I). Montevideo: A.M.F.
- Canosa Suárez, U. (2014). Código General del Proceso. Declaración de parte - Documentos. XXXV *Congreso Colombiano de Derecho Procesal*, 209-222.
- Cappelletti, M. (2002). *El testimonio de la parte en el sistema de la oralidad* (Vol. I). Buenos Aires: Editorial Platense.
- Cappelletti, M. (2002). *El testimonio de la parte en el sistema de la oralidad, contribución a la teoría de la utilización probatoria del saber de las partes en el proceso civil* (Vol. II). La Plata: Librería editorial platense.
- Cappelletti, M. (2002). *El testimonio de la parte en el sistema de la oralidad. Tomo I.*
- Código Federal de Procedimientos Civiles. (24 de febrero de 1943). Congreso de la Unión. México D.F., México.
- Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. (1988). Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Montevideo, Uruguay.
- Congreso Nacional. (14 de diciembre de 1855). Código Civil. Santiago, Chle.
- Constitución Política. (20 de julio de 1991). Asamblea Nacional Constituyente. Bogotá D.C., Colombia: Gaceta Constitucional No. 116 del 20 de julio de 1991.
- Contreras Rojas, C. (2015). Valoración de las pruebas de declaración de personas en segunda instancia. Barcelona, España: Universidad de Barcelona.
- Contreras Rojas, C. (2016). La prueba de interrogatorios: bases para su valoración. *Justicia: Revista de Derecho Procesal*, 2, 119-149.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos. (22 de noviembre de 1969). San José, Costa Rica.
- Cuello Iriarte, G. (1994). *Pruebas judiciales Jurisprudencia* (Vol. I). Bogotá: TEMIS.
- De Pina, R. (1975). *Tratado de las pruebas civiles* (Segunda ed.). México: Porrúa.
- Decreto Legislativo No. 768. (4 de marzo de 1992). Congreso de la República. Lima, Perú.
- Decreto No. 211. (2007). Congreso Nacional. *Código Procesal Civil*. Tegucigalpa, Honduras.

- Decreto 1400. (6 de agosto de 1970). Congreso de Colombia. Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 33.150 del 21 de septiembre de 1970. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil.html.
- Devis Echandía, H. (1972). *Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales* (Vol. II). Bogotá D.C.: Biblioteca Jurídica Dike.
- Devis Echandía, H. (1988). *Compendio de la prueba judicial* (Vol. I). Bogotá: Rubinzal - Culzoni Editores.
- Devis Echandía, H. (2012). *Teoría general de la prueba judicial* (Sexta ed., Vol. II). Bogotá D.C.: Editorial Temis S.A.
- Enrique Palacio, L. (1979). *Derecho Procesal Civil Actos Procesales* (Vol. IV). Buenos Aires: Abeledo - Perrot .
- Espinosa Lopez, L. (1982). *Derecho probatorio Curso teórico práctico*. Bogotá: Librería del profesional.
- Falcón, E. (2008). *El ejercicio de la abogacía Derecho procesal teórico-práctico en lo civil, comercial, concursal, constitucional y administrativo* (Segunda ed., Vol. II). Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni.
- Fernández Baquero, M. E. (2013). *Procedimiento Civil Romano*. (U. d. Granada, Ed.) Obtenido de <http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL%20ROMANO.pdf>
- Fernández de la Rúa, V. (1856). *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil* (Vol. Tomo II). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Ferrer Beltrán, J. (2008). *La valoración racional de la prueba*. Madrid: Marcial Pons.
- Florian, E. (1933). *Elementos de derecho procesal penal*. Barcelona: Bosch.
- Florian, E. (1969). *De las Pruebas Penales* (Vol. I). Bogotá: TEMIS.
- Gascón Abellán, M. (2010). *Los hechos en el Derecho*. Madrid: Marcial Pons.
- Gómez Lara, C. (1974). *Teoría General del Proceso*. Oxford: Oxford University Press.
- Gonzales Bustamante, J. (1975). *Principios de derecho procesal penal mexicano* (Sexta ed.). México: Porrúa.

- Gonzales Bustamante, J. (1975). *Principios de derecho procesal penal mexicano* (Sexta ed.). México: Porrúa S.A.
- Guzmán Díaz, C. (1987). *Procedimiento civil aplicado* (Cuarta ed.). Bogotá: Temis.
- Instituto colombiano de derecho procesal. (2008). XXIX Congreso colombiano de derecho procesal. *FALTA*, (pág. FALTA). Medellín.
- Instituto colombiano de derecho procesal. (2012). XXXIII Congreso de derecho procesal. *Código general del proceso. Aspectos probatorios por Ulises Canosa Suárez*, (págs. 33 - 62). Cartagena.
- Instituto colombiano de derecho procesal. (2014). XXXV Congreso de derecho procesal. *Homenaje al maestro "Hernando Morales Molina" en el centenario de su nacimiento*, (págs. 212 - 2016). Cartagena.
- Instituto colombiano de derecho procesal. (2015). XXXVI Congreso de derecho procesal. *Confesión, interrogatorio y declaración de parte por Octavio Augusto Tejeiro Duque*, (págs. 560 - 569). Pereira.
- Instituto colombiano de derecho procesal. (2016). XXXVII Congreso de derecho procesal. *La declaración de parte como medio de prueba autónomo por Adriana López Martínez*, (págs. 475 - 487). Medellín.
- Jaramillo Castañeda, A. (1974). *Procedimiento civil aplicado*. Bogotá: TEMIS.
- Jaramillo Castañeda, A. (2010). *Procedimiento civil* (Decima ed.). Bogotá: Doctrina y Ley LTDA.
- Kramer, S. (1959). *History Begins at Sumer*. New York: Doubleday.
- Lara Peinado, F. (2012). *Código de Hammurabi*. Madrid, España: Tecnos.
- Lara Peinado, F. (2012). *Código de Hammurabi*. Madrid: Tecnos.
- Ley 01. (7 de enero de 2000). Parlamento Español. *Ley de Enjuiciamiento Civil*. Madrid, España.
- Ley 1556. (28 de agosto de 1902). Congreso Nacional. *Código de Procedimiento Civil*. Santiago, Chile.
- Ley 15982. (18 de octubre de 1988). Congreso de la República. *Código General del Proceso*. Montevideo, Uruguay.
- Ley 4196. (18 de septiembre de 1990). Congreso de la República. *Código de procedimiento Civil*. Caracas, Venezuela.
- Ley 439. (19 de noviembre de 2013). Asamblea Legislativa Plurinacional. *Código Procesal Civil*. La Paz, Bolivia.

- Ley 506. (18 de mayo de 2015). Asamblea Nacional. *Código Orgánico General de Procesos*. Quito, Ecuador.
- Ley 902. (9 de octubre de 2015). Asamblea Nacional. *Código Procesal Civil de la República de Nicaragua*. Managua, Nicaragua.
- Ley 105. (24 de Octubre de 1931). Congreso de Colombia. Por la cual se expide el Código Judicial. Sobre organización judicial y procedimiento civil. Bogotá, Colombia: Diario oficial N° 21823 de 24 de octubre de 1931. Obtenido de https://www.redjurista.com/Documents/ley_105_de_1931_congreso_de_la_republica.aspx#/.
- Ley 1564 de 2012. (12 de Julio de 2012). Congreso de la República. Por la cual se expide el Código General del Proceso. Bogotá, Colombia: Diario Oficial 48489 de julio 12 de 2012 Obtenido de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425>.
- Leyes de Manu. (200 a. C.). India.
- Lluch, X. A. (2012). *Derecho Probatorio*. Madrid: Bosch Editor.
- Lopez Blanco, H. (2008). *Procedimiento civil* (Segunda ed., Vol. III). Bogotá: DUPRE.
- López Blanco, H. F. (2013). ... Bogotá.
- López Martínez, A. (2016). La declaración de parte como medio de prueba autónomo - la parte como testigo. En Instituto Colombiano de Derecho Procesal, *XXXVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal* (págs. 475-487). Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
- Marín Verdugo, F. (2010). Declaración de la parte como medio de prueba. *Revista Ius et Praxis*(1), 125-170.
- Marín Verdugo, F. (2010). Declaración de parte como medio de prueba. *Revista Ius et Praxis*, 16(1), 125-170. Obtenido de Revista Ius et Praxis, Año 16, N° 1: <http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v16n1/art06.pdf>
- Marín Verdugo, F. (2010). Declaración de parte como medio de prueba. *Revista Ius et Praxis*, 125 - 170 .
- Marín Verdugo, F. (2016). Declaración de la parte como medio de prueba. *Revista Ius et Praxis*, 125-170.
- Martínez Rave, G. (2006). *Procedimiento penal colombiano Sistema penal acusatorio* (Decimo tercera ed.). Bogotá: TEMIS.

- Monroy Cabra, M. G. (2005). *La Interpretación Constitucional*. Bogotá D.C.: Ediciones Librería El Profesional.
- Morales, R. R. (2002). *Las pruebas en el derecho venezolano*. San Cristobal : MMII Editorial Jurídica Santana C.A.
- Muñoz Sabaté, L. (2012). *Curso Superior de Probática Judicial: Cómo probar los hechos en el proceso*. Madrid: La Ley.
- Nieva Fenoll, J. (2010). *La valoración de la prueba*. Madrid: Marcial Pons.
- Niño Ochoa, L. E. (2012). *Formulación y desarrollo del proyecto de grado* (1ª ed.). San José de Cúcuta, Colombia: Universidad Libre.
- Ortega Torres, J. (1946). *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia*. Bogotá: Justicia.
- Paláez Hernandez, R. A. (2012). *Elementos teóricos del proceso* (Vol. I). Bogotá: Ediciones doctrina y ley LTDA.
- Pallares, E. (1976). *Derecho procesal civil*. México: Porrúa S. A.
- Parajales, G. (1997). Lineamientos del Moderno Proceso Civil: Caso Bolivia. *Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. ILANUD*.
- Parodi Remón, C. A. (agosto de 1992). *El proyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica*. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/592/24.pdf>
- Parra Quijano, J. (1998). *Manual de Derecho Probatorio* (8º ed.). Bogotá D.C.: Librería Ediciones del Profesional LTDA.
- Parra Quijano, J. (2006). *Manual de Derecho Probatorio*. Bogotá D.C.: Librería Ediciones del Profesional LTDA.
- Parra Quijano, J. (2012). *Manual de Derecho Probatorio*. Bogotá: Librería el Profesional.
- Parra Quijano, J., Velásquez Restrepo, C., Bernal Gonzáles, A., Montoya Pérez, G., Quintero de Pietro, B., Parra Benitez, J., . . . Barrientos, T. (1990). *Comentarios al nuevo código de procedimiento civil*. Bogotá: Diké.
- Presidente de la República. (21 de Septiembre de 1970). Decreto 1400 de 1970. *Código de Procedimiento Civil*. Bogotá, Colombia: Diario oficial 33150.
- Real Academia de la Historia. (1807). *Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio*. Obtenido de <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-siete-partidas-del-rey-don-alfonso-el->

sabio-cotejadas-con-varios-codices-antiguos-por-la-real-academia-de-la-historia-tomo-1-partida-primer-a--0/html/01f29d9e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_6.htm

Rey Hammurabi. (1200 a. C.). Código de Hammurabi.

Rico Puerta, L. (2013). *Teoría general del proceso* (Tercera ed.). Bogotá: Leyer.

Rinaldoni Villareal, G. (2014). *Las pruebas por Declaración de parte y la necesidad de superar los fósiles jurídicos*. Mendoza.

Rivera Morales, R. (2002). *Las pruebas en el derecho venezolano*. San Cristobal: Editorial jurídica J. Santana - Ediciones Liber.

Rocha A., A. (1967). *De la prueba en el derecho*. Bogotá: Lerner.

Rocha, A. (1967). *De la prueba en derecho* (Quinta ed., Vol. I). Bogotá: Lerner.

Rodríguez, G. H. (1977). *Derecho probatorio colombiano Compendio sobre pruebas civiles, penal, laborales y contencioso administrativas* (Segunda ed.). Bogotá: Librería del profesional.

Rodríguez, G. H. (1990). *Curso de derecho probatorio Compendio Pruebas Civiles, penales, laborales y contesioso administrativas* (Sexta ed.). Bogotá: Librería del profesional.

Rodríguez, G. H. (1990). *Curso de Derecho Probatorio. Sexta Edición*. Bogotá D.C.: Ediciones Librería El Profesional.

Rojas Gómez, M. (2014). De las declaraciones. En Instituto Colombiano de Derecho Procesal, *Código General del Proceso Comentado*. Bogotá D.C.

Rojas Gómez, M. (2015). *Lecciones de derecho procesal Pruebas civiles* (Vol. III). Bogotá: ESAJU.

Rueda Uribe, P. N. (1973). *Regimen probatorio Comentarios*. Bogotá: ITALGRAF.

Sanabria Villamizar, R. J. (2015). Análisis de los medios de prueba testimonial y pericial en el Código General del Proceso: Un estudio desde la experiencia procesal penal. *Revista Estudios de Derecho*, 72(160), 19-50.

Sentencia 028. (27 de julio de 1999). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. *M.P.: Nicolás Bechara Simancas*. Bogotá D.C., Colombia: Expediente N° 5195.

Sentencia Apelación 00498-02. (16 de mayo de 2017). Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. *M.P.: Julia María Botero Larrarte*. Bogotá D.C., Colombia: Radicado No. 11001-31-03-038-2011-00498-02.

- Sentencia C-559. (20 de Agosto de 2009). Corte Constitucional. Sala Plena. *M.P.: Nilson Pinilla Pinilla*. Bogotá D.C., Colombia: Expediente D-7592.
- Sentencia C-621. (30 de septiembre de 2015). Corte Constitucional. Sala Plena. *Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub*. Bogotá D.C., Colombia: Expediente No. D-10609.
- Sentencia C-927. (12 de julio de 2000). Corte Constitucional. Sala Plena. *M.P.: Alfredo Beltrán Sierra*. Bogotá, Colombia: Expediente D-2807.
- Sentis Melendo, S., & Ayerra Redin, M. (1954). *Procedimiento Civil Romano*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- Taruffo, M. (2008). *La prueba*. Madrid: Marcial Pons.
- Taruffo, M. (2010). *Simplemente la verdad: el juez y la construcción de los hechos*. Madrid: Marcial Pons.
- Técnica probatoria*. (1989). Escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla.
- Tejeiro Duque, O. A. (2015). Confesión, interrogatorio y declaración de parte. *XXXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal*, 561-570.
- Ur-Nammu de Ur. (2112 - 295 a. C.). Código de Ur-Nammu.
- Van Rhee, C. (2011). Evolución del Derecho Procesal Civil en Europa: cómo el juez activo se convirtió en lo normal. *Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política*, 2(2), 11-40.
- Vegas Montaner, L. (2004). La Ley en el antiguo Israel. *Revista de Ciencias de las Religiones*, 119 - 141.
- Verdugo Marín, F. (2010). Declaración de la parte como medio de prueba. *Revista Ius et Praxis*, 16(1), 125-170.
- Wigmore, J. (1915). *A Supplement to a treatise on the system of evidence in trial at common law*. Boston: Little, Brown and Company.
- Wigmore, J. H. (1915). *A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at common law Statutes and judicial decisions 1904 - 1914* (Vol. II). Boston, United States of America: Little, Brown and Company.
- Yañez Meza, D. A. (2014). La investigación jurídica: necesidad de la ficha de análisis jurisprudencial en el arte del derecho. En D. Clavijo Cáceres, D. Guerra Moreno, & D. A. Yañez Meza, *Método, metodología y técnicas de la investigación aplicadas al derecho*

(Primera ed., págs. 77-103). Bogotá D.C., Colombia: Grupo Editorial Ibáñez & Universidad de Pamplona.

Yáñez Rueda, Á. d., & Laguado Serrano, C. E. (2014). La prueba estadística ante los tribunales internacionales. *Revista Academia & Derecho*(9), 111-152.

ANEXOS

Anexo A. Formato de entrevista

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS JUDICIALES

Nombre del entrevistado	
Cargo que desempeña	
Ciudad	
Fecha	

1. Autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión.

- 1.4. ¿Desde el régimen probatorio del Código General del Proceso se puede determinar la autonomía del medio de prueba de la declaración de parte de la confesión?

NO:

- 1.4.1. ¿Por qué cree que el Código General del Proceso los establece como medios de prueba autónomos e independientes?
- 1.4.2. Si estamos bajo un sistema de libertad probatoria, ¿Cuál sería la justificación (argumento jurídico) para no admitir el decreto y posterior práctica de este medio de prueba de forma autónoma?
- 1.4.3. El **artículo 191** del Código General del Proceso en su inciso final establece que “La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas ¿Cómo considera que debe interpretarse esta disposición?
- 1.4.4. Apreciaciones finales.

SÍ:

1.2.3. ¿En qué radica su diferencia?

2. La teleología de la declaración de parte en el Código General del Proceso.

- 2.6. ¿Cuál es la finalidad que persigue el Código General del Proceso al establecer la autonomía entre la declaración de parte y la confesión?
- 2.7. ¿En qué medida se cumplen los principios de eficacia, economía y eficiencia procesal cuando se practica el medio de prueba de la declaración de parte en los procedimientos adelantados en su jurisdicción o especialidad?
- 2.8. ¿Según su especialidad o jurisdicción, en qué procesos (medios de control) resultaría idóneo el medio de prueba de la declaración de parte?

3. Solicitud de declaración de parte a la propia parte.

- 3.3. ¿Es posible la solicitud, decreto y práctica de la declaración de la misma parte?

De ser negativa la respuesta:

- 3.3.1. Si el Código General del Proceso adoptó un sistema de libertad probatoria, (Artículo 165)
¿Cuál sería el argumento jurídico para no admitir el decreto de este medio de prueba?

4. Práctica de la declaración de parte.

- 4.9. ¿Conforme a qué reglas (medio o instrumento idóneo) debe ser practicada la declaración de parte? ¿Cree que debe limitarse el número de preguntas a realizar en la práctica de este medio probatorio?
- 4.10. ¿Es posible que de la declaración de la propia parte pueda deducirse confesión?
- 4.11. ¿Cuál es la etapa procesal en la que se debe practicar la declaración de parte?
- 4.12. ¿Se puede dar por absuelto con el interrogatorio exhaustivo que obligatoriamente el juez debe realizar en la audiencia inicial?

Anexo B. Formato de ficha de análisis jurisprudencial

Juez		Sala		S e n t e n c i a		Expediente	
M.P.		Caso					
Fecha 1		Derechos parte demandante	Derechos tutelados explícita/	Derechos tutelados implícita/			
Fecha 2							
Fecha 3							
Fecha 4							
Fecha 5							
Fecha 6							
Fecha 7							
Problema jurídico							
Sujeto de especial Protección		Tutela 1ra o Única instancia	Tutela 2da instancia		Revisión		

Entidades vinculadas en 1ra instancia		Entidad es vinculad as en 2da instancia		Entida des vinculad as en revisión	
Entidades vinculadas en revisión			Entidades que reciben ordenes		
Hechos amenazantes o vulnerantes o relevantes en el caso			Pruebas aportadas por las partes del proceso		
Pruebas aportadas jueces de instancia			Pruebas aportadas Corte		

				Constituci onal	
Pretensión		Resisten cia		Orde nes explíc itas	
Apoyo y vigilancia en cumplimiento de la Sentencia Impulso de investigaciones fiscales Impulso investigaciones disciplinarias Impulso investigaciones penales					
Normatividad aplicable			<i>Ratio decidendi</i>		
CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN					

Anexo C. Formato de análisis normativo

Ley:		Año:
Tema que regula:		
Fecha de expedición:	Fecha de entrada en vigencia:	
Medio de publicación:		
Artículos objeto de análisis:		
Análisis:		

FICHA JURISPRUDENCIAL

Juez		Sala	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil	Sentencia		Expediente	2011- 00498
M.P.	Julia María Botero Larrarte	Caso	Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (TELMEX COLOMBIA S.A.), por intermedio de apoderado judicial, en contra del auto proferido el 1° de marzo de 2017, por medio del cual se niega la práctica del interrogatorio de parte a su representado.				
Fecha 1		Derechos parte demandante	Derechos tutelados explícita/		Derechos tutelados implícita/		

Fecha 2						
Fecha 3						
Fecha 4						
Fecha 5						
Fecha 6						
Fecha 7						
Problema jurídico	¿Es posible recaudar el interrogatorio de la propia parte?					
Sujeto de especial Protección		Tutela 1ra o Única instancia		Tutela 2da instancia		Revisión
Entidades vinculadas en 1ra instancia		Entidades vinculadas en 2da instancia		Entidades vinculadas en revisión		

Entidades vinculadas en revisión		Entidades que reciben ordenes	
Hechos amenazantes o vulnerantes o relevantes en el caso		Pruebas aportadas por las partes del proceso	
Pruebas aportadas jueces de instancia		Pruebas aportadas Corte Constitucional	
Pretensión	Resistencia	Ord	enes explícitas
Apoyo y vigilancia en cumplimiento de la Sentencia			
Impulso de investigaciones fiscales			

Impulso investigaciones disciplinarias		
Impulso investigaciones penales		
Normatividad aplicable	Código General del Proceso artículos 165, 176 y 198.	Ratio decidendi
		La limitación que se establecía en el artículo 203 del CPC de solicitar el interrogatorio sólo respecto de la parte contraria, no se reprodujo en el Código General del Proceso, amén de que el artículo 191 de este estatuto impone que la valoración de dicha declaración se realice “de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”. Bajo esta perspectiva, la decisión recurrida soslaya los preceptos normativos recién traídos a colación.
CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN		
La providencia bajo análisis realiza el estudio del recurso de alzada interpuesto por TELMEX COLOMBIA S.A. contra el auto que niega el decreto del interrogatorio de parte del representante legal de la empresa, para ello el <i>Ad quem</i> expone que a diferencia de lo previsto en el artículo 203 Código de Procedimiento Civil, en el que expresamente se señalaba que el interrogatorio sólo era procedente respecto de la parte contraria, el Código General del Proceso en su regulación ya no contempla dicha limitación en el artículo 198 que regula la solicitud de la prueba en comento.		
Así mismo, advierte que en el artículo 191 del CGP se impone al juez el deber de valorar tal declaración de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, lo que implica una remisión a lo dispuesto en el artículo 176 de la misma codificación en el que se establece las reglas de acuerdo a las cuales deben ser apreciadas las pruebas. Sostiene todo lo anterior		

acudiendo también a la doctrina nacional y específicamente al pronunciamiento del autor Marco Antonio Álvarez quien afirma que “con estas disposiciones se le abre paso –por fin- al saber de las partes, sin miramiento alguno”.

De lo expuesto en las consideraciones de la providencia y de lo resuelto en ella, se puede afirmar que con el Código General del Proceso se ha generado un cambio en el papel que desempeña la parte en la producción de la prueba, pues ya ésta, podrá hacer uso de su propio dicho para producir conocimiento que sea útil a la solución de la controversia.

FICHAS DE ANÁLISIS LEGAL

LEY: 105		AÑO: 1931
TEMA QUE REGULA: Organización judicial y procedimiento civil		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 de octubre de 201		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 24 de octubre de 1931
MEDIO DE PUBLICACIÓN: Diario Oficial No 21.823		
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 603-629		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte entendido como un instrumento a partir del cual se configuraba la confesión, mas no como un medio de prueba distinto a esta última. Identificación de un sistema de valoración de prueba o tarifa legal, a partir del cual los hechos que no reunieran los requisitos para considerarse confesos, no eran apreciados en la valoración a cargo del funcionario judicial.		

LEY: Decreto 1400		AÑO: 1970
TEMA QUE REGULA: Actuaciones y Decisiones Judiciales y Procesales		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/08/1970	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 01/07/1971	
MEDIO DE PUBLICACIÓN: Diario Oficial 33150		
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 194 a 210		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte entendido como un instrumento a partir del cual se configuraba la confesión, mas no como un medio de prueba distinto a esta última. Implementación del sistema de valoración de sana critica con gran influencia de la tarifa legal aún.		

LEY: 1564		AÑO: 2012
TEMA QUE REGULA: La actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios.		
FECHA DE EXPEDICIÓN: Julio 12 de 2012	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	
MEDIO DE PUBLICACIÓN: Diario Oficial 48489		
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: SECCIÓN TERCERA, TÍTULO ÚNICO, CAPÍTULO I, II, III, V		
ANÁLISIS: Aplicación mayoritaria del sistema oral y por audiencias, acogiendo una mixtura entre el sistema escrito y oral.		

Adición de forma mayoritaria del sistema de valoración de la sana crítica y libre valoración de la prueba.

Autonomía del medio de prueba de la declaración de parte frente a la confesión.

Principio de libertad probatoria.

LEY: Código Procesal Modelo para Iberoamérica		AÑO: 1988
TEMA QUE REGULA: La actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios.		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de mayo de 1988	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 27 de mayo de 1988	
MEDIO DE PUBLICACIÓN: Diario Oficial 48489		
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: CAPITULO I, II, III, V		
<p>ANÁLISIS:</p> <p>“En cuanto a los MEDIOS DE PRUEBA, se establece a texto expreso la regulación de los más usuales y frecuentes y, también, la previsión que permite la utilización de todos los no previstos expresamente, excepción hecha de ser prohibidos por la Ley (art. 136-2).</p> <p>En textos específicos, se regula la declaración de parte, las reproducciones y experimentos, la prueba por informe, siguiendo los modelos de los más modernos Códigos del área (Argentina, Colombia, Guatemala, etc.).” (Negrita fuera del texto).</p>		

LEY: N° 15.982		AÑO: 1988
PAÍS: Uruguay		
TEMA QUE REGULA: Código General del Proceso		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 de octubre de 1988		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 14 de noviembre de 1988
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 42, 148 - 153		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte y su autonomía con el medio de prueba de la confesión. Estudio e identificación de reglas de la fase probatoria del medio de prueba de la declaración de parte: Solicitud; Decreto; Práctica y; Valoración		

LEY: 01		AÑO: 2000
TEMA QUE REGULA: Ley de Enjuiciamiento Civil		
PAIS: España		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/01/2000		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 08/01/2001
MEDIO DE PUBLICACIÓN: <BOE> núm. 7		
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 299 - 315		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte y su autonomía con el medio de prueba de la confesión. Estudio e identificación de reglas de la fase probatoria del medio de prueba de la declaración de parte: Solicitud; Decreto; Práctica y; Valoración		

LEY: Decreto No. 211		AÑO: 2007
TEMA QUE REGULA: Código Procesal Civil		
PAIS: Honduras		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/02/2007		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 20/02/2007
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 251 - 268		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte y su autonomía con el medio de prueba de la confesión. Estudio e identificación de reglas de la fase probatoria del medio de prueba de la declaración de parte: Solicitud; Decreto; Práctica y; Valoración.		

LEY: 439		AÑO: 2013
TEMA QUE REGULA: Código Procesal Civil		
PAIS: Bolivia		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/11/2013		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 19/11/2013
MEDIO DE PUBLICACIÓN:		
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 144, 145, 156 - 166		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte y su autonomía con el medio de prueba de la confesión. Estudio e identificación de reglas de la fase probatoria del medio de prueba de la declaración de parte: Solicitud; Decreto; Práctica y; Valoración.		

LEY: 1556		AÑO: 1902
TEMA QUE REGULA: Código de Procedimiento Civil		
PAIS: Chile		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 28/08/1902		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 30/08/1902
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 382 - 402		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte y su autonomía con el medio de prueba de la confesión. Estudio e identificación de reglas de la fase probatoria del medio de prueba de la declaración de parte: Solicitud; Decreto; Práctica y; Valoración.		

LEY: 902		AÑO: 2015
TEMA QUE REGULA: Código Procesal Civil de la República de Nicaragua.		
PAIS: Nicaragua		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/ 10/ 2015		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 09/ 10/ 2015
MEDIO DE PUBLICACIÓN: Gaceta Oficial N°191		
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 254 - 266		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte y su autonomía con el medio de prueba de la confesión. Estudio e identificación de reglas de la fase probatoria del medio de prueba de la declaración de parte: Solicitud; Decreto; Práctica y; Valoración.		

LEY: Código Orgánico General De Procesos		AÑO: 2015
TEMA QUE REGULA: Código Orgánico General De Procesos		
PAIS: Ecuador		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/ 05/ 2015		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 22/ 05/ 2015
MEDIO DE PUBLICACIÓN: Registro Oficial N° 506		
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 174 - 187		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte y su autonomía con el medio de prueba de la confesión. Estudio e identificación de reglas de la fase probatoria del medio de prueba de la declaración de parte: Solicitud; Decreto; Práctica y; Valoración.		

LEY: Código de Procedimiento Civil		AÑO: 1990
TEMA QUE REGULA: Código de Procedimiento Civil		
PAIS: Venezuela		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/ 09/ 1990		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 18/ 09/ 1990
MEDIO DE PUBLICACIÓN: Gaceta Oficial N° 4.209		
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 399 – 400, 403 - 419		
ANÁLISIS: Análisis del medio de prueba de declaración de parte y su autonomía con el medio de prueba de la confesión. Estudio e identificación de reglas de la fase probatoria del medio de prueba de la declaración de parte: Solicitud; Decreto; Práctica y; Valoración.		

LEY: 13.105		AÑO: 2015
TEMA QUE REGULA: Código Procesal Civil		
PAIS: Brasil		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/03/2015		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 16/03/2015
ARTÍCULOS OBJETO DE ANÁLISIS: artículos 385 - 395		
ANÁLISIS: <p>Análisis del medio de prueba de declaración de parte y su autonomía con el medio de prueba de la confesión.</p> <p>Estudio e identificación de reglas de la fase probatoria del medio de prueba de la declaración de parte: Solicitud; Decreto; Práctica y; Valoración.</p>		